



**CUBA
POSIBLE**

Un laboratorio de Ideas

PUBLICACIÓN
Febrero 2018 **59**

**LA NUEVA GEOPOLÍTICA Y EL FIN
DE LA PAX AMERICANA**

**LA NUEVA GEOPOLÍTICA Y EL FIN
DE LA *PAX AMERICANA***

www.cubaposible.com

JUNTA DIRECTIVA:

Roberto Veiga González, Director General y Miembro del Diálogo Interamericano.

Lenier González Mederos, Subdirector General y Director de Comunicación y Extensión.

Pedro Monreal González, Director Académico.

Pavel Vidal Alejandro, Director del Consejo Asesor Internacional.

Julio Antonio Fernández Estrada, Director de Análisis.



1. VENEZUELA

01

VENEZUELA: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN SU ETAPA FINAL

Por Domingo Amuchástegui

04

VENEZUELA: CLAVES PARA UNA CRISIS

Por Luis Carlos Battista

07

VENEZUELA: RESULTADOS Y POSIBLES ESCENARIOS

Por Domingo Amuchástegui

12

“JÚPITER TRONANTE” Y LA INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

Por Domingo Amuchástegui

2. RELACIONES

CUBA-ESTADOS UNIDOS

14

CUBA Y ESTADOS UNIDOS: AVANCES Y RETROCESOS

Por Eugenio R. Balari

17

LA GUERRA DE LOS DECIBELES

Por Domingo Amuchástegui

20

TRUMP Y EL “AÑO DE LA ZANAHORIA”: POLÍTICA INTERNA, *RUSSIANGATE*, EL NIETO DE KIM IL SUNG Y CUBA

Por Che Serguera Lagache, Camilo Serguera Navarro y Jorge Serguera Navarro

36

EL MUNDO A FAVOR DE CUBA Y EN CONTRA DEL BLOQUEO/EMBARGO

Por Eugenio R. Balari

3. OTROS TEMAS

INTERNACIONALES

38

AMÉRICA LATINA: ¿VIRAJE A LA DERECHA O RECUPERACIÓN DE LA IZQUIERDA?

Por Domingo Amuchástegui

48

LA CENTRODERECHA Y EL “CAMBIO CULTURAL” ARGENTINO

Por Gabriel Vommaro

55

EL DILEMA DE UNA “CONTINUIDAD CON CAMBIOS”: LENIN MORENO EN SUS PRIMEROS DÍAS

Por Manuela Celi Moscoso

65

LA DERROTA DE *TRUMPCARE*

Por Carmelo Mesa-Lago

68

**EL LUGAR DE CUBA EN EL DEBATE POLÍTICO BRA-
SILEÑO**

Por Joana Salém

73

**CUBA, ESTADOS UNIDOS Y LA ASAMBLEA GENE-
RAL DE LA ONU**

Por Eugenio R. Balari

75

**EL PAPEL DE LA IDEOLOGÍA EN LA POLÍTICA
EXTERIOR CUBANA**

Por Luis Carlos Battista

78

**TRUMP Y SU ADMINISTRACIÓN LE DAN LA ESPAL-
DA A LAS CIENCIAS AMBIENTALES**

Por Eugenio R. Balari

81

AUTORES

Por Domingo Amuchástegui

Para empezar, aclaro que no pretendo en unas pocas líneas hacer un análisis “de fondo” de la crisis económica y política en Venezuela. Desde el triunfo del chavismo, esta “crisis” no ha dejado de ser otra cosa que una “guerra sucia” permanente, que ha echado mano a todos los recursos posibles: golpe de Estado, caos económico con el paro de PDVSA, intentos de sabotajes parlamentarios y choques callejeros cargados de violencia (buscando beneficiarse del colapso económico que sobrevino luego de la caída de los precios del petróleo, a fines del 2013). En la revista *Temas*, hace más de un año, se abordó la temática venezolana desde tres perspectivas diferentes (incluida la mía), desde la que cualquier lector interesado puede incursionar en una lectura crítica. Mi más reciente actualización sobre este tema puede ser leída en *Cuba Standard* del mes de julio. En la presente aproximación, a escasos días del 30 de julio, me limito a abordar los elementos claves que habrán de reflejarse en la votación del 30 de julio para elegir a los 564 constituyentistas que deberán acordar una remodelación de la institucionalidad chavista original (y cuyos resultados serán sometidos posteriormente a referendo popular).

1. Grotesca fabricación mediática. Los poderes mediáticos, de manera sistemática, repiten las mismas imágenes de una Venezuela turbulenta, violenta, con muchos miles reclamando la caída del Gobierno chavista mediante vías y mecanismos múltiples, pero con un eje central: la violencia en las calles. ¿Dónde ha transcurrido semejante violencia? Abrumadoramente en las calles de Caracas y en muy pocos otros centros urbanos próximos a esta. Y en Caracas, esencialmente, en los sectores del este, en Altamira y Chacao, donde se concentran los grupos más adinerados del país, promotores del repetido “esquema violento”, cada vez con números más reducidos. El occidente de Caracas es la otra cara (que ni se menciona, ni se destaca por dichos poderes mediáticos). Pero, más allá (hacia las ciudades del oriente, de los Andes y de occidente y del sur), los testimonios gráficos y manipulaciones mediáticas se quedan con las ganas de proyectar una imagen real a escala nacional. Y las imágenes repetidas hasta el desgaste son de Caracas y sus alrededores. Examinemos algunas cifras: Venezuela es hoy un país donde el 90 por ciento de la población reside en áreas urbanas y, de acuerdo a la oposición violenta, ella dice contar con el 85 por ciento del apoyo popular. Si esto fuera así, la violencia estaría desatada en el grueso o en todas las ciudades del país. Si esto fuera así, repito, los resultados de su maniobra plebiscitaria hubieran sido catastróficos para el gobierno de Maduro. Y no lo fue. Más allá de las denuncias y evidencias de prácticas fraudulentas de todo tipo en su maniobra plebiscitaria, informaron haber obtenido 7,1 millones. Como destacó un observador británico, esto representó una pérdida de 600,000 votos con respecto a los obtenidos en su última elección; y muy lejos y muy por debajo del 50 por ciento de un electorado registrado (que bordea los 20 millones).

2. Respecto a los intentos de huelga general y “trancazo” (cierre de todas las vías vehiculares, paralizar el transporte), ¿qué nos muestran los poderes mediáticos (locales e internacionales) acreditados en Venezuela? *El Nacional*, de Caracas, los exalta, pero basado en voceros del partido *Voluntad Popular* (encabezado por Leopoldo López, quien representa, hasta hoy, la alternativa de la violencia golpista). De los 8 videos e igual número de fotos en su edición de julio 25, las localidades y urbanizaciones que aparecen respaldando el paro, seis son en los sectores Altamira, Chacao y algunas ciudades del Estado Miranda. ¿Y el resto del país? Bien gracias, en total normalidad. Pasando a otro periódico no menos influyente, *El Universal*, el término predominante en sus artículos y análisis ha-

blan de “paro parcial” o “acatado sólo parcialmente”. Fotos y videos casi repiten las mismas escenas de *El Nacional*. El ex-candidato presidencial (y en una perspectiva bien diferente a la de López), en son de victoria, habla de exitosos resultados del paro “en algunas ciudades del país”, según aparece en *El Universal*. ¿En cuántas ciudades? ¿Son las más importantes? No especifica en lo absoluto. La frase “algunas ciudades” es una formulación en lengua castellana bastante vaga, que sugiere pocas o muy pocas. En Occidente, Cordillera, Oriente y Sur; ¡nada! Hay que preguntarse: ¿es ésta la manera de manifestarse el respaldo del 85 por ciento o de siete millones de electores? No se trata de intentar disminuir la presencia de una corriente opositora importante, con sus bases, argumentos y seguidores, pero lo que sí se ha venido haciendo cada vez más evidente es el debilitamiento progresivo de la vertientes opositoras que han venido alimentando la opción violenta y golpista, llamando inútilmente a las Fuerzas Armadas a sublevarse y quebrar así la unión cívico-militar.

3. Una perspectiva bien distinta. *Torino Capital* (una financiera transnacional registrada en Wall Street y que ha venido operando por años en Venezuela, pues se especializa en economías emergentes) acometió un estudio reciente con el auxilio de Datanálisis, una encuestadora bien hostil al chavismo desde el primer día, y entre sus resultados más notables revela que el 63 por ciento está en contra de que la oposición apoye sanciones económicas de parte de Estados Unidos, y sólo un 26 por ciento apoya semejante curso de acción. El estudio de *Torino Capital* enfatiza que semejantes resultados otorgan al Gobierno “mayor credibilidad al argumento de que la crisis económica se debe a las acciones implementadas por la oposición en vez de sus propios errores de política económica” (*El Universal*, 25/7/2017). Las medidas y amenazas recientes desde Washington surten así un efecto muy contrario al esperado o deseado por la Administración o los sectores de oposición violenta.

4. Encuestas a gusto de consumidor. Tanto en Estados Unidos, como en Miami, como en Venezuela, se citan encuestadoras diversas para respaldar los objetivos golpistas. Las que difieren en sus estudios y resultados se silencian total y absolutamente. Otra grotesca fabricación mediática. Entre las encuestadoras más prestigiosas y rigurosas, se destaca *Hinterlaces*, tal vez la más silenciada. No pertenece al chavismo, ni está comprada por éste, ni son socialistas ni comunistas encubiertos. Su director es uno de los académicos más serios en este campo, Oscar Schémel. Este no es un hombre de izquierdas; es un empresario exitoso y junto a un amplio sector empresarial participa de la constituyente tras ser elegido por su circunscripción, como parte de un bloque de empresarios que participan de la misma. Algunos de sus números merecen especial atención:

- 54 por ciento considera que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se propone mejorar la constitución chavista de comienzos de siglo a fin de no perder las conquistas sociales hasta alcanzadas.
- 59 por ciento se inclina por esperar normalmente a las elecciones presidenciales de fines del 2018.
- 79 por ciento se pronuncia a favor de quien quiera votar que vote; sólo 18 por ciento está a favor de la opción violenta para impedir la celebración de la ANC.
- 61 por ciento rechaza el argumento de que la nueva constitución será una constitución de tipo comunista, al estilo de Cuba; 36 por ciento piensan sí lo será.
- 55 por ciento está en desacuerdo con la idea de que Maduro pretende con la ANC prolongarse en el poder; 41 por ciento sí lo piensa.

5. El director de *Hinterlaces*, Schémel, ha formulado algunas conclusiones que apuntan a un panorama muy distinto del tratan de vendernos e imponernos los poderes mediáticos:

- La manifestación pacífica y ordenada contraria al plebiscito (16/7/2017) tuvo “más convocatoria que ninguna marcha, trancazo o guarimba”.
- “La oposición y los factores externos que la dirigen son parte de un plan insurreccional violento contra el Gobierno Bolivariano bajo la tesis de ‘Cerco y Asfixia’ de Venezuela”.
- Sólo “si las fuerzas revolucionarias y chavistas consiguen asociar este proceso constituyente a la posibilidad concreta, o la esperanza de resolver los problemas más urgentes de las mayorías populares como el desabastecimiento, la inflación y la inseguridad, la paz y la estabilidad del país, entonces lograrán la participación necesaria”.
- Concluyó: “Creo que la ANC es un espacio ineludible para la participación de todos para el diálogo y el debate constructivo. Para la transformación de los conflictos y las diferencias en oportunidades para el desarrollo del país y el bienestar de los venezolanos”.

6. Y cuando se habla de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), donde conviven 23 agrupaciones políticas de muy diversos matices y filiaciones, la mayor parte del tiempo de quien hablan es de la *Voluntad Popular* y de López. Ya no pocos de estos partidos, desconectados de la opción violenta y golpista, se inclinan por el diálogo y la negociación con el Gobierno, mientras miembros de bases y dirigentes, han sido elegidos como constituyentes. Desde hace tiempo la MUD (como lo fue años atrás la Coordinadora Democrática en contra de Chávez) ha sido caracterizada como una gran “olla de grillos”, donde prevalecen rivalidades y aspiraciones presidenciales de más de media docena de nombres. Estudios de académicos prestigiosos de la Universidad Católica Andrés Bello, han insistido en este recurrente patrón y cómo el mismo no hace sino rendir beneficios al Gobierno. El propio Papa Francisco hubo de consignar la influencia nociva de semejante patrón para alcanzar un proceso satisfactorio de diálogo y negociación.

Si tomamos en cuenta estos criterios y datos (que nos tratan de escamotear sistemáticamente) podemos razonablemente esperar un resultado positivo y de avance en el futuro cercano de Venezuela.

Por Luis Carlos Battista

En 2014, el ministro Giordani, en una carta pública luego de su renuncia a la cartera de Planificación, expresó su propuesta de una reducción del gasto público, y la corrección de derroches y corrupciones en Venezuela. En la misma misiva señalaba que el entonces recién electo presidente Nicolás Maduro inició una nueva oleada de grandes gastos sin los requisitos diseñados, y con el agravante de ser aprobados improvisadamente por el “Gobierno de Calle”, sin estudio previo. El gobierno de Maduro ha seguido este mantra hasta nuestros días.

Desde el punto político, el “Gobierno de Calle” puede entenderse como necesario para el entonces recién electo Presidente. Este plan de recorrido nacional tuvo el objetivo de mostrar un gobierno dinámico, cercano a las necesidades y solicitudes de los electores, en especial de los sectores más humildes que son, al mismo tiempo, los más fieles al proyecto político del chavismo. Si bien el recién inaugurado mandatario necesitaba un baño de masas y arrancar con una agenda activa, el error se presenta en no haberlo organizado eficientemente con un presupuesto basado en la realidad económica del país.

A pesar de que para 2017 el presupuesto nacional fue calculado con base en un precio de 30 dólares el barril, algo acertado dado el bajo precio del petróleo en el mercado internacional, el gobierno venezolano mantiene una cuantiosa deuda soberana. Es por ello que se ha visto obligado a vender activos y a reducir la importación de alimentos y medicinas para poder conservar reservas con qué pagar a sus acreedores. En la calificación del riesgo de deuda soberana, Venezuela es la segunda economía más baja a nivel mundial, sólo superando a Puerto Rico. Se suma a ello el impacto negativo que ha tenido para la economía la presencia de un control de divisas con varias tasas cambiarias, siendo preferenciales algunos rubros sobre otros, desestabilizando el mercado interno. La dependencia venezolana del petróleo no ha sido beneficiosa para el chavismo. El error de Hugo Chávez, primero y Nicolás Maduro, luego, es haber seguido utilizando el modelo rentista usado por gobiernos anteriores y no haber promovido la diversificación de exportaciones del país. En este sentido, se desaprovecharon oportunidades como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Desde el inicio de su mandato, el presidente Maduro tuvo un llamado de atención que decidió ignorar. Ganó su primera elección con el 50 por ciento de los votos, frente al 48 por ciento de Henrique Capriles. Maduro llamó entonces célebramente “mitad mayoritaria” a algo que hubiera hecho a un político razonable buscar puntos de contacto entre su plataforma y la plataforma opositora. A pesar de llamar posteriormente a un diálogo con la oposición, no se llegó a ningún resultado dada la poca disposición a ceder posición por parte de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El segundo llamado de atención de los electores venezolanos ocurrió en las elecciones legislativas de 2015, cuando el PSUV perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. La rápida juramentación de los nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia caldeó los ánimos de los diputados opositores. Tras ello ha seguido una guerra declarada entre los distintos poderes del Estado venezolano. La Asamblea Nacional ha negado las solicitudes realizadas por el gobierno como la aprobación

de “Decretos de Emergencia” y el Tribunal Supremo ha usurpado funciones legislativas que no le corresponden, siendo cúspide la célebre sentencia 156, donde este se atribuye competencias de la Asamblea Nacional venezolana. Posteriormente el propio Tribunal Supremo de Justicia decidió anularla parcialmente ante la negativa que despertó tanto nacional como internacionalmente.

La oposición acusa al Consejo Nacional Electoral y al sistema judicial de no mantener una independencia frente al ejecutivo, al bloquear distintas acciones democráticas por parte de la oposición. Las respuestas de estos poderes han sido de dudosa legalidad y apego a la Constitución. Tal ha sido el caso de la suspensión del referendo revocatorio y el aplazamiento sin razón sustancial de elecciones regionales previstas para octubre de 2016, la restricción de derechos a dirigentes opositores y diputados, así como la violación de su inmunidad parlamentaria.

La pena impuesta a Leopoldo López ha sido calificada como ilegal por el “Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas” sobre detención arbitraria (el mismo que exigió a Estados Unidos la liberación de los cinco cubanos). El Grupo indicó que “la condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses a puerta cerrada marcado por graves irregularidades, en el que no se respetó el debido proceso legal ni las garantías judiciales”. Además, “[n]o se publicaron los fundamentos de las imputaciones, no se le permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas de descargo que ofreció”. La reciente concesión de prisión domiciliaria intenta aliviar un poco las presiones sobre el gobierno, a la vez que dividir a los barones opositores. [Ya publicado este artículo se anunció por distintos medios noticiosos que la prisión domiciliaria había sido revocada.]

La oposición aún posee el control de varios medios de comunicación, a pesar del recurso de cadena nacional con los que cuenta el gobierno. Numerosas acusaciones de narcotráfico y corrupción pesan contra oficiales de las Fuerzas Armadas y dirigentes del PSUV. Maduro no supera el umbral del 30 por ciento de aprobación en las distintas encuestas, algo que no es único entre los otros mandatarios de la región. Sin embargo, ningún otro, excepto Temer, cuenta con una situación tan contraria para sí.

Cada día de manifestaciones le pasa factura al gobierno. Tal vez el oficialismo espera que terminen como las anteriores, con pocas consecuencias políticas. Al parecer la oposición no está dispuesta a ceder esta vez, pues están en juego sus intereses de clase. Las imágenes de atropellos y represión por parte de las fuerzas del orden son cuantiosas, e igualmente han quedado evidenciados los comportamientos agresivos de manifestantes de la oposición. Ambas partes han caído en exceso y no todas las muertes se le pueden achacar al gobierno. No obstante, producto de la guerra mediática de la oposición contra el mandatario venezolano, los gobiernos vecinos y la opinión pública internacional han retirado su apoyo al gobierno.

Para empeorar el clima político, el presidente ha llamado a una Asamblea Constituyente. Es previsible que restringirá aún más las libertades políticas y civiles en Venezuela. Los procesos constituyentes, por su magnitud y relevancia, requieren movilizar numerosas fuerzas populares y políticas y generar consensos sociales. Al carecer de consenso, este no se realiza en el mejor momento. Por ello, rompiendo definitivamente el principio de legalidad, Maduro marca un punto de no retorno al actuar desconociendo procedimientos establecidos por la propia Constitución en vigor, donde la Asamblea Nacional juega un papel preponderante. Tras la Constituyente, Venezuela muy previsiblemente entrará en la fase de régimen totalitario, aumentando la polarización en el país.

Un nuevo factor en esta escalada de tensión son las acciones y declaraciones de la Fiscal General, Luisa Ortega. La Fiscal representa a un sector del chavismo crítico del actual gobierno, y por ende comprometido con la nación por encima de cuestiones partidistas. Resaltan sus declaraciones respaldando las manifestaciones. Denuncia además la pérdida de la institucionalidad, las presiones sobre

funcionarios públicos violentando el voto libre, violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias sin debido proceso. Su recurso para declarar nulo el llamado a la Constituyente interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia fue negado. El mismo órgano ahora se presta a enjuiciarlo políticamente, acrecentando las dudas sobre la imparcialidad de los magistrados, cuya misma designación es considerada por la Fiscal como nula. Si el juicio político contra la Fiscal avanza, será necesario observar la reacción de esta. Es posible que decida no acatar la decisión judicial.

Algo positivo es que el segundo país con la tasa más alta de homicidios en el mundo no se haya sumido en el caos de una guerra civil, lo cual es casi milagroso dada la alta e ilegal tenencia de armas de fuego entre la población. La extrema polarización que vive el país no es buena señal. Desde el gobierno se ha promovido la paramilitarización de colectivos bajo el argumento de promover la defensa de la patria, lo que podría contribuir a la violencia civil.

El presidente Maduro ha olvidado la máxima maquiavélica de que la política es el arte de saber negociar. A medida que baja la popularidad del gobierno, menos razones tiene la oposición para dialogar. Esta no duda que habrá transición, solo necesita confirmar el momento. Sin embargo, se le puede achacar que tradicionalmente ha carecido de un Proyecto País, salvo la derrota del chavismo. La oposición reconoce que no puede sugerir un regreso a la IV República.

El gobierno probablemente desaprovechó una oportunidad de oro mientras Henry Ramos Allup ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional. Ramos, un socialdemócrata pragmático, y vicepresidente de la Internacional Socialista, cuenta con amplio apoyo y respeto dentro de las fuerzas opositoras. A pesar de ser crítico del chavismo, no ha dudado en reconocerle méritos cuando lo merece. En lugar de apelar a su razonabilidad, algo que podría haber beneficiado al gobierno, se le comenzaron a lanzar ataques que podrían interpretarse como personales.

Maduro debería aprender de José Mujica cuando dice que: “si a la izquierda le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda, porque tendrá que volver a empezar. Y si cometió errores, tendrá que reaprender, y la vida continúa”. Maduro no ha aprendido la lección que dio Hugo Chávez en 2002 cuando abandonó Miraflores para evitar derramamiento de sangre. Demorar su salida solo servirá para acrecentar la violencia.

Publicado originalmente en: <http://revistafal.com/venezuela-claves-para-una-crisis/>

Por Domingo Amuchástegui

La votación en respaldo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como instrumento para encaminar (según el propósito declarado del Gobierno de Nicolás Maduro) al país por un rumbo más ajustado a las nuevas realidades que se enfrentan y que asegure niveles de diálogo, concertación y estabilización, tuvo lugar el pasado 30 de julio. Asistieron, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), poco más de ocho de los casi 20 millones de electores registrados en el padrón electoral. Un amplio sector de la oposición, encabezado por los que han ido agotando todas las modalidades golpistas desde el 2002 y que nunca aceptaron las repetidas victorias electorales del chavismo, desafió mediante el uso de la violencia extrema dicha convocatoria y cuestiona hoy, con idénticas tácticas y medios, los resultados anunciados por el CNE. Examinemos los hechos.

Las vísperas

Figuras dirigentes de la oposición belicosa aseguraban que habría un 90 por ciento de abstención y un 25 por ciento de votos anulados (Delsa Solórzano) y que los votantes no llegarían a 2 millones (Julio Borges, actual presidente de la próxima a desaparecer Asamblea Nacional).

Tales cálculos -súper optimistas- no se basaban en ninguna aproximación responsable y sería en cuanto a enfrentar, de manera pacífica y pactada, la convocatoria. El rechazo confrontacional prevaleció como patrón de conducta desde el primer día. Jugaron la carta de la violencia callejera sostenida con miras a dos grandes objetivos: a) provocar una fractura significativa en las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FFAA), con vista a precipitar una salida golpista exitosa, y b) crear un efecto mediático intimidatorio sobre los sectores dispuestos a salir a votar (susceptible de traducirse en un mayor reforzamiento del tradicional abstencionismo). Este último, el abstencionismo, resulta un fenómeno bien visible ya desde las últimas elecciones presidenciales (los partidos de oposición ganaron 3/5 de los escaños en la Asamblea Nacional, en tanto que Maduro ganó por una escasa fracción y hubo un 25 por ciento de abstención). Sobre esa realidad impactó el colapso económico (resultado del desplome de los precios del petróleo) y las diversas incongruencias (repetidos casos de corrupción y errores dentro del PSUV/Gobierno de Maduro, que se conjugaron entonces para semejantes resultados adversos).

Balance preliminar: en cuanto a los pronósticos de la oposición, el 90 por ciento de abstención no se produjo y en cuanto a los votos anulados todavía no se disponen de las cifras. También es conveniente recordar que en el plebiscito efectuado por la oposición el 16 de julio -más allá de las irregularidades detectadas- se reconoció una votación de 7,1 millones -según corresponsales británicos- y otros se anotan un 7,8 millones. Cualquiera de estas dos últimas, dista muchísimo del repetido anuncio de la oposición de que disponían del 85 por ciento del respaldo popular. En cuanto a provocar una fractura en las FFAA, devino un fiasco total y el Gobierno de Maduro continúa teniendo en “la unión cívica-militar” uno de sus pilares.

Los ángulos legales

Una y otra vez se han levantado voces en diferentes latitudes de nuestro hemisferio (empezando por Washington y pasando luego por Madrid), negándole cualquier legitimidad a la convocatoria de la

ANC. En consonancia, no reconocerían los resultados de dicha constituyente. La Unión Europea (siguiendo la pauta madrileña en materia de política hacia América Latina) se pronunció unánimemente en igual sentido. Preguntémos: ¿cuánta razón o derecho les asiste en esta posición?

La constitución venezolana -aquella que define al Estado, al gobierno, sus instituciones, derechos y deberes- adoptada en 1999, y que no fue objetada en su momento por ninguno de los países antes mencionados, incluye diáfano en sus artículos 347 y 348, el derecho a convocar una asamblea constituyente por parte del Presidente. ¿Dónde está lo ilegal o inconstitucional de parte del gobierno PSUV/Maduro al utilizar este recurso para reformar y reajustar la Constitución de 1999 con los objetivos políticos que intente promover? ¿No es, acaso, lo que hacen todos los países del mundo cuando se proponen una constituyente?

¿Qué nos dice la Carta de la ONU -el máximo foro del concierto internacional posterior a la IIGM- en este terreno? Consagra el derecho de los pueblos a darse la forma de gobierno que mejor estimen, con pleno respeto a su derecho a la autodeterminación y al ejercicio de su soberanía plena, la igualdad entre las naciones y la no injerencia extranjera en sus asuntos internos. Casi nada, comparado con lo que estamos viendo en contra del actual gobierno desde hace buen rato.

Y cuando unos pocos años más tarde se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA), ésta no hizo otra que incorporar entre sus principios rectores -olvidados hasta el día de hoy-, los mismos que figuraban en la Carta de la ONU. Cualquiera que compruebe el Artículo 19 podrá comprobar lo que digo. Entonces, la gran interrogante es: ¿está o no el gobierno PSUV/Maduro en su soberano derecho de acometer la iniciativa de la ACN?

Balance preliminar: Comencemos por la interrogante. El gobierno PSUV/Maduro está en su perfecto derecho de acometer una ANC, por lo que aquellos Estados y gobiernos que se lo cuestionan y rehúsan a reconocerlo, incurren en una seria violación del derecho internacional. Se perfila así la orquestación de un asedio internacional (como lo describe el sociólogo venezolano, empresario y director de la encuestadora *Hinterlaces*, Oscar Schémel), en términos de una campaña internacional de “Cercos y Asfixia”.

Esta tiene entre sus consecuencias más previsibles las siguientes: a) volcar un apoyo total (léase grosera injerencia) a las fuerzas opositoras y a sus facciones más violentas; b) contribuir a desarticular el normal desenvolvimiento de la ANC y de su posterior desarrollo; c) añadir una carga de sanciones económicas que tienden a empeorar la actual situación económica y bloquear los esfuerzos gubernamentales en favor de una recuperación económica y social; d) tiende a anular las gestiones de mediación y diálogo que durante meses estuvo encabezando el ex-presidente del gobierno español, el socialista Rodríguez Zapatero; y e) la totalidad de este clima “de cerco y asfixia” busca, por igual, precipitar un desenlace bonapartista que desemboque en una acción golpista con base en sectores de militares que puedan, eventualmente, ceder ante semejantes presiones.

La votación de la ANC (30 de julio)

Con el anuncio de apenas 8 millones de electores de un total próximo a los 20 millones (para poco más de un 41 por ciento), no es como para echar al vuelo las campanas y cantar victoria. En medio de las circunstancias actuales, devenía tarea titánica bien difícil articular una votación superior al 50 por ciento. No olvidemos, ni tratemos de minimizar, la gravitación negativa de un sector de oposición capaz de desplegar sostenidamente acciones violentas de todo tipo, respaldadas y validadas por una importante concertación de fuerzas hemisféricas encabezadas por Estados Unidos (desde la Administración Obama y continuada por Trump; y por el gobierno español de Mariano Rajoy ani-

mando al resto de las cancillerías de la UE en una dirección similar), unido todo ello a los factores apuntados más arriba y que desempeñan un papel igualmente importante.

La impugnación de los sectores más violentos de la oposición a los 8 millones alcanzados fue instantánea y se ha visto favorecida por las declaraciones de los ejecutivos de una de las empresas clave del proceso electoral (*Smartmatic*), que han cuestionado la validez de alrededor de un millón de los votos emitidos que, según ellos, apunta a un cierto nivel de fraude y que se requería de una auditoría. Servida así una excusa ideal en bandeja de plata, los delirantes de la ultraderecha se lanzaron de inmediato a proclamar que el fraude involucra no el millón puesto en duda por la empresa antes mencionada, sino que se está en presencia de un fraude mayúsculo de más de siete millones de votos y que, consecuentemente, habría votado apenas el 12 por ciento de los electores; lo cual, para no pocos observadores, resulta una monumental exageración.

Balance preliminar: Los 8 millones de votantes (o si se quiere admitir algún nivel de fraude que reduzca dicha cifra a 7 millones), sigue siendo una cifra que no puede ser subestimada ni desestimada. Es más, si resulta legítima la cifra, es aún mayor que en otras ocasiones, desde la primera convocatoria a la ANC de 1999. Y hablo de números redondos y no de cifras porcentuales (recordemos que el chavismo obtuvo entonces 72 por ciento de los votos emitidos en esa primera convocatoria). América Latina y la UE están repletas de ejemplos de gobiernos, asambleas legislativas y referendos donde los números redondos de los vencedores se han quedado por debajo del 50 por ciento, incluso bordeando un tercio en no pocas ocasiones. Por otra parte, no existe todavía un desglose de la filiación política exacta de los 545 constituyentistas, factor éste que limita el diagnóstico.

¿Ha echado mano el gobierno PSUV/Maduro al socorrido recurso del fraude electoral tan “popular” en nuestras tierras de América, la conocida “cañona” o “el pucherazo” con la “magia” de los números? Que le pregunten al PRI, de México, decano en estos menesteres, y otros no menos ilustres. Muy por el contrario, Chávez ganó limpiamente su primera elección presidencial, siendo todas las instituciones de entonces las mismas de la constitución de 1961. Bajo el amparo de la nueva constitución (1999), ganó otras dos presidenciales y otros referendos, amén de la mayoría abrumadora de las gobernaciones de los 23 Estados y las municipalidades. Perdió un solo referendo y lo reconoció; no recurrió a ninguna “cañona” o “pucherazo”. Es más, bajo el chavismo los índices tradicionales de elevado abstencionismo comenzaron a descender, de niveles por encima del 50 por ciento, al 30 por ciento y 25 por ciento; esto es, reflejando una mayor confiabilidad y motivación cívica en el ejercicio electoral. Y si ahora se registra un repunte del abstencionismo más allá del 50 por ciento, las causales de ello hay que buscarlas, fundamentalmente, en la crisis económica existente y las tácticas intimidatorias de la violencia opositora.

Durante la última elección presidencial, Maduro ganó por un pelo. Si como Presidente en ejercicio (tras la muerte de Chávez), y con todos los recursos del gobierno en sus manos, hubiese querido violentar los “numeritos” no hubiera sido muy problemático “sumarse” una cifra más elevada frente a Capriles. Igual para el número de diputados a la Asamblea Nacional. El hecho es que no lo hicieron, reconociendo el muy estrecho margen en la elección presidencial y los resultados bien adversos de las legislativas. ¿Cometer fraude ahora a favor de una cifra que no altera la situación en lo esencial? Porque si voy a cometer un fraude lo hago procurando colocarme, cómodamente, por encima del 50 por ciento (como gustan decir en Estados Unidos: *“If you are going to steal, don’t steal anything small”*; o, en otras palabras: “Si vas a robar, roba en grande y no minucias”).

Y las fuerzas opositoras, en su maniobra plebiscitaria del 16 de julio, se quedaron por debajo de los 8 millones. ¿Dónde se les quedó el 85 por ciento o el 90 por ciento con el que dicen contar una y otra vez? ¿Y por qué semejantes apoyos no se han manifestado a lo largo de más de 15 años de chavismo? Nadie puede desconocer o ignorar la fuerza de la oposición, la que se ha nutrido y fortalecido

con los efectos del colapso petrolero y las debilidades al seno del gobierno PSUV/Maduro. No es eso lo que se discute, sino su pretensión absolutista de monopolio de tesis.

Es un hecho innegable la extrema polarización social y política que vive hoy la sociedad venezolana, escindida en dos bloques con muy limitados espacios intermedios o de convergencia. Pero en dicho contexto es válido preguntarse: ¿por qué si cuentan con el 90 o el 85 por ciento del apoyo popular, no pudieron impedir el proceso electoral conducente a la ANC? ¿Por qué si disponen de tan enorme apoyo popular no participaron de la elección de los 6 mil y tantos candidatos a constituyentistas? Con su 90-85 por ciento hubieran controlado la totalidad de los resultados de la ANC.

Nadie en la oposición, ni sus aliados internacionales, hablan de que inmediatamente después de la ANC habrá un referendo. Si efectivamente los opositores dominan el 90-85 por ciento, ¿quién va a impedir que ellos logren una victoria equivalente a un NO rotundo? Y en las venideras elecciones regionales (repito hasta el aburrimiento), si controlan el 90-85 por ciento como proclaman, ¿qué maniobra fantástica podría arrebatárles el triunfo? ¿Por qué si ellos ensayaron su maniobra plebiscitaria el 16 de julio, no puede el gobierno PSUV/Maduro (y aquellos sectores de la sociedad que lo apoyan), acometer una iniciativa absolutamente constitucional y legal de convocar a una ANC? Si las FFAA no impidieron mediante la violencia, ni atacaron dicho plebiscito (carente de base legal alguna), ni a los que participaron del mismo, pues entonces al gobierno PSUV/Maduro, sus aliados y apoyos, les asiste similar sustentación popular, además de la razón y la ley.

Matices, variantes y escenarios más recientes

Lo primero a destacar, dada su especial importancia, es el “choque” público (casi espectacular) entre importantes figuras dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), donde se coaligan unas 23 formaciones políticas, en su mayoría enfrentadas debido a faccionalismos de todo tipo. El eje del “choque” se concentra en unas declaraciones (publicadas en *El Universal*) de la figura más importante del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup (primer presidente de la Asamblea Nacional en el momento de ganar las 3/5 partes del poder legislativo). Ramos Allup afirmó categórico que participará de todos los procesos electorales, de las regionales, las alcaldías y las presidenciales, subrayando la idea de que: “Sería un error de la oposición no participar de las elecciones pendientes y entregarle a la Revolución Bolivariana, por ausencia de contrincante, esos altos cargos del gobierno del país.

Y no menos categórico fue en aseverar que está “en contra de la formación de un gobierno paralelo y que eso crearía un conflicto con la comunidad internacional”. Ha sido un verdadero choque de trenes su enfrentamiento con dirigentes de la MUD como Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano de Caracas) y el más renombrado Leopoldo López; con Henrique Capriles oscilando hacia Ramos Allup, y que representan los partidos más numerosos dentro de la MUD. Estas “perreras” al interior de la MUD no son nuevas en lo absoluto y ayudaron a desintegrar la Coordinadora Democrática (bloque opositor en contra de Chávez unos años atrás) y representan (junto al apoyo de las FFAA) un capital político muy importante que sigue favoreciendo al gobierno PSUV/Maduro, como han venido apuntando diversos especialistas durante años.

La injerencia de Estados Unidos tuvo, al final del segundo término de Obama, un giro conciliador, negociado entre el Sub-secretario de Estado, Thomas Shannon, y el presidente Maduro. La entrada de Trump pareció alterar drásticamente el rumbo pactado por el de la confrontación, en particular con las sanciones a figuras del gobierno de Maduro y sus bienes en Estados Unidos. Ello implicó la amenaza con un corte total de las importaciones petroleras venezolanas hacia Estados Unidos, el total rechazo al proceso de la ANC, entre otras acciones. No obstante, luego del 30 de julio, la Administración Trump expresó -para sorpresa de muchos- su disposición a continuar dialogando

con el gobierno de Maduro, y que no reconocerían ninguna fórmula de gobierno paralelo (cayendo, con esto, un cubo de agua helada sobre las cabezas calientes que siguen abogando por una especie de engendro de “dualidad de poderes”). Sería interesante poder discernir si fue Ramos Allup quien influyó en moderar en algo a Trump o si fue éste al primero o si fue, en ambos casos, simple sensatez política.

Mientras, sigue fluyendo el petróleo venezolano al mercado norteamericano (800,000 bpd, equivalentes al 49 por ciento de las exportaciones venezolanas); en tanto, las petroleras de Estados Unidos parecen no estar interesadas en lo más mínimo en retirarse del mercado venezolano, patrón de conducta que parecen estar siguiendo la mayor parte de las empresas europeas operando actualmente en Venezuela, según se informa en medios periodísticos europeos.

Por otra parte, el impacto que pudo haber causado la declaración de condena y rechazo de la UE a la ANC ha quedado en entredicho, con no pocas dudas en torno a cómo podrá traducirse en algo efectivo. Para sorpresa de todo el mundo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, se ha empeñado en auspiciar una nueva tentativa de diálogo y negociación, paso inicial tomado después de un intercambio privado con el presidente Maduro. Algunos gobiernos de la UE han expresado ideas parecidas -como los de Italia y Portugal- y ello se traduce en apoyo bien explícito a la variante lanzada por Macron.

Instalada ya la ANC y a punto de comenzar sus trabajos, un analista de muy buena puntería, Leopoldo Puchi, sentenciaba en un excelente trabajo para la encuestadora y destacado centro de análisis *Hinterlaces*: “Para la oposición es la hora de escoger: o la vía que Pinochet utilizó en Chile, o el camino que escogió Violeta Chamorro”. Alude así el autor a dos hitos de especial trascendencia. Primero, al golpe militar encabezado por el general Pinochet contra el gobierno constitucional de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende (septiembre 11 de 1973); golpe facturado por Washington, por el binomio Nixon-Kissinger, e instigado muy en especial por los sectores de ultraderecha de la Democracia Cristiana y agrupaciones empresariales, tras prolongados e intensos meses de sabotaje económico de todo tipo.

El otro caso al que alude Puchi, se refiere a Nicaragua, donde tras ocho años de guerra y sabotaje, promovidos y financiados por Estados Unidos (Administración Reagan), 11 mini-partidos se coaligaron momentáneamente en la llamada “Unión Nacional Opositora (UNO)”, para la contienda electoral de febrero de 1990, llevando a la simbólica figura de Violeta Chamorro como candidata. Los resultados porcentuales fueron entonces 55 por ciento vs. 41 por ciento. Violeta, sus sustentos políticos, y el apoyo de Estados Unidos, tuvieron una duración de apenas dos mandatos y sobrevino entonces el regreso del Sandinismo al gobierno en el 2006; partido que sigue gobernando hasta hoy. Y eso que el Sandinismo nunca tuvo, ni tiene hoy, los enormes recursos de la economía venezolana.

Por último, el factor “PSUV/Maduro”. Si éste es capaz, en primer lugar, de sobreponerse a sus propias debilidades, errores y adversidades acumulados en particular en estos últimos años (leer análisis al respecto en la revista *Temas*), de convertir los resultados de la ANC en esperanza de solución de los acuciantes problemas actuales y de un mejor futuro (como bien apuntara Schémel en su análisis), así como de sumar arreglos pactados con sectores opositores, entonces sería posible avizorar un horizonte de mayor recuperación y estabilización; favorecido todo esto por la lenta recuperación de los precios del petróleo. En caso contrario, una agudización de la crisis cargada de incertidumbres, un deterioro económico, social y político extremo y una eventual salida golpista de signos muy variados, podrían perfilarse en el horizonte. En semejante contexto, se medirá la capacidad de maniobra y recuperación de parte de la dirigencia del “PSUV/Maduro”.

Por Domingo Amuchástegui

Nos guste o no admitirlo, el “vecino de enfrente” es, todavía, la mayor potencia del mundo. Contrariamente a lo que podría esperarse en términos de fomentar la paz y la cooperación, el respeto entre las naciones, la ayuda al desarrollo y otras bondades proclamadas (y muy mal practicadas), el patrón de conducta imperial basado en la intimidación, la injerencia, la agresión y la intervención armada, amén de la rapiña voraz, han distinguido la casi totalidad de la política de este “buen vecino” (como bien lo calificara un ilustre ensayista mexicano, Mario Gill, hace muchos años). Extendernos en esto puede hacer derivar este texto hacia la letanía aburrida y la baba insípida.

Pero (y este es un gran pero con mayúscula), el presidente Trump nos obliga a echar a un lado la letanía y levantar las barricadas ante la oleada monumental de guapería barata que ha entronizado como política de Estado en apenas siete meses en el cargo. No le basta el monumental rollo que ha creado con Corea del Norte (y mi consejo es que no se metan con los coreanos, porque el precio sería incalculable); rollo que las voces más responsables y autorizadas del mundo académico de Estados Unidos y el Reino Unido han cuestionado de punto a cabo. Tampoco la nueva ola de sanciones y amenazas contra Rusia, el alarde con los “coheticos” en Siria, amenazas contra China, y el *show* de “tipo duro” contra Cuba desde la Calle 8 (en espera de las medidas efectivas, o no, que podrá aplicar a partir de fines de septiembre).

De repente, el arrebato de la guapería barata toma como nuevo objetivo a Venezuela, al gobierno PSUV/Maduro. No le ha bastado con la serie de sanciones contra figuras dirigentes, ni las amenazas de cortar el acceso del petróleo venezolano al mercado de Estados Unidos. “Júpiter tronante” sube la parada al máximo y pone en juego la hipótesis de una intervención militar norteamericana en Venezuela. Echemos al vuelo la imaginación y contemplemos el desembarco de los marines por La Guaira o Carúpano, ocupando los pozos petroleros de Maracaibo y el oriente venezolano, y los *Navy Seals* capturando el Palacio de Miraflores en un abrir y cerrar de ojos. Para un guión cinematográfico de Hollywood estaría bueno o, tal vez, uno más del montón, si fuera así de fácil. El policía del mundo, el gendarme internacional, vuelve por sus fueros.

La gran paradoja de la actual jugada de Trump con su amenaza de intervención militar en Venezuela, es que no ha encontrado eco ni siquiera entre los más enconados enemigos internos del gobierno del PSUV/Maduro que (como Henry Ramos Allup y Henrique Capriles) de manera terminante optan por “la salida electoral”, reclaman el fin de la violencia opositora y reconocen que la violencia callejera “se ha enfriado”, perdida su base de apoyo e incapaz de movilizar ninguna fuerza significativa (AFP: “Impotencia, frustración, rabia: la calle se enfrió para la oposición”, 13/8/2017, publicado por *El Nacional*, influyente periódico de la extrema derecha venezolana).

Y lo más decepcionante para Trump es que no sólo las autoridades venezolanas han rechazado enérgicamente tales amenazas, sino que la propia Mesa de Unidad Democrática (MUD), la mayor alianza de partidos opositores, se pronunció en los términos siguientes: “La MUD rechaza la amenaza militar de cualquier potencia extranjera...”, aunque culpa a Maduro “por convertir al país en una amenaza regional”, (sentencia que carece de sentido alguno pues el gobierno de Caracas no amenaza

a ninguno de sus vecinos, ni representa peligro alguno para Estados Unidos). Al mismo tiempo, a la MUD se le olvida en su declaración mencionar expresamente al Presidente de Estados Unidos.

Más allá de las fronteras venezolanas, desde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (nada devoto del PSUV/Maduro), hasta el último de “los 17 de Lima” (que condenaron la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente) y muchos más, han rechazado, de manera bien explícita, la amenaza del presidente Trump. Lo mismo ha ocurrido en Europa, donde el presidente francés Emmanuel Macron se ha desmarcado de la condena de la Unión Europea y gestiona una iniciativa de diálogo con el presidente Maduro; la propuesta se la dio a conocer el propio presidente Macron a Donald Trump, y apunta hacia un rumbo de moderación y negociación. Además, todo el mundo en Venezuela y en el exterior están perfectamente conscientes de que tales amenazas con frecuencia surten un efecto contrario al deseado; entiéndase: moviliza sentimientos y lealtades en favor del amenazado, de la víctima, y muy contrarios hacia el agresor. Esto, sin olvidar las tradiciones antimperialistas en amplios sectores venezolanos (que en el verano de 1958, en Caracas “la roja” -como se le decía por entonces-, estuvieron a punto de linchar a Richard M. Nixon, vice-presidente en la Administración Eisenhower, por su apoyo a la dictadura Marcos Pérez Jiménez).

Un cuadro semejante debiera disuadir a Trump de cualquier agresión militar a Venezuela, pero se interponen algunas tentaciones peligrosas que pueden animar decisiones bien costosas a esta Administración. ¿Por qué semejante movida ahora, cuando apenas unos días atrás anunciaban la continuación de un diálogo con el Gobierno venezolano? ¿Acaso porque el señor Trump se siente estimulado por los intentos de cerco internacional contra el PSUV/Maduro por parte de un gran número de Estados latinoamericanos (17 para ser exacto)? ¿O es acaso por la condena al mismo por parte de los miembros de la Unión Europea, todo ello con motivo de la ANC? ¿Crea esto acaso un clima que pueden en Washington percibir como “favorable” a una intervención militar? ¿Acaso piensan que el clima es así tan favorable (o más) que cuando, en diciembre de 1990, las circunstancias internacionales de entonces le favorecieron al presidente de turno George H.W. Bush lanzar una invasión contra Panamá, so pretexto de las implicaciones del Coronel Noriega con el narcotráfico? No anda muy lejos este precedente de nuestra memoria histórica, y la palabra “precedente” en Estados Unidos tiene un singular valor para avalar acciones actuales.

Por otro lado, cuando más repuntaron los índices de aprobación de Trump fue durante su ataque a Siria y hoy esos índices andan por el piso; y anda buscando Mr. Trump (desesperadamente) la manera de incrementarlos. Traducir la guapería barata en acciones reales contra Corea del Norte, China o Rusia, supone enormes costos; en tanto que una acción contra Venezuela “a lo Panamá”, se vislumbra como una operación de bajo costo y elevados beneficios, incluyendo la complacencia de aquellos actores que han estado procurando el cerco y la asfixia del gobierno PSUV/Maduro en Venezuela.

Apostemos porque la sensatez prevalezca, en tanto las barricadas se mantienen en alerta...

Por Eugenio R. Balari

Luego de algo más de un año en que todo parecía indicar que en el mediano plazo o de manera definitiva se encarrilaban (correcta, amigable y respetuosamente) las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su derechista y contradictoria Administración republicana, todo parece indicar que le han dado marcha atrás a la página. Parece que hemos retornado a la vieja, desprestigiada y punitiva política de confrontación contra las autoridades y el pueblo del pequeño archipiélago caribeño.

Lógicamente, y como era de esperar, tal situación ha tenido sus efectos políticos y económicos dentro de Cuba. Sin embargo, desconocer o subestimar que la dirección del país caribeño acumula una larga y rica experiencia en lidiar con las políticas agresivas provenientes del vecino del norte es, sencillamente, un absurdo o ingenuidad que no se corresponde con las experiencias de los años vividos.

Las sanciones que han dañado y dañan el desarrollo económico o lesionan sensiblemente al pueblo cubano, se conocen ampliamente por el mundo. Ello le ha permitido a Cuba alcanzar un amplio consenso solidario y de apoyo internacional; incluso cada vez que sus autoridades han llevado al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas el sensible tema del bloqueo/embargo.

Las reiterativas votaciones en la Asamblea de las Naciones Unidas indican el enorme desacuerdo existente con relación a las sanciones se le imponen a Cuba por Estados Unidos. Estas acciones que se ejercen desde hace más de medio siglo, con la intención de estrangular económicamente al país y lesionar al pueblo de la nación antillana. Esas votaciones muestran la comprensión mundial adquirida acerca de la abusiva imposición contra el pueblo cubano; que como es comprensible, ha sido en realidad la víctima fundamental de tan absurda y criminal medida.

Transcurrida la corta etapa en la que muchos ciudadanos del mundo vieron, con entusiasmo y optimismo, que las relaciones entre los dos países se encaminaban amigablemente y hacia una fructífera cooperación económica (de la cual se beneficiarían ambas naciones), la actual Administración, utilizando una retórica dura, agresiva e injerencista, ha hecho desaparecer tal optimismo (probablemente ingenuo) y ha reiniciado un proceso de exigencias injerencistas que, en la práctica, ha comenzado a originar un nuevo retroceso de las relaciones bilaterales.

Claro está que si viene “el lobo” hay que prepararse para no dejarse dañar por este; lo que por lógica para algunos en la Isla, puede resultar mejor o más seguro el limitar o cerrar espacios políticos o económicos que posibiliten originar vulnerabilidades a la hora de defenderse y poder derrotar las sanciones que provengan desde el exterior. Ante todo ello es muy probable que sectores influyentes en la Isla, buscando seguridades y conveniencias para el país, reconsideren la idea de volver a la política de “plaza sitiada”, e implementen procedimientos restrictivos (que aunque posiblemente no los deseen). Los valoran, ante todo, como factores de resguardo a la soberanía, independencia, principios de autodeterminación y logros sociales de la Revolución.

Es posible que consideren que de continuar ampliándose el proceso interno de aperturas (“Lineamientos” del PCC o reformas, en la práctica), en el contexto de los planteamientos hostiles realizados por el ejecutivo estadounidense, resultaría peligroso continuar transitando por mayores procesos de

descentralización y desestatización de la economía. A cualquier conocedor de las reacciones de las autoridades cubanas ante el accionar de las administraciones estadounidenses, le puede resultar comprensible (aunque sólo sea para especular), que ante cualquier medida inamistosa de Estados Unidos, estas provocarán, de alguna manera, repercusiones políticas o económicas en el plano doméstico.

De nuevo el discurso del presidente de Estados Unidos (ahora en Naciones Unidas) se dio a conocer en Cuba, por lo que es de suponer que a la mayoría de la población se le hagan claras las intencionalidades de los sectores de la extrema derecha estadounidense con respecto al país; por lo que las reglas del juego quedan claramente entendidas para prepararse ante ellas. Resulta lamentable que vuelva a producirse un retroceso, ahora con relación al positivo y ascendente proceso que se desarrollaba sobre la normalización de relaciones.

Los medios de comunicación y los sectores políticos de la extrema derecha de Miami y Estados Unidos, le reclamaban a la Administración Obama que en el proceso de acercamiento a Cuba (y luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas), este se había producido sin lograrse concesiones políticas por parte de Cuba. Sin embargo, los que así criticaban a la Administración demócrata obviaban quién había sido el país agredido, quién rompió las relaciones diplomáticas e implementó sanciones a la otra nación e insistió en intervenir en los asuntos internos del otro con el propósito de desestabilizarlo o subvertir su sistema social.

Los pronunciamientos injerencistas u otras exigencias realizadas por el presidente Trump aspiran, como si se tratara de la voluntad popular de los cubanos, a que desaparezca el sistema político democrático/participativo establecido en la Isla y se implemente, en su lugar, un sistema democrático representativo bi o pluripartidista, igual al de Estados Unidos. Pero todos sabemos que lo planteado en torno a Cuba en los medios de ese país es tendencioso y desproporcionado.

Lástima lo que viene ocurriendo, porque se pudo continuar por el camino de solucionar el viejo diferendo cubano/norteamericano y construir una nueva etapa de relaciones civilizadas, que garantizaran amplias, versátiles, amigables y fructíferas relaciones entre los dos países y pueblos. Sabido es que una parte de la población mundial, en especial en Latinoamérica y el Caribe, seguían con gran interés y deseaban la plena normalización de relaciones entre los dos naciones, al igual que una mayoría del pueblo estadounidense y de los propios cubanos; por lo que el discurso y medidas anunciadas por el ejecutivo norteamericano el 16 de junio decepcionaron a millones de personas. Sus palabras o acciones han sido y siguen siendo valoradas de forma negativa y crítica.

Por lo pronto, en Cuba, las afectaciones que ocasionan las medidas de Trump en la práctica impactan sobre los que menos debieran recibirlas; porque, sin dudas, a quienes afectan es al incipiente pero ya amplio sector privado; o sea, a los emprendedores del patio, un amplio sector ciudadano que comenzaba a desarrollarse de manera esperanzadora, pujante y creciente en el propio seno del modelo social cubano.

Me decía un viejo y calificado amigo que en los medios políticos de Estados Unidos se había perdido la brújula; porque sus contradicciones internas, políticas domésticas o hacia el exterior, no parecían racionales, inteligentes, ni sensatas. Luego, retornando a Cuba, me agrega: ¿cómo entender tan absurdas, reiterativas y disparatadas acciones contra los cubanos y hacerse, al mismo tiempo, tanto daño político? Calificó luego el discurso de Trump del 16 de septiembre en Miami como políticamente cavernario, propio de la época de la Guerra Fría, donde se evidenciaba desconocimiento y la prepotencia tradicional del poderoso vecino del norte contra Cuba y los países de Latinoamérica y el Caribe.

Acerca de la situación creada respecto a Cuba por la Administración republicana, no debemos descartar la idea de que los recientes debates en la Asamblea Nacional del Poder Popular y las últimas restricciones a los cuentapropistas, probablemente se encuentren en sintonía o sean una reacción inicial, frente a la posición asumida por la Administración Trump respecto al país.

Considero, además, que se desconoció (o, cuando menos, se subestimó) el hecho de que las autoridades cubanas, al aceptar el reto del proceso de normalización de relaciones con la Administración demócrata, conscientemente se habían dispuesto a enfrentar a corto, mediano, o largo plazo, la compleja lucha político/ideológica que, inevitablemente, se produciría. No deja de ser un hecho significativo el que las autoridades cubanas, conscientes de los riesgos que comportaban las relaciones con Estados Unidos, decidieran asumirlas y avanzar en tal proceso (valorando, en no pocos aspectos, y con independencia de sus fines), que las decisiones de la Administración demócrata habían sido positivas y valientes.

Finalmente, no debemos olvidar que la población cubana posee una elevada comprensión y sensibilidad política sobre lo que en el país identifican como los dos carriles de las administraciones norteamericanas contra Cuba (los llamados carril uno y dos), en términos más comprensibles: los del “palo” o la “zanahoria”. Con la actual Administración vuelve a producirse un retroceso en las relaciones bilaterales, porque se retoma un discurso hostil y agresivo; y se recrudecen sanciones económicas que impiden, o limitan, los amplios beneficios que ambas naciones pudieran obtener con sus relaciones. Esto muestra claramente ante el mundo en qué consiste la arrogancia o miopía de algunos políticos estadounidenses.

Por Domingo Amuchástegui

Ya se ha escrito y dicho lo suficiente por las partes en conflicto sobre los misteriosos ataques sónicos o acústicos contra el personal diplomático de Estados Unidos y de Canadá. El resultado es -casi a la vuelta de un año- nulo, pues nada ha podido ser esclarecido (a pesar de los esfuerzos de ambas partes por determinar los orígenes, medios y actores de semejantes incidentes). Por estos senderos de lo ignoto han transitado desde guiones cinematográficos mediocres hasta las plumas más ilustres de los difuntos Ian Fleming (con su James Bond) y Graham Greene (“Nuestro Hombre en La Habana”, y otras más serias y memorables); así como del veterano John Le Carré y del más reciente y novedoso Tom Clancy. En sentido figurado, creo que todos se morirían de envidia al no poder reclamar la autoría de la espectacular trama en cuestión, pues estamos hasta hoy ante lo indescifrable.

Repito, no solamente no se tiene ni la más remota idea de quiénes han sido los autores y, mucho menos, de los recursos tecnológicos empleados; sino que tampoco sabemos de los motivos y potenciales beneficios, y de por qué en La Habana (y no en Moscú, Londres, Beijing, Ottawa o Washington). Los diagnósticos médicos preliminares son dispares en extremo y contradictorios. La bruma del misterio es tan densa y de implicaciones tan variadas que en algunos pasillos de Washington se llega a decir en voz baja -según algunas fuentes- “que ello nunca se sabrá...y de saberse no se haría público”.

No han faltado las hipótesis más truculentas, que culpan a las autoridades cubanas o a un sector de éstas supuestamente opuesto a la normalización de relaciones con Estados Unidos. Los que sostienen esta hipótesis asumen, erróneamente, que Cuba posee una insospechada arma tecnológica y, además, que su Gobierno ha enloquecido colectivamente, al procurar ahora una ruptura de relaciones a favor de las cuales trabajaron durante mucho tiempo (y que recién comenzaron a vivenciar desde hace menos de tres años).

Desde Washington, el Departamento de Estado anuncia, a manera de preámbulo, el retiro del 60 por ciento de su personal diplomático en La Habana, la suspensión de visas por tiempo indefinido y la advertencia a sus ciudadanos de que se abstengan de viajar dado el peligro de sufrir ataques similares. Unido a ello se alega falta de protección a sus diplomáticos y ciudadanos por parte del Gobierno cubano. Este anuncio se agrava todavía más si tenemos en cuenta que, tres días antes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se había entrevistado con el Secretario de Estado, lo que confirma que el contenido y tono de dicha entrevista no fue de entendimiento ni nada prometedor, sino muy confrontacional. El coro de tambores de guerra se desató hace semanas nuevamente encabezado por el senador cubanoamericano Marco Rubio, el que, respaldado por otros cuatro senadores, ha venido pidiendo las condenas y sanciones más drásticas hacia Cuba.

Examinemos los hechos (echando mano a un poco de sensatez, buen raciocinio y, también, a los autores citados, lo mejor de “Sector 40” o al propio Sherlock Holmes o Hércules Poirot):

Lo que se está armando ahora como un “ataque sónico” o “ataque a la salud de diplomáticos de Estados Unidos” no es algo que haya tenido lugar iniciada la Administración Trump, ni que se haya orquestado como un posible contra-ataque al discurso del presidente Trump sobre su nueva política hacia Cuba, el 16 de junio pasado. La nueva Administración lo “redescubre” hace apenas semanas

y comienza a capitalizarlo políticamente desde entonces. Los hechos se originaron hace un año y las partes consultaron entre ellas, constructivamente, lo ocurrido hace un año. Todo el escándalo actual denota, con toda claridad, quienes buscan beneficiarse ahora del misterioso incidente.

¿Dónde está el “arma asesina” o la tecnología utilizada? Ni los súper genios de las 17 agencias de Inteligencia de Estados Unidos parecen tener la más mínima pista hasta ahora... Extraña circunstancia para la principal potencia del mundo, dueña del mayor caudal científico-tecnológico.

¿Puede ser dicha arma misteriosa una creación cubana? Me parece que no; pero para no ser tan categórico digamos que es altamente improbable, dada su complejidad científica y operacional. Mucho más probable pudiera ubicarse sus orígenes en el vecino de enfrente -léase Estados Unidos- y su bien conocida parafernalia científico-técnica.

Si no se dispone del “arma asesina” o de la compleja tecnología empleada, tenemos que indagar, entonces, en los posibles motivos de estos ataques. ¿Qué beneficios o ganancias tendrían esos posibles “autores cubanos” en precipitar una ruptura de relaciones y/o provocar un conflicto mayúsculo entre los dos países? Ningún beneficio, ninguna ganancia de tipo alguno (económica, política, diplomática) y, muy por el contrario, enormes pérdidas en todos los planos, empezando por su legitimidad internacional y terminando por uno de sus pilares en materia de turismo, el único sector solvente y dinámico de la economía en estos momentos. Habría que tener un estado de enajenación total (mezclado con una vocación suicida), para empeñarse en crear este incidente, atributos que no adornan la psicología social del cubano, ni de su dirigencia. Además, ningún cubano, de San Antonio a Maisí, creo que estaría de acuerdo con una acción de este tipo a estas alturas.

¿Lo harían los rusos, los chinos o los norcoreanos inconsultamente desde La Habana (al costo de destruir todo el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos)? Sería este un muy flaco servicio para con Cuba, país con el que han sostenido estrechas y estables relaciones durante muchos años. ¿Cuál sería el propósito de semejante sobrecarga de decibeles para causar sordera o trastornos de equilibrio a una veintena de norteamericanos? Esta hipótesis me parece poco seria, sin sentido alguno y descontextualizada por completo. No son estos los tiempos ni circunstancias de la “Crisis de Octubre” de 1962.

Admitiendo la hipótesis de que sea un ataque promovido y/o permitido por la dirigencia cubana o un sector de ésta, preguntémonos: ¿y para qué atacar a los canadienses? Muy poco o nunca los exaltados comentaristas y políticos del patio (empeñados en la ruptura y la confrontación), se ven interesados en indagar este otro ángulo. ¿Atacar a los canadienses que son los principales inversionistas en Cuba; que cada año más de un millón de turistas canadienses visitan la Isla? ¿Ahuyentarlos así con esta suerte de terrorismo psicológico que se puede encontrar en ciertos medios y en declaraciones de figuras políticas conectadas a la nueva Administración de Trump y con las nuevas medidas anunciadas en Washington? ¿Ni enajenados ni suicidas en Cuba andarían pensando en atacar a los canadienses! ¿A quién le interesa espantar de Cuba las inversiones, los turistas y hoteleros canadienses? No veo a ningún experto o político del lado de acá plantearse o explorar este ángulo tan elocuente e importante. Y algo más, no menos importante: a diferencia de Washington, el gobierno canadiense no ha acusado a las autoridades cubanas de ser responsables por dicho ataque, ni de negligencia en la protección a sus diplomáticos. Cabría pensar que algunos de los dos está rotundamente equivocado...

Finalmente, ¿dónde se concentran las mayores posibilidades de inventar y hacer efectiva un arma capaz de desatar esta “guerra de decibeles”, en La Habana o en Washington? En Washington, naturalmente. ¿Para qué se “resucita” este misterioso incidente casi un año después? ¿En aras de un esclarecimiento efectivo para ambas partes o para desatar un conflicto que justifique la adopción

de sanciones y medidas que lesionen a Cuba severamente de mil maneras diferentes (incluida su industria turística en ascenso, que tanta preocupación causa en la poderosa industria hotelera de la Florida)? Probado hasta la saciedad: para justificar tensiones, conflictos y sanciones contra Cuba. ¿Dónde encontrar las bases científicas y operacionales para estos supuestos ataques, en La Habana o en Washington? En Washington, sin la menor duda; no en la cuna de los almendrones. ¿Quién se beneficia y procura, por tanto, gestar un conflicto que justifique y satisfaga sus objetivos políticos con respecto al tema de las relaciones con Cuba? Los que se opusieron a la normalización con Obama; los que han venido articulando presiones y acciones en la Casa Blanca y el Congreso antes y después del triunfo de Trump para detener y revertir dicho proceso (y priorizar al máximo la política de “cambio de régimen” en Cuba). Esta última lógica es la que busca no sólo crear el conflicto Cuba-Estados Unidos, sino también involucrar a Canadá con todos los perjuicios apuntados para la parte cubana. Y los animadores de esta lógica no se localizan en otra parte que no sea en Washington y en Miami; no es por pura casualidad que los legisladores cubanoamericanos más beligerantes (encabezados por Rubio) trabajen activamente en los comités de Inteligencia, Defensa y Política Exterior.

En este rompecabezas para la dirigencia cubana no habría más que pérdidas y perjuicios. En ello coincidirían desde Sherlock Holmes hasta Tom Clancy.

TRUMP Y EL “AÑO DE LA ZANAHORIA”: POLÍTICA INTERNA, *RUSSIANGATE*, EL NIETO DE KIM IL SUNG Y CUBA

Por Che Serguera Lagache, Camilo Serguera Navarro y Jorge Serguera Navarro

El calendario chino está definitivamente equivocado. No estamos en el año del “Gallo de Fuego”, sino en el año de la “Zanahoria”. Y no comenzó el 28 de enero de 2017 para terminar el 15 de febrero de 2018, sino el 20 de enero de 2017 y su duración nos parecerá un viaje a la eternidad. En el 2017 la llegada de Trump al poder es el hecho más relevante, delante de Brexit y la declaración de independencia de Cataluña, que marca el ascenso del populismo de derecha en los Estados Unidos y el resto de Occidente.

El “fenómeno Trump” debe ser observado cuidadosamente. El auge de la sátira y la proliferación de los adjetivos denigrantes, desde casi todos los ángulos políticos y rincones del planeta, de una alta calidad en estos días, mueve rápidamente a la risa, remedio infalible; pero puede encubrir y desvirtuar la seriedad que el observador necesita, por los peligros que esta realidad impone.

Después de 590 días de campaña y dentro de los primeros 270 de la Administración, Donald Trump mantiene un agresivo accionar y esfuerzos muy serios para consolidar su poder. Se mantiene el discurso populista conservador, nacionalista, aislacionista, divisionista, racista, misógino, que resuena en diversos estamentos de la sociedad norteamericana, constituidos, rápidamente, en una base política heterogénea por su composición, pero homogénea en su incondicionalidad. Muchísima gente esperaba que una vez ganada la Casa Blanca, este discurso se moderara y fuera más “presidencial”. A estas alturas no quedan de esos ilusos. Sin embargo, por alguna oscura razón, prevalece un estado generalizado de sorpresa y la esperanza individual, manifestada en el espacio público, de que la Administración no llegará al término de cuatro años.

Trump no engañó a nadie. Se presentó tal cual era. Lo que realmente ocurrió es que la gran mayoría no quiso creerle. Solamente la Derecha Alternativa, los neonazis, los supremacistas blancos, el KKK, sabían desde el principio que su representante pujaba por la Casa Blanca y finalmente, contra todos los pronósticos, la consiguió. Negarse a aceptar lo evidente, es un fracaso colosal de la inteligencia, o dicho más directamente, una estupidez.

Al menos tres factores favorecieron la elección de Trump: a) la adhesión creciente de los electores norteamericanos al discurso populista, b) la división y desmovilización demócrata y c) la intromisión del director del FBI, James Comey, en la campaña una semana antes del voto. Esta confluencia implica disfunciones a tres niveles en la sociedad civil, los partidos políticos y el aparato estatal. La sociedad norteamericana va a sufrir las consecuencias de su ceguera selectiva y de las disfuncionalidades señaladas, con toda probabilidad, muy rápidamente.

Política interior.

Aunque el planeta está en vilo observando los vaivenes de la política exterior norteamericana, el aspecto más importante en el sistema de poder norteamericano es la política interior. En este nuevo ciclo gubernativo, el plan es simple, explícito y deliberado: desmontar el Estado encubriendo el acto como el desmonte del legado de Barack Obama. Con una Casa Blanca reconquistada, una “mayoría decisiva” en la Cámara de Representantes y el Senado, en enero, esto parecía coser y cantar.

El primer paso en el propósito de consolidar la victoria, fue la nominación de un juez conservador a la Corte Suprema. Neil Gorsuch, vino a llenar la vacante dejada por Antonin Scalia. Los jueces de la Corte Suprema son vitalicios, así que esta nominación es significativa para al menos dos generaciones.

La Corte posee la facultad de revisión judicial y de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos a nivel federal o estadual. Sus decisiones no pueden ser apeladas. La permanencia de Trump en el poder por varios años, aumenta la probabilidad de la nominación eventual de otros jueces en caso de que se produzcan vacantes. El estimado es que podría nominar hasta un máximo de cuatro jueces si logra gobernar los dos períodos completos, manteniendo una mayoría en el Congreso. Sin embargo, pese a una mayoría republicana en las tres ramas del poder, a partir de este primer paso, nada ha sido coser y cantar. La Administración Trump no ha logrado pasar ninguna gran legislación (*major legislation*).

La “mayoría” republicana ha visto pasar la mejor parte del año para anotarse cuatro intentos fracasados para repeler y sustituir lo que constituye uno de los más importantes legados de Barack Obama: el ACA (*Patient Protection and Affordable Care Act*), la Ley que reformó el sistema de subsidios de salud de los Estados Unidos y que es popularmente conocida como *Obamacare*. La derogación y sustitución de esta Ley, junto a la reducción dramática de los impuestos, constituye el objetivo central del GOP¹.

Según fuentes oficiales, *Obamacare* cuesta al fisco norteamericano nada menos que un sexto del total del PIB de Estados Unidos, que asciende a unos 18.5 billones de dólares. Una sexta parte de este monto es alrededor de 3.1 billones de dólares. Este gasto supera el PIB de la Gran Bretaña y se acerca al de Alemania. Esto se debe, principalmente, al elevado costo de los servicios médicos, hospitalarios y de los medicamentos. El costoso sistema se basa en una red federal de servicio que ayuda a los más pobres (*Medicaid*) y a los mayores de 65 años (*Medicare*) y en una de seguros privados a precios restrictivos que constituye un inmenso negocio. Con la intención de ofrecer cobertura médica a más de 50 millones de personas sin seguro, Barack Obama implementó el ACA, que mencionamos arriba.

Esta Ley, vigente desde 2014, estableció la obligación para las personas de adquirir un seguro de salud, eventualmente subvencionado, y para los seguros la obligación de ofrecer un servicio estandarizado. Retrospectivamente, estas nuevas regulaciones ampliaron considerablemente el número de asegurados, mejoraron el contenido de los contratos de seguro, contribuyeron a mejorar los índices de salud.² Además, aunque lo siguiente puede ser sujeto a debate, el ACA parece haber contribuido a reducir el sostenido incremento de los gastos de salud observado en los últimos 20 años. Un estimado del *Congressional Budget Office*, indica que la supresión de esta Ley conduciría no sólo a disminuir el número de asegurados, sino también un fuerte incremento de los gastos de salud en los años sucesivos³. A pesar de los beneficios comprobados y estimados del AC, la gran mayoría de los congresistas republicanos proponen revocar esta Ley o sustituirla por otra vacía del contenido universal tendiente a garantizar la cobertura médica de todos los ciudadanos.

En realidad, el propósito específico de los conservadores es simple: reducir los gastos del Estado todo lo posible. Luego, la reforma o liquidación del ACA tiene un motivo ulterior, a saber, reestructurar el complejo sistema de impuestos y producir un espectacular recorte de los mismos. El GOP actúa bajo la “certeza” de que esta acción estimulará la inversión privada, y favorecerá un crecimiento

1 GOP son las siglas con se designa al Partido Republicano en la jerga política norteamericana. Este acrónimo significa Grand Old Party, o sea, el Supremo y Viejo Partido.

2 K. Patel y D. Masi, *Newsweek Sun* Noviembre 12, 2017.

3 <https://www.cbo.gov/publication/50252>

económico sin precedentes. El mayor beneficiario de tales recortes sería la clase alta norteamericana, que constituye, aproximadamente, menos del 10 por ciento de la población. La ausencia de una reflexión seria sobre las consecuencias de este proyecto de la derecha, produjo un bloqueo en la política general norteamericana manifiesto en la incapacidad de la Casa Blanca de encontrar el quórum necesario en el legislativo, para repudiar *Obamacare*. Además, ha interferido con la presentación de otro proyecto legislativo, nada simpático a los conservadores, pero que constituye una promesa de la campaña presidencial, de reconstrucción de la infraestructura nacional.

Según la perspectiva republicana, este gran “paquete” de propuestas, tiene la mira puesta en estimular un crecimiento sostenido de la economía norteamericana a razón de un 4 por ciento anual. Semejante meta fue calificada por Warren Buffet (WB), con una sola palabra: “tonta”⁴. Cuando WB considera una meta “tonta”, vale la pena averiguar por qué.

La explicación rápida y simplificada del punto de vista de Buffet, para beneficio del lector, es la siguiente: el 4 por ciento del producto interno bruto norteamericano es de 770 mil millones de dólares, monto que supera el producto interno bruto de cualquier país situado debajo del lugar 16 en la lista de las mayores economías mundiales. Es decir, para crecer a un 4 por ciento anual sostenido, Estados Unidos deberá mantener su gigantesco volumen productivo y agregar, de golpe y porrazo, una producción equivalente a la de un país rico con la misma capacidad instalada y los mismos niveles de productividad actuales: “tonto”.

El 4 por ciento es, además, una meta arbitraria. ¿Por qué no el 3.5 por ciento? Donald Trump no ofreció ningún argumento que apoyara la posibilidad real de alcanzar semejante crecimiento económico. O sea, es una meta hueca, populista, una cifra lanzada al viento a sus seguidores, que creyeron tontamente en la supuesta habilidad del multimillonario de conseguir resultados económicos excepcionales e imposibles para los políticos del *establishment*. La idea que subyace tras esta supuesta meta, es que semejante crecimiento del PIB compensaría los ingresos al fisco que se perderían en el recorte de impuestos.

La incapacidad de lograr resultados en el área legislativa ha impulsado a Trump a un frenesí de órdenes ejecutivas para implementar su agenda y promesas de campaña. Obama tuvo que hacer algo semejante, al enfrentar una mayoría republicana en el Congreso, a partir de 2014. Las órdenes ejecutivas son un instrumento expedito para decretar decisiones políticas. El legado producido por ellas es temporal y frágil. El siguiente presidente puede deshacerlas, literalmente, de un plumazo. Precisamente, a eso estamos asistiendo. Lo interesante es que Trump acude a semejante expediente, a pesar de tener control absoluto del legislativo. Esto tiene dos posibles lecturas: el control en el legislativo es una realidad cuantitativa; pero no material. O el control legislativo no es importante, lo único que importa es lo que piensa y decide el Presidente. O sea, él y sólo él es el poder real.

El contenido de las 50 órdenes ejecutivas firmadas entre enero 20 y octubre 12, es diverso. Un lugar común en la mayoría de ellas es el desmonte de decisiones tomadas por Obama. La intención en las más importantes, es liquidar las supuestas regulaciones que limitan el crecimiento económico. O sea, son los primeros pasos dados para regresar a un modelo de economía altamente desregulada o “auto regulada”. Entre las más significativas, están aquellas que eliminan las restricciones impuestas a las industrias contaminantes y a la explotación de carbón. En consonancia con esta decisión, se produjo el anuncio de la voluntad de retirar a Estados Unidos del Tratado de París.

⁴ Buffet, según la revista *Forbes*, poseedor de la cuarta más grande fortuna del planeta, es considerado uno de los principales empresarios e inversionistas de los Estados Unidos y el planeta

En el manejo de la política interior, la Administración Trump exhibe, además, un propósito central: asegurarse la lealtad de su base política. El ocupante del Despacho Oval no ha hecho el más mínimo esfuerzo por ampliar esa base o atraer a otros sectores de los votantes. Esta es una movida interesante que ha generado la siguiente ola de análisis en sentido siguiente: se considera que esta postura, fatalmente divisionista, enajena al actual Presidente una parte importante del electorado y resquebraja su propio partido. Las supuestas consecuencias, a mediano plazo, deberán ser la pérdida del control en el Congreso en las elecciones de medio término (noviembre de 2018) y, luego, en las elecciones generales de 2020, si la presente Administración llegara hasta allá. La pérdida del control legislativo, el año próximo, puede conducir al inicio de la impugnación (*impeachment*) del presidente Trump, motivada por el *Russiagate* u otros posibles escándalos de corrupción.

La postura de Trump es interesante. El mantenimiento del discurso “políticamente incorrecto”, mistificador y mitomaniaco, sigue alentando a su base. Ese discurso lo hace parecer consecuente y cualquier desviación de la agenda prometida es vista como una maniobra deliberada de los obstruccionistas demócratas y del refractario *establishment* republicano. Nunca se aprecia, por su base, como un cambio de rumbo o un engaño del Presidente, *ni como incapacidad para gobernar*. Las promesas de campaña, por desquiciadas que puedan parecer, siguen siendo consideradas como alcanzables por el Presidente y sus seguidores. Parece evidente que Donald Trump no quiere cambiar el rumbo y enajenarse a la parte fundamental del electorado que lo llevó al poder. O sea, prefiere actuar bajo el principio elemental de “no cambiar lo que funciona”. Lo que “funciona”, en el sistema de valores del Presidente y sus electores, paradójicamente, mantiene paralizado al Estado.

Esta aproximación al problema por parte del magnate de Queens, parece audaz y, desde su punto de vista, acertada. La audacia es correr un riesgo calculado. Es difícil otorgar a Trump una inteligencia y penetración excepcional. Pero puede suponerse que, intuitivamente, percibe la exasperación de gran parte de la población, la cual usa y exacerba para mantener y consolidar el poder. Tratar de ensanchar su base política, sí puede ser considerado una traición por sus seguidores y sí puede provocar la erosión del apoyo.

En este primer año, la base política de Trump ha probado ser inamovible. Las encuestas afirman que se trata del 37 por ciento de los consultados. El apoyo a la gestión del mandatario, en ese grupo, apenas fluctúa. De acuerdo con los sondeos de opinión, el índice de desaprobación de la gestión presidencial se ha mantenido por encima del 55 por ciento. Esto constituye un negativo record histórico en Estados Unidos. Muchos analistas piensan que estos números hablan por sí mismos y acarician la idea enunciada arriba de la terminación del mandato antes del término legal de cuatro años. La realidad parece ser muy distinta: de acuerdo con el registro electoral, los demócratas son apenas un 25 por ciento, los republicanos un 23 por ciento y los “independientes” un 44 por ciento.

Los demócratas son percibidos como un grupo elitista, costero, alejado de los intereses reales del norteamericano medio de las regiones centrales. De acuerdo con Noam Chomsky, este partido ha ido desplazándose hacia una derecha moderada en el espectro político norteamericano. Este es un partido claramente en crisis, paralizado por la demoledora derrota a manos de Trump, frente al que no pudo ofrecer un frente común, ni tácticas coherentes.

Los republicanos difícilmente pueden ser considerados hoy un partido, en sentido estricto. Más bien estamos ante un grupo de facciones divididas, y hasta opuestas, que se movieron a la extrema derecha y que, según Chomsky, se salieron del espectro político norteamericano. El conservadurismo y sus postulados esenciales, están hoy en entredicho en Estados Unidos, cautivos de los hermanos Koch y de *FOX News*. El partido de Reagan, los Bush, McCain o Mitch Romney, está en fase de extinción. Lo que queda es una burocracia refractaria que constituye hoy el *establishment* conservador,

dominado por un grupo reformador ultranacionalista que cuestiona, abiertamente, los fundamentos del Estado y de un orden mundial cooperativo y solidario.

Los “independientes” no son nada. Esta supuesta “parte” del electorado no constituye una fuerza política. Es decir, la mayoría de los electores norteamericanos son simples espectadores en la tragi-comedia, además de estar dispersos en todo el espectro político, compartiendo un difuso sentimiento de no ser respetados, o tenidos en cuenta, en el sistema político vigente. Un conato que pudiera estar anunciando el nacimiento de esta tercera fuerza, fue la campaña de Bernie Sanders por la nominación demócrata a las elecciones generales del pasado año. Luego de la derrota en las primarias, se apagó el fuego de una visión donde prevalece la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia social.

Un reputado abogado y analista político norteamericano, Michael Smerconich, conductor de un programa de radio en Filadelfia y de un espacio matinal sabatino en CNN, se preguntaba, con un dejo de sorpresa y frustración, por qué el movimiento independiente no lograba alcanzar la preeminencia necesaria en Estados Unidos. Smerconish, erróneamente, percibe a este movimiento como ubicado entre demócratas y republicanos. Semejante visión simplificadora es común, e ilustra lo decepcionante que pueden resultar los análisis de prensa y académicos en Estados Unidos, desde el punto de vista estrictamente intelectual, sobre su historia y presente situación.

El conato “revolucionario” de Bernie Sanders no se ubica en política al “centro” del *establishment*. Algunos “independientes” pudieran estar en esa zona, como el propio Smerconish, pero la mayoría está realmente a la “izquierda” en el espectro. Su acción tiende, inmediatamente, a debilitar a los demócratas, al absorber la parte más radical de su base. La mejor prueba son los resultados electorales de noviembre de 2016. Una importante fracción de los seguidores de Bernie se quedó en casa el 8 noviembre. Con su inacción, estos ciudadanos contribuyeron a la victoria del bando contrario. El movimiento “independiente” apenas tiene impacto sobre la derecha norteamericana.

Sin embargo, está emergiendo una agresiva facción que viene a sembrar el desconcierto en las filas del *establishment* conservador y lo amenaza abiertamente: la Derecha Alternativa (*Alt Right*). Donald Trump es el líder de esa facción. Lo reconozca o no. Su alabardero es Steve Bannon.

Bannon, el director ejecutivo de un periódico virtual llamado *Breitbart News*, llegó a ser consejero de campaña y asesor político principal de Trump en la nueva Administración. Despedido en agosto pasado, luego de que su permanencia en el ala oeste de la Casa Blanca se hiciera intolerable y tóxica, volvió a *Breitbart* y anunció el inicio de lo que llama la “Guerra contra el establecimiento conservador”. *Breitbart*, según Bannon, es la plataforma de la *Alt-Right*.

La Derecha Alternativa en Estados Unidos ha saltado de la condición de corriente marginal a facción reaccionaria, agresiva, intelectualmente estructurada, resultado del resquebrajamiento del conservadurismo norteamericano. Las primeras fisuras de este establecimiento aparecieron con la victoria de Obama en 2008, bajo el vocinglero e inconforme autodenominado *Tea Party*.

Alt-Right se diferencia de aquella fracción encabezada al inicio por Sarah Palin en que no es parte del establecimiento conservador, sino que lo rechaza y quiere sustituirlo. Los postulados de esta nueva derecha no están necesariamente ajustados a la idea tradicional de conservadurismo norteamericano, sino que más bien enarbolan una visión escéptica del Estado y pretenden una reducción de las funciones institucionales y de gobierno, con un discurso inconforme que recurre sobradamente a la invectiva, la exageración y las falsas acusaciones. Exactamente, el mismo método de Trump. Se les acusa de promover la islamofobia, el anti-feminismo, el anti-semitismo, el anti-sionismo, el etnonacionalismo, el populismo de derecha, el nativismo (los nativos primero), el tradicionalismo.

La gran confusión sembrada por el activismo febril de sus partidarios, especialmente en Internet y redes sociales, da lugar a esta multiplicidad de tendencias que se le atribuyen. En realidad, la *Alt Right* no tiene una ideología formal. Algunas alusiones a un anti-semitismo y anti-sionismo, que parecen connaturales a las posiciones de la extrema derecha en Occidente, son incorrectas: varios de los más importantes y mejor articulados ponentes de Breitbart son judíos y defienden las posiciones hegemónicas de Israel después de haber promovido la guerra de Iraq. Esta fusión “anti-natural” de tendencias que se suponen contrapuestas, demuestra que lo que es “connatural” y/o “anti-natural” en política, es coyuntural. Es posible que los supremacistas blancos y los neonazis se consideren parte de esta derecha alternativa. Bannon los calificó de “payasos” después de los hechos de Charlottesville. Lo cierto es que cabe dentro de ese grupo todo el que se propone revertir el curso histórico contemporáneo de mestizaje racial y religioso de Estados Unidos. Para ellos, la elección de Barak Obama fue una muestra alarmante de esa tendencia.

Así, *Alt Right* considera como su logro más importante haber conseguido la elección de Donald Trump a la presidencia. Es difícil determinar el peso que este grupo heterogéneo pudo haber tenido en el resultado electoral. Lo innegable es que se impuso el discurso “políticamente incorrecto” y Trump es el presidente, derrotando aplastantemente al establecimiento norteamericano, demócrata y republicano, por igual.

En esencia, en la actualidad Trump no tiene contrincantes políticos organizados de peso en Estados Unidos. La única oposición realmente activa y clara es la que ofrecen la mayoría de los medios de comunicación masiva. Trump está perfectamente claro de esa realidad y lleva una guerra diaria, sin cuartel y en toda la línea, contra estos.

Russiagate

Un escándalo político de primera magnitud ha dominado el año: la supuesta interferencia rusa en las elecciones generales del pasado año y la posible colusión de la campaña de Trump con los rusos para derrotar a Hilary. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos está unánimemente de acuerdo en la interferencia rusa en las elecciones. Eso no dice mucho. Esa misma comunidad sustentó la noción de que Saddam Hussein tenía armas nucleares...

Varias investigaciones están en curso en relación con este asunto. La más importante de estas es la que lleva a cabo el Honorable Robert Mueller, antiguo director del FBI, en calidad de consejero independiente nombrado por el Departamento de Justicia. Este funcionario está conduciendo la investigación con un hermetismo ejemplar. Todo lo que pueden hacer los medios es especular acerca de las acciones de ese cuerpo investigativo y sus posibles derroteros y resultados. En muchos casos los presentadores y analistas políticos no hacen más que confundir sus deseos con la realidad.

El asunto “Rusia” es realmente central. Tal vez es aquí donde con más claridad se aprecian los prejuicios norteamericanos. Los rusos son malos por definición. Es axiomático. Un periodista preguntó a Putin por qué Occidente tenía una visión tan negativa de él y de Rusia. La respuesta fue una palabra y genial: MIEDO (literalmente dijo STRAJ, en ruso). Los rusos inspiran precisamente eso en los occidentales y en todos los que están a su alrededor. Este es un prejuicio tan profundamente arraigado, que no deja lugar a un análisis objetivo de las relaciones con ellos. Tampoco hay dudas de que semejante trato y punto de vista, profundizado por la Administración de Obama, llevó las relaciones con Rusia a su punto más bajo y a la confrontación a través de terceros en el escenario mesoriental. Los rusos, por su parte, exhiben el resentimiento de quien es maltratado y denigrado en toda la línea.

Referido a una supuesta interferencia en las elecciones hay dos posibles escenarios extremos: ocurrió o no ocurrió. En el primer escenario, la prensa distribuye tres posibles intenciones rusas: prime-

ra, perjudicar a Hilary Clinton por cualquier medio posible. Segunda, resquebrajar la democracia norteamericana y occidental. Tercera, materializar una alianza entre Trump y Putin para ganar las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016.

Es probable un cierto grado de interferencia rusa cuyos propósitos no están siendo identificados por el periodismo político norteamericano. Rusia está claramente interesada en mejorar sus relaciones con Estados Unidos, en superar las sanciones por el tema ucraniano, que constituyen un tremendo obstáculo para su economía basada en los hidrocarburos. Además, parece evidente que Rusia tiene un interés marcado en la cooperación estratégica para enfrentar al extremismo islámico, tarea harto difícil para un solo país y en la que parece haber una comunidad circunstancial de intereses.

La implementación de una política coordinada en esta región podría haber sido altamente favorable, pues los rusos tienen una visión mucho más realista que los norteamericanos. El enfoque ruso es mucho más preciso y sin las ambigüedades de la política exterior norteamericana. Por otra parte, Rusia está llevando a cabo un plan, cuidadosamente preparado, de control de las rutas petroleras del norte, bordeando el polo y de explotación de las reservas de ese hidrocarburo en esa zona y no cuenta con la tecnología necesaria para ello. Así, firmó contrato con *EXXON* por valor de 500 mil millones de dólares, que no puede ser implementado por culpa de las sanciones de Obama, que serían, probablemente, mantenidas por Hilary.

Además otorgó a esa empresa los derechos de explotación de 63 millones de acres de su territorio: más del doble del total de concesiones mundiales de *EXXON*, incluido el territorio de los propios Estados Unidos. Trump, o quien quiera que pudiera ser electo de la plataforma contraria, ofrecía mejores perspectivas para ellos que los demócratas. No solamente Trump veía con simpatía a los rusos. Rand Paul, otro de los candidatos republicanos, hizo declaraciones más moderadas y atinadas en la misma dirección. Estos propósitos no concuerdan bien con la idea de desestabilizar a Estados Unidos y a Occidente. Naturalmente, que estos propósitos tenían mejores opciones con Trump. La designación de Rex Tillerson, como Secretario de Estado (ex- CEO de *EXXON*), no puede ser una casualidad (declarado “amigo de Rusia” por Putin y condecorado con la más alta distinción a un extranjero) y habla claro de una relación sinérgica entre partidarios de Trump y los rusos de Putin, motivados por intereses comunes.

Los tremendos prejuicios norteamericanos, el escándalo en marcha, el hecho de que cada día aparecen más evidencias de contactos profundos entre la campaña de Trump y operativos rusos, van a reforzar la idea general de la interferencia rusa en las elecciones norteamericanas. A pesar del triunfo de Trump, los propósitos rusos están hoy seriamente comprometidos. Cualquier interferencia o, simplemente, la percepción de que la hubo, tiene que ser profundamente negativa para las relaciones bilaterales. Un *impeachment* de Trump sería catastrófico para estos propósitos. Es claro que los rusos están en modo de control de daños. La prensa estatal rusa ha suspendido toda alusión favorable a Trump y los voceros se han dedicado a negar rotundamente toda interferencia con las elecciones.

La situación creada, en lugar de favorecer los esfuerzos y deseos rusos, los ha afectado tremendamente. Todo está envenenado hoy contra Rusia. Hay un barraje informativo sensacionalista tremendo, que ha puesto a la Administración y a la mayoría del legislativo, a la defensiva. Pareciera que unos malévolos actos rusos quieren destruir la democracia norteamericana, desmembrar la Unión Europea, etc. Es decir, le salió el tiro por la culata a Putin. El gobierno ruso pudo haber cometido un error de cálculo tremendo, pues no fue capaz de evaluar (nadie habría podido) la profundidad del desajuste que late en la actual Administración. Lo cierto es que la situación creada exhibe exactamente el tipo de desarreglo, disfuncionalidad y caos que se atribuye a la acción de los rusos. Esto está hinchado y politizado, por motivos evidentes, por los demócratas, que han logrado la paradoja de tener la iniciativa aun estando en minoría.

Los cubanos tenemos, aún, una visión “soviética” de los rusos. Para los de la Isla los rusos son aliados, para los que están fuera son enemigos. Esto también es axiomático. Y por lo tanto, fundamentalmente equivocado. El gobierno ruso actual tiene muy pocos puntos de contacto reales con esa visión. Estamos en presencia de un gobierno nacionalista, autocrático, de un conservadurismo que roza la extrema derecha, en el que subyace una tentación revanchista por el trato recibido como consecuencia del derrumbe soviético. Hay evidencias claras del apoyo ruso a los partidos políticos de extrema derecha europeos y la virtual vinculación con esas tendencias en Estados Unidos parece estar a la vista. Está en marcha el plan de recuperación económica y el fortalecimiento del arsenal militar. La intervención en Siria, criticada en Occidente como la expansión geoestratégica rusa es, por encima de todo, la intención de poner fin a la indecisión y ambigüedad occidental en esa región (que constituye un peligro real de carácter existencial para la integridad rusa y la de los estados taponados aledaños a sus fronteras).

Es el apoyo a un gobierno laico en medio de la catástrofe creada por la intervención norteamericana que desmontó a gobiernos similares en la región, porque estos eran parte de la antigua zona de influencia soviética, que había que destruir para consumar la victoria en la “Guerra Fría”. La acción norteamericana abrió el espacio a todos los tráfugas de la región y dejó el vacío de poder que dio lugar a ISIS. La acción rusa, a la vez, ha servido como campo de pruebas de armas modernas y sistemas combativos mucho más adaptados a la realidad que aquellos que fueron desastrosamente usados en Afganistán. Los rusos parecen disponer de un nuevo poderío en el ciberespacio, que los coloca en posición de igualdad con Occidente. Al final del mandato de Obama, Putin declaró que los norteamericanos persiguen agresivamente sus intereses estratégicos y que no hay ninguna buena razón para que Rusia no lo hiciera igualmente. Esto no hará más que reforzar el “STRAJ”.

La situación creada tiene que estar provocando una reevaluación de los propósitos y medios para conseguirlos por parte del gobierno ruso. Una declaración reciente del presidente de Rusia establece que “el error fundamental de la política rusa de los últimos 15 años es haber confiado en Occidente”.

No es de esperar una mejora de las relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, hay que esperar un aumento de la agresividad rusa, un fortalecimiento de su relación con China, un entendimiento y saneamiento de sus relaciones con Turquía, una profundización de sus relaciones con Irán, y una mayor interacción con India. Todo esto apunta a una pérdida de poder estadounidense en la región del Índico, oriente cercano, medio, Asia Central y el extremo oriente. El nieto de Kim parece ser la primera manifestación de ese fenómeno. Y todo esto ayudará a los chinos como potencia militar regional en el mar de China, y como potencia económica mundial, con la extensión de su área de influencia al Pacífico y Sudamérica.

El escándalo ruso, o *Russiagate*, es un arma de doble filo. Si Bob Mueller no encuentra evidencias de colusión o de obstrucción de la justicia por parte de Trump y su campaña, la desarticulada oposición al mandatario va a sufrir un golpe de demoleedor. Aferrada a esta investigación como a un clavo caliente, para desprestigiar al mandatario, se arriesga a quedar embarazosamente expuesta en caso de no lograrlo, y Trump conseguiría consolidar su posición política. Lo único que podría sacarlo del poder sería la aplicación de la Enmienda 25 y eso solamente parece posible en caso de que se produzca una decisión disparatada que ponga al planeta al borde, o de lleno, en la guerra nuclear.

El nieto de Kim Il Sung.

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) no puede ganar una guerra contra Estados Unidos. Vietnam, tampoco podía... Ni los Mujahidines, un grupo de bandas armadas en Afganistán, podían derrotar al Ejército Soviético... O ISIS no podía ganar contra el ejército del Estado constituido sirio y sus aliados rusos, o pelear en dos o tres frentes contra una coalición liderada por

Estados Unidos. Lo cierto es que los esquemas bélicos de fin del siglo XX, y comienzos del XXI, superan la aparente certeza cualitativa y cuantitativa para predecir la victoria en una guerra. Ni siquiera es seguro hablar de la “victoria”, tal y como nos hemos acostumbrado a entenderla, como fin último en un enfrentamiento armado moderno entre fuerzas totalmente desiguales.

La RPDC no tiene la intención de ganar una guerra contra sus formidables enemigos. Lo que intenta es poner un precio tan alto a la “victoria” adversaria, que desestimula la guerra como *ultima ratio*. La agresividad de Kim Jong-un, no es un problema de psiquiatría, sino el cálculo frío, rayano en la temeridad, de un Estado que tiene un plan que ha ido cumpliendo pacientemente. Parece evidente que Corea del Norte logró avanzar técnicamente para estar muy cerca de la miniaturización de las cabezas combativas nucleares hacia el fin del mandato de Kim Jong-il. Igualmente, hacia esta misma época, el programa coheteril, parece haber puesto a punto el diseño de los portadores de largo alcance de este armamento.

Kim Jong-un enfrentaba así un problema gigantesco. Tenía que probar las armas miniaturizadas y los portadores. Sin la realización de varias pruebas es imposible saber si los resultados del diseño ingenieril son realmente funcionales. La alternativa habría sido renunciar o posponer el programa nuclear. Ninguna de esas pruebas se puede hacer en secreto. El nieto de Kim tomó la decisión de seguir adelante. Parece haber estado listo para ello desde el mismo día en que tomó posesión, sustituyendo a su padre. Esta decisión tenía unas implicaciones obvias: el resto del mundo rechazaría los ensayos nucleares. Luego, para efectuarlos, la conducta norcoreana tenía que ser desafiante y en el borde mismo de la imprudencia.

Barack Obama, parece haber advertido a Trump, personalmente, que la situación más importante y crítica que iba a enfrentar estaba relacionada con el Corea del Norte. Y en eso estamos. La situación es extremadamente complicada: Trump no puede ser considerado como la persona equilibrada en este asunto y no se dispone de evidencias de que pueda ser controlado por sus consejeros antes de lanzar una guerra nuclear. Muy lejos estamos de JFK en octubre de 1962.

Y en medio de todo esto, el inquilino de la Casa Blanca decidió, de manera unilateral y contra la opinión unánime de todos los firmantes, iniciar los pasos para revertir un acuerdo internacional alcanzado con Irán, para controlar el desarrollo de un programa nuclear por parte de este país. Esto, unido a las enseñanzas de lo ocurrido a Muamar El Gadafi y a Saddam Hussein, luego de renunciar a sus respectivos programas nucleares, viene a redundar en la noción de que no se puede confiar en Estados Unidos. La RPDC no va a detener su programa nuclear, ni va a bajar el tono de su retórica mientras tenga pruebas que realizar.

Estados Unidos y sus aliados en el lejano oriente tienen un problema serio en sus manos. Y no tiene solución. Corea del Norte es una pequeña potencia nuclear que llegó para quedarse. Tiene la aparente posibilidad de alcanzar con su armamento al territorio continental de Estados Unidos, y dispone de un poder de fuego convencional que amenaza con barrer la mitad de Corea del Sur a las primeras horas de un enfrentamiento bélico. Este es, posiblemente, el verdadero elemento de contención.

Hipotéticamente, los sistemas de defensa antimisil de Estados Unidos deben derribar los ICBM coreanos. Cualquier persona con experiencia militar, o con sentido común, sabe que la efectividad de tales sistemas es una magnitud probabilística. Es decir, es virtualmente inferior al 100 por ciento. Por alta que pueda ser la probabilidad de destrucción del cohete enemigo, siempre existe una determinada probabilidad de fallo. Imagine el lector las consecuencias de no dar en el blanco. Lo que sí es completamente cierto es que no hay manera de parar una salva artillera de cerca de 150 mil proyectiles convencionales lanzados contra el Sur de Corea. El daño que estos pueden hacer está calculado de antemano por los dos bandos.

Un informe del Pentágono, preparado a solicitud del legislativo, aprecia que solo una operación terrestre puede destruir el programa nuclear norcoreano. Este informe parece haber sido filtrado a la prensa con el propósito claro de inmiscuir a los medios en el sistema general de presión sobre el *establishment*, especialmente su parte conservadora, que apenas ofrece contrapeso al ejecutivo en el presente.

Corea del Norte está cubierta de montañas o tierras altas en un 80 por ciento, y de bosques un 70 por ciento. Parece difícil hablar de ocupación militar terrestre después de observar las operaciones militares en Iraq y Afganistán. Esto sin contar con la presencia de armas nucleares. Las consecuencias de un enfrentamiento en la península son analizadas desde el punto de vista estrictamente regional. Todos se preguntan qué pasará en aquella parte del mundo. Sin embargo, no parece haber análisis del impacto en otras regiones del planeta en caso de producirse una guerra nuclear, o convencional en gran escala, en Corea, ni cuáles son los planes de contingencia de las grandes, medianas y pequeñas potencias a todo lo largo del planeta. El primer resultado será la proliferación nuclear.

Por otra parte, ¿es posible la guerra nuclear limitada al teatro de operaciones, justo del otro lado de la frontera con China y Rusia? ¿Acaso dejarán impunemente los chinos y los rusos que el aparato militar norteamericano se acerque a sus fronteras? Definitivamente, no. Los chinos con 1,420 kilómetros y Rusia con 17 kilómetros terrestres y 22 kilómetros marítimos de frontera, nunca permitirían una ruptura del *status quo* actual. Ambos participaron en la guerra de Corea del lado norcoreano con el objetivo de empujar al máximo, en la dirección Sur, la línea de demarcación. Hay información de que China estaría construyendo una carretera de 6 vías incluyendo túneles y puentes en la frontera con Corea. Eso es una vía rápida de transporte de tropas y técnica militar. Supuestamente, el grueso de las instalaciones nucleares norcoreanas se encuentra a una distancia aproximada de 90 kilómetros de la frontera china. Estos serían los primeros objetivos por ocupar o destruir en caso de invasión. Es posible que los norcoreanos permitan rápido acceso a los chinos a estas instalaciones. También es posible que no le permitan nada a “nadie” y decidan usar todo su poder en frenar a ese “enemigo” foráneo que tanto han inculcado en su pueblo.

Realmente, estamos presenciando el fin del mundo unipolar surgido con la desaparición de la URSS y el campo socialista, donde China y Rusia reclaman sus derechos como potencias y Estados Unidos trata de mantener su posición como única superpotencia mundial. De los tres, Rusia está en la posición más débil debido al estado de su economía y la cercanía de su frontera sur con regiones altamente conflictivas; pero China, actualmente una potencia militar de carácter regional, estaría en vías de ampliar el alcance de la proyección de sus fuerzas.

En cualquier caso, cualquiera que vuelva a usar el arma nuclear, va a desatar terremotos atómicos en otras partes del planeta. La primera explosión nuclear puede marcar un *free for all* de proporciones apocalípticas. Es aquí donde adquiere sentido la afirmación del general retirado Barry McCaffrey, hace apenas unos días, en una entrevista televisiva en *MSNBC*: Estados Unidos estarían en guerra con Corea del Norte “hacia el próximo verano”, y continuó: “El problema es que tenemos demasiadas crisis ahora, que potencialmente están sobrecargando los esfuerzos diplomáticos y la habilidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con ellas.”

La incapacidad práctica norteamericana de lidiar con un escenario de crisis múltiples en la escala planetaria puede dar lugar a situaciones como las siguientes:

China. ¿No podría la destrucción de Corea del Norte, y el acercamiento del dispositivo militar norteamericano a sus fronteras, provocar una necesidad de compensación en otras partes del Mar de China, a saber, Taiwán o la ocupación definitiva de Macao y Hong Kong? El primer síntoma de que se están produciendo cálculos en Beijing es la concentración de una mayor cuota de poder en manos

de Xi Jinping, por parte del Congreso del PCCh concluido recientemente. Por primera vez desde Mao Tse Tung, un dirigente chino alcanza poderes que parecen extraordinarios.

Rusia. ¿Se desbordarán los rusos y sus tanques llegarán al Dniéper o a la antigua frontera occidental de la Unión Soviética? ¿Las repúblicas del Báltico podrán sentirse seguras, luego de permitir la instalación de misiles de la OTAN en su territorio? ¿Retomará Rusia la cooperación estratégica con Cuba, para aprovechar un enclave geoestratégico en la misma trastienda norteamericana? Ya Putin dijo que no hay ninguna buena razón para no perseguir los objetivos estratégicos rusos con la misma agresividad que los norteamericanos.

¿Se irán a las manos la India y Paquistán, con armas atómicas por Cachemira?

¿Tendrá Israel que usar sus armas atómicas para impedir un relampagueante resurgir del programa atómico Iraní? Ya hay quien dice que la guerra entre esos dos países es inevitable. Y esa es una guerra eminentemente coheteril. En un mundo convulso, en que el apoyo de Estados Unidos es dudoso o imposible, el Estado de Israel es una chalupa en una marejada.

¿Se generalizará el enfrentamiento sunni-chuíta en Oriente Cercano y Medio? ¿Qué pasará con todas las milicias irregulares y combativas de Oriente Cercano? ¿Quién y cómo va a contener esta yihad? Un enfrentamiento real entre saudís y persas pudiese originarse en caso de una guerra en la península coreana. Las condiciones existen y las guerras a través de terceros están en marcha en la actualidad (Siria, Yemen, Iraq). Es evidente que el lado que Irán apoya, está llevando la mejor parte y la derrota de ISIS, que se anuncia próxima, deberá confirmar la victoria en toda la línea para el Estado persa.

Arabia Saudita tiene el ejército mejor armado de la región, con técnica militar occidental moderna y en cantidades suficientes, además de la presencia en su suelo de bases militares norteamericanas con cerca de 5,000 tropas. Sin embargo, en su intervención en Yemen a pesar de la pobreza y mal equipamiento de los Houthis, la coalición creada y dirigida por el ejército saudí ha demostrado ser bastante ineficiente, a pesar de contar con el apoyo tácito de Occidente, materializado en la indiferencia ante la crisis humanitaria desatada por los bombardeos implacables de dicha coalición. Hay reportes de que Arabia Saudí está empleando mercenarios latinoamericanos (colombianos, panameños, salvadoreños, chilenos y de otros países) en dicho conflicto, que en la actualidad se mantiene estancado. Los saudís son uno de los flancos más débiles entre los aliados de Estados Unidos. Las consecuencias de una guerra generalizada en Oriente Cercano, disparada por un conflicto en el Lejano Oriente, son potencialmente devastadoras para los sauditas y para sus aliados norteamericanos. La importancia de Arabia Saudita está directamente vinculada al petrodólar, nacido durante la administración Nixon. Lo que está en juego en este escenario es de vida o muerte... para el dinero. Es decir, para el dólar.

Obama, con su política de desenganche del medio oriente y la firma del tratado de desnuclearización con Irán, debilitó en cierta manera la posición saudita. No es casual que Arabia Saudita fuera el primer país visitado por el nuevo presidente Trump, seguramente tratando de recuperar “el espacio perdido” durante la anterior Administración, con la firma de la venta de armas más grande en la historia: \$110 mil millones de dólares.

La prudencia en el análisis del acontecer inmediato aconseja interpretar las gesticulaciones de Trump frente a Corea del Norte como una finta para encubrir un plan de acción real en Oriente Cercano y Medio. La creciente actividad de la diplomacia familiar entre Trump, Trump Jr., Kushner y el príncipe Mohammed ben Salmane, la compra de armas mencionada, el reciente golpe de Estado y el secuestro del primer ministro libanés por este último en Riyadh, indican que el príncipe heredero goza de un permiso ilimitado para actuar y que tiene un plan de envergadura. Aquí, posiblemente,

estamos presenciando la segunda fase del plan de restructuración del Medio Oriente iniciado en 2003 por los neoconservadores de George W. Bush.

Estados Unidos no pueden lidiar con un escenario global de semejantes proporciones. Los aliados occidentales no quieren la ocurrencia de semejante acontecimientos; pero no hay dudas de que todo el mundo está sacando sus cuentas. En este escenario es que tiene relevancia la supuesta afirmación de Steve Bannon a Trump en el sentido de que su principal preocupación no era ser sometido a un proceso de impugnación (*impeachment*), sino la aplicación de la enmienda 25⁵.

Cuba: ¿política interior o política exterior de Estados Unidos?

La política de la Administración Trump en lo relativo a Cuba está enmarcada en los propósitos del desmontaje del legado de Obama. El tema de Cuba, para Trump, es un problema más de política interior. Lo único importante para el Presidente es satisfacer al segmento mayoritario de los votantes cubanos. Las estadísticas son elocuentes: los 1.2 millones de votantes cubanoamericanos constituyen el 46 por ciento de los 2.6 millones de votantes latinos de la Florida. Los votantes latinos no-cubanos solamente aportaron un 26 por ciento del voto de su comunidad a Trump. Un 56 por ciento de los votantes de origen cubano se inclinaron por el magnate. Este grupo se comportó, estadísticamente, del mismo modo, e incluso mejor, que los votantes no-latinos del estado. La conducta de Trump ha sido inequívoca: mantener su base. Todo lo demás es despreciable.

En consonancia con esta ejecutoria, el Presidente firmó una “directiva” en junio de 2017, que pretende enmendar algunas de las decisiones de Obama en relación con los viajes y los negocios con entidades cubanas. Aunque la implementación de tales restricciones, por parte de las agencias gubernamentales, debe tomar un par de meses, indudablemente deberán tener un impacto directo en el enfriamiento de las relaciones entre ambos países y algún efecto negativo en materia económica para Cuba. En la práctica, esta “directiva”, ha sido calificada de débil por algunos analistas cubanoamericanos que esperaban “más” de Trump.

Un supuesto y misterioso “ataque sónico” contra diplomáticos norteamericanos en La Habana, fue reportado recientemente. A consecuencia de este, el Departamento de Estado anunció la retirada del 60 por ciento del personal diplomático y expulsó a 15 diplomáticos cubanos de Washington. Al tiempo que la parte norteamericana aseguró la existencia de tales ataques, la parte cubana, no los negó de plano, sino que ofreció su cooperación para investigar qué había ocurrido. El FBI, autorizado a realizar sus investigaciones en Cuba, en lo que puede considerarse una movida sin precedentes, no ha cooperado con las autoridades cubanas. Estas han comenzado a presentar pruebas de la no ocurrencia e imposibilidad de tales ataques. Esta situación ha sido poco comentada en Estados Unidos y nadie, salvo los medios interesados en atacar al gobierno cubano a toda costa, parece hacerse eco de la misma.

En Cuba, ha comenzado a circular una elucubración popular sobre el incidente, afincada en nuestro pasado histórico común: los “ataques sónicos”, son un nuevo Maine⁶. O sea, una autoagresión. Como resultado del supuesto “ataque”, se decidió que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá,

5 La Sección Cuarta de la Vigésimaquinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que “cuando el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro cuerpo que el Congreso autorizara por ley transmitir al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, su declaración escrita que el presidente está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo, el vicepresidente inmediatamente asumirá los poderes y obligaciones del cargo como presidente en funciones”.

6 Se alude a la autovoladura del acorazado Maine por los norteamericanos, en la rada habanera en 1898, que se atribuyó a España y sirvió como pretexto para entrar en la guerra Hispano-Cubana en ese año.

se encargara de la emisión de visas a los cubanos (!?): “¡Nos la pusieron en China!”⁷. O como dice hoy en las calles de la Isla el cubano de a pie, bromista empedernido, cambiando la ubicación geográfica del problema: “¡Nos la pusieron en Colombia!”. El efecto práctico de tal decisión es impedir a los cubanos la obtención de visas para viajar a Estados Unidos. En lo relacionado con las visas de inmigrantes, es la suspensión, *de facto*, de los acuerdos migratorios entre los dos países.

El cambio de enfoque de la Administración Obama, generó una esperanza colectiva en la población cubana y sacó de la “zona de confort” al gobierno cubano, acostumbrado al discurso y las acciones hostiles de Estados Unidos. Por el contrario, la “directiva” de Trump y las decisiones del Departamento de Estado, con efecto, casi exclusivamente, sobre el ciudadano común, regresan a un modelo fracasado y colocan a los dirigentes cubanos en una situación de enfrentamiento al enemigo “natural”, con la que están acostumbrados a lidiar: David contra Goliath, que legitima la postura de resistencia permanente.

Lo que está ocurriendo en relación con Cuba, rebasa el marco de la política interior norteamericana. Cuba no tiene hoy la relevancia que adquirió durante la “Guerra Fría”; pero vientos helados presagian el resurgimiento de un clima que pudiera guardar ciertos puntos de contacto con aquella época.

16 militares retirados norteamericanos de alto rango, en carta al Consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster en abril pasado, pidieron a la Administración de Donald Trump continuar el proceso de normalización de relaciones con Cuba, en aras de la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región. La misiva decía literalmente: “La ubicación de Cuba en el Caribe y la proximidad a Estados Unidos la convierten en un socio natural y estratégicamente valioso sobre cuestiones de interés inmediato, incluido el terrorismo, el control de fronteras, la interdicción de drogas, la protección del medioambiente, y la preparación para emergencias” y continuaba: “Reconocemos que el régimen actual debe hacer más para abrir su sistema político y dialogar con el pueblo cubano. Pero si no somos capaces de participar desde el punto de vista económico y político, lo cierto es que China, Rusia, y otras entidades cuyos intereses son contrarios a los de Estados Unidos, correrán a llenar ese vacío”. Los militares retirados, señalaron que es de interés para la seguridad de Estados Unidos garantizar la estabilidad económica de la Isla.

Un fenómeno meteorológico, a finales de septiembre, el huracán Irma, provocó daños de consideración en Cuba. La mayor parte de la ayuda para reparar los daños causados por el meteoro, vino, rápidamente, de Rusia. Los pasos dados por Barack Obama para mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se inscriben dentro de una visión que acercó a los Estados Unidos al ejercicio del liderazgo en forma de *realpolitik*, en algunos aspectos de su política exterior. El acuerdo multinacional con Irán arriba señalado, la firma de los Acuerdos de París, se inscriben dentro de este esfuerzo. De paso, la Administración demócrata pretendió liberar su política de la acción de poderosos grupos de presión.

La normalización de las relaciones con Cuba implicó la primera ruptura de una Administración norteamericana desde 1959, con los grupos cubanoamericanos que ayudaron a definir la política hostil que primó en ese período. El voto cubanoamericano por Trump expresa la negativa de ese grupo a normalizar las relaciones con Cuba; es decir, la negativa a perder sus privilegios en el trato político y migratorio. Esto es, en menor escala, la misma reacción de los grupos de presión pro-israelíes que temieron perder sus privilegios políticos y del apoyo militar norteamericano, cuando la Administración inició el intento de normalizar sus relaciones con Irán.

7 Para el lector no cubano: “Nos la pusieron en China” es una frase popular cubana para caracterizar un problema prácticamente insoluble.

En la práctica, el apoyo del exilio cubanoamericano a Donald Trump, en un momento en el que el diálogo es finalmente posible, representa la ruptura definitiva con su nación de origen y con la idea de una reconciliación futura, incluso aunque hayan cambiado las condiciones políticas en Cuba. Esto indica, también, que los principios de una oposición cubana en un “exilio transitorio” en Estados Unidos, se están transformando en intereses comunitarios perennes movidos por el acontecer propiamente norteamericano.

Hay que añadir que no todos los emigrantes cubanos votaron por Trump. Una parte importante de la emigración cubana en Estados Unidos está de acuerdo con la normalización de las relaciones entre los dos países, viendo en ello una razón importante para el desarrollo económico y político de la Isla. Por su lado, los cubanos insulares son también favorables a este acercamiento, en la medida en que esto mejore su cotidianeidad.

Trump “tiró un hueso” al grupo cubanoamericano en forma de “directiva presidencial”; pero, en la práctica, la influencia de ese grupo en la conformación de una política hostil contra Cuba es limitada, y tiene fecha de caducidad. El senador Marco Rubio, hijo de emigrantes cubanos, quien fuera favorito del *Tea Party*, parece ser el depositario de la golosina. Trump se la entregó, personalmente, luego de firmarla. Esto no es un hecho fortuito. Marco Rubio trabajó intensamente con la Casa Blanca para lograr ese “resultado”. Puede especularse que la acción de Trump es un *quid pro quo* que pretende evitar que el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por Rubio, se mezcle en la múltiples investigaciones de *Russiagate* en marcha y conservar un “amigo” en el legislativo, donde cada día le quedan menos.

2018

El fin de este año zanahórico, está a la vista. Los temas centrales de los dos últimos meses parecen ser *Russiagate*, la crisis en el lejano oriente y el esfuerzo por pasar el proyecto de Ley que reforme el sistema fiscal norteamericano, arriba mencionado.

Russiagate está al rojo vivo con la acusación de Paul Manafort, director de la campaña presidencial de Trump por varios meses en 2016, su asociado Rick Gates y George Papadopoulos, asesor de política exterior de la propia campaña. Entre los cargos presentados contra los dos primeros, figuran el de conspirar contra Estados Unidos, ser agentes de estados extranjeros no registrados, además de múltiples acusaciones de lavado de dinero. El tercero se reconoció culpable de haber mentido al FBI en relación con la coordinación con agentes rusos para favorecer la campaña de Trump y parece haber estado cooperando en secreto con el consejero especial desde julio pasado.

Inmediatamente después de presentadas las acusaciones ante el Tribunal, el director de una poderosa firma de cabilderos, asociado a los demócratas, de los que además constituye un importante donante, renunció, ante el anuncio de su filiación con Manafort para avanzar una agenda ucraniana que apoyaba al depuesto presidente Viktor Yanukovich.

Robert Mueller ha destapado la “caja de Pandora”. Más allá de la posible intromisión rusa en las elecciones norteamericanas, está a la vista la naturaleza de la corrupción institucional que subyace en la tramoya de la política interior norteamericana. Un intelectual cubano, ya fallecido, comentó a los autores que probablemente el hecho más notable, y casi completamente ignorado, de la política norteamericana en el siglo XX, fue la superación del *macartismo* y, con este, de la tentación totalitaria. Tal vez, Robert Mueller, quien parece tener una reputación intachable, es la personificación de la vocación norteamericana de respeto a sus Leyes e instituciones.

Posiblemente durante gran parte del año 2018, en política interior, será más de lo mismo: la disfuncionalidad como norma en la vida política norteamericana llevada por individuos sin las competencias adecuadas, o bloqueada por la imposibilidad de alcanzar compromisos entre grupos refractarios. Es de esperar la profundización de la parálisis del Estado, los escándalos político-financieros, el ascenso del “populo-twitterismo” y los desarreglos del aparato ejecutivo. Pero a fines de año es muy probable un regreso abrupto a la realidad en la vida política con las elecciones de medio término. Estas presagian el posible regreso de una mayoría demócrata en el Congreso. Las recientes elecciones para las gubernaturas en Virginia, New Jersey y Seattle anuncian un año difícil para los republicanos incapaces, e imposibilitados, de romper con el trumpismo, lo que exacerba las divisiones locales y nacionales, y envenena el cotidiano de la mayoría de ciudadanos norteamericanos. Más allá de entorpecer el quehacer diario nacional, el paso de Trump por la presidencia afectará, perdurablemente, el prestigio norteamericano y la confianza que puedan haber depositado en ellos sus aliados occidentales.

Esto, a) por cuestionar y fragilizar los principios del equilibrio mundial actual; b) por su voluntad de instaurar barreras aduanales; c) por su desafección respecto a los problemas ecológicos del planeta; d) por sus repetidas amenazas de usar bombas atómicas y e) por poner en evidencia la proporcionalidad de la corrupción del sistema político estadounidense a su poderío económico y militar. Estas razones están siendo metabolizadas por muchos de nosotros y la resultante es la creciente percepción de un país con intereses incompatibles a las necesidades del resto de los humanos.

En política exterior la manifestación de estas disfuncionalidades puede hacer realidad las ominosas predicciones del general retirado Barry McCaffrey. Estados Unidos pueden estar abocados a una multiplicidad de crisis en la escala internacional, que su diplomacia y fuerzas armadas serán incapaces de manejar.

Para Cuba, lo que hoy sucede dentro de Estados Unidos, tiene relevancia. La congelación de las relaciones, después del breve “calentamiento” producido por Obama, es el regreso a los viejos esquemas de hostilidad entre ambas naciones. El embargo/bloqueo se mantendrá por el futuro previsible. Es posible que se reduzcan los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba y que esto tenga un cierto impacto en los sectores estatales y privados de la industria turística. Pero estos viejos esquemas son obsoletos y están condenados a desaparecer.

El grupo cubano no tiene que desanimarse. Es muy importante no generar una dependencia decisiva de la economía cubana del turismo o de los negocios con los norteamericanos. O con cualquier otro Estado. Cuba tiene que encontrar y explotar con efectividad todas las posibilidades que se presenten de optimizar y hacer viable su economía nacional y su sistema político.

Este es el momento de ejercer un derecho de inventario y discutir e implementar el proyecto de la nación: el proyecto de una “Cuba Posible” y próspera a largo plazo. Este tiene que ser el resultado del debate nacional, con la emigración incluida, como aceptación del pluralismo y la participación de todos aquellos que quieren llevar adelante las esperanzas de una república cubana. No se trata de transitar hacia una economía de mercado o hacia el capitalismo, aunque sí de una evolución hacia una economía más diversificada, la autonomía alimentaria, el desarrollo de un empresariado y un sistema bancario nacional, tanto como del resguardo de un sistema educativo actualizado y eficiente. Se trata de elaborar, con la diversidad de opiniones, la síntesis apropiada para lograr un Estado de eficiencia económica y bienestar social. En realidad, la tendencia debe ir hacia la equiparación del nivel de vida entre cubanos de un lado y otro del Estrecho de la Florida, para lograr retener a los jóvenes y profesionales cubanos, sin los que el desarrollo de la nación estaría comprometido.

Este es también el momento de reconocer las acciones del gobierno cubano que permitieron a la nación sobrevivir a la debacle del socialismo en Europa y mantener, e incluso mejorar, los índices en materia social, que son logros obtenidos en el último medio siglo. Si se quiere un análisis riguroso, no exento de puntos de vista discutibles, recomendamos al lector interesado leer el ensayo de la Dra. Emily Morris, publicado en *New Left Review* y titulado “*Unexpected Cuba*” (Cuba Inesperada)⁸.

Los gobernantes cubanos deben comprender que no todo el que tiene una opinión diferente es un enemigo. Somos muchos los que compartimos la idea de que existe una ligazón directa entre la verdad, el pluralismo y su corolario: cada ciudadano tiene derecho a expresar sus ideas.

Nada de lo arriba dicho es posible sin una sincera revisión del sistema político cubano, incluyendo la de los canales de expresión individual y las formas de designación de sus dirigentes. Es hora de incorporar a nuestras reglas de gobierno la idea de que el vasto movimiento centralizador que percibe todo lo que se le escapa como un elemento del que hay que separarse, es fundamentalmente negativo para la nación.

Uno de los temas centrales en Cuba es permitir la movilidad social. Los individuos y grupos están dispuestos a realizar esfuerzos para mejorar su situación. Toda acción que se oponga a esta tendencia, por parte del sistema político, crea fricciones disruptivas para el mismo.

De lo que se trata no es de reformar el socialismo. El Socialismo real no puede ser reestructurado. Tampoco se trata de adoptar a ciegas el modelo de la democracia occidental. Ese modelo está sobrevalorado. Se trata de mantener los logros alcanzados en materia social y el humanismo de los revolucionarios cubanos de la segunda mitad del siglo pasado, y lograr construir un orden social viable y duradero, que rompa con la línea quebrada que ha sido la historia de la política cubana desde las guerras de independencia. Se trata de adoptar la idea actual del realismo político, que implica tener la capacidad para ceder, si es necesario, en aquellas posiciones que impiden conseguir cierto progreso en otras más importantes o centrales.

El Estado cubano tiene por delante un sinnúmero de problemas que resolver y tareas que enfrentar. Para ello necesita del apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Sería negar la realidad no reconocer el desencanto que late en los cubanos en la actualidad. Existe un epifenómeno cubano que polemiza abiertamente con el *status quo*. La incorrecta interpretación de este epifenómeno conduce inmediatamente a la reducción de la base política de los gobernantes y candidatos a gobernantes en Cuba y, por ende, conspira contra su legitimidad.

Este año zanahórico, presagia tiempos difíciles y complicaciones innumerables en la escala planetaria. En muchos aspectos, la llegada de la actual Administración norteamericana al poder en enero pasado, nos hace reescribir la Ley de Murphy para la política: “Cuando creas que las cosas no pueden ponerse peores, aparece Donald Trump.”

⁸ <https://newleftreview.org/II/88/emily-morris-unexpected-cuba>

Este artículo puede encontrarse traducido al español en el Blog La pupila insomne: <http://lapupilainsomne.jovenclub.cu/?p=46592>

Por Eugenio R. Balari

Acaba de celebrarse nuevamente, por vigésima séptima vez, una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (el órgano más representativo o prestigioso de la imprescindible institución mundial), donde, una vez más, Estados Unidos ha quedado aislado internacionalmente; todo esto como consecuencia de su anacrónica, exagerada, injusta y reiterativa política del bloqueo/embargo contra Cuba.

La comunidad mundial de naciones ha vuelto a reiterar su apoyo a Cuba contra el bloqueo/embargo, ahora con 191 votos a favor y dos en contra (Estados Unidos y su tradicional aliado, Israel). Contundente ha sido el universal respaldo recibido por Cuba, para que se ponga fin a la punitiva y abusiva política que se mantiene implementada contra la pequeña nación caribeña.

Pero, ¿qué sucedió en Naciones Unidas? Simplemente, o como era de esperar, la inmensa mayoría de las naciones del mundo volvieron a ratificar su rechazo a la injusta política norteamericana contra Cuba; reiterada ahora en 27 oportunidades consecutivas. Son pocos los que se identifican con las desproporcionadas, agresivas y cuestionadas acciones que se ejercen contra el país antillano, más pequeño en territorio y población que su poderoso y tradicional vecino.

Paradójicamente, en el año 2017 del siglo XXI, se quiere hacer ver por esta Administración que el haber mantenido tal política y sus draconianas medidas durante más de medio siglo no ha sido suficiente tiempo para tener que derogarla y, mucho menos, considerarla fracasada. Porque de acuerdo a tal pensamiento, es necesario continuar castigando al pueblo cubano (que, en definitiva, es quién sufre las consecuencias) por el “delito” de haber cometido el gran “pecado” de defender la independencia y soberanía de su país al precio que fuera necesario.

Sociológicamente resulta interesante y significativo que en las complejas y contradictorias circunstancias políticas mundiales (pletóricas de grandes contradicciones y diferencias), 191 naciones, prácticamente la totalidad de los países del mundo, se pronunciaran y votaran a favor de poner fin al improcedente y brutal bloqueo/embargo contra Cuba.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha sido un acontecimiento más que demostrativo de la oposición universal a una política abusiva e intolerante, que ha lastimado sensiblemente a varias generaciones de cubanos y a muchos ha obligado a emigrar de su país. Sin embargo, y con independencia de que analistas y agoreros constantemente presagian el inminente “desastre nacional”, esa situación no ha ocurrido, ni parece probable ocurra; por lo que tal política se encuentra, irremediablemente, condenada a hacer daño, pero sin lugar a dudas a continuar fracasando.

Los argumentos esgrimidos por la aislada y airada representante norteamericana en la Asamblea de la ONU (quien, por demás, hizo gala de inaudita arrogancia y manidos argumentos políticos), resultan adulterados y triviales, y a pesar de su reiteración en los medios del exterior, muy pocas personas creen en ellos.

En esa su desafortunada y luego cuestionada intervención, la delegada de Estados Unidos expresó “que cada año la Asamblea General pierde su tiempo y Estados Unidos se ve sometido a todo tipo

de reclamaciones ridículas”, lo que sencillamente es una falta de consideración a la institución y a los países miembros.

Con ello ha desconocido que la ONU es el organismo mundial donde participan y se dirimen las más importantes cuestiones de la política planetaria; y, además, su intervención muestra desnudamente el pesado malestar norteamericano producto del aislamiento político en este tema.

Como era de esperarse su discurso desencadenó intervenciones con comentarios opuestos a sus desafortunados criterios; los cuales no escuchó porque se retiró del recinto de la discusión. Pero esta señora sólo llevaba la encomienda de su Presidente: ratificar en la Asamblea que Estados Unidos mantendría el bloqueo/embargo contra Cuba, menospreciando así el sentir de los países y el papel asumido por las Naciones Unidas.

Con independencia de la abrumadora votación a favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero; de igual forma se expresaron las representaciones de la CELAC, el CARICOM, el Grupo de los 77 más China, el Movimiento de Países No Alineados, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Organización de Cooperación Islámica, y el Grupo Africano. Significativo fue también que 10 senadores estadounidenses solicitaran a la Administración de Estados Unidos que se abstuviera en la votación.

Estados Unidos insiste en mantener su desprestigiada política, y queda de manifiesto ante la opinión pública internacional cómo piensa y se solidariza la gran mayoría de las naciones del mundo con Cuba; por supuesto, todos menos la actual Administración republicana. Esta situación, junto a otras conocidas acciones del ejecutivo norteamericano, hace pensar que el otrora pragmatismo de Estados Unidos ha desaparecido, al menos en política. Sería aconsejable analizaran y recuperaran sus añejas prácticas y experiencias (durante años fueron en ello los campeones); deberían intentar re-encontrar la “brújula política”, porque al parecer en esto, y otras cuestiones, anda perdida.

El sentido común dice que es hora ya que Estados Unidos recapacite y resuelva, con honradez, la eliminación del inhumano y controvertido tema del bloqueo/embargo a Cuba. Igualmente debería aprender a valorar los criterios y el sentir de las amplias mayorías de países, aunque sólo sea por aquello de la “incondicionalidad” a la democracia que dicen practicar o defender. Lamentable que la diplomacia estadounidense (en ciertos casos), se oriente por la tozudez, subestimación o intransigencia; o más bien por deseos que no corresponden a realidades y se les nuble la razón, auto-colocándose luego en una aislada y embarazosa situación política. Pero lo importante es que la comunidad internacional de naciones volvió a solicitarle a Estados Unidos que concluya, de una vez y por todas, con esta arbitraria, contraproducente, injusta, cruel, fracasada, y dañina política contra el pueblo cubano.

En cuanto a Cuba, como conoce bien al que ha querido ser su adversario (y sobre todo a los alenadores de tal política), pienso sabrá a qué atenerse y cómo tratar con esta Administración. Igual continuará esforzándose por desarrollar su economía, por cooperar con el resto del mundo y por optimizar su modelo de desarrollo económico/social; pero sobre todo, y con la firmeza que la ha caracterizado, seguir defendiendo los más sagrados intereses patrios: la independencia y la soberanía de la nación cubana.

Por Domingo Amuchástegui

Miremos al sur

Habituados a mirar con preferencia hacia el Norte, deslumbrados unos por lo que ofrece para los que tienen con qué y otros –con más profunda visión– a lo que este súper-poder hace y deshace a su interior y alrededor del mundo, ahora todos nos mantenemos a la expectativa de lo que podrá hacer o no el nuevo, inesperado e impredecible inquilino de la Casa Blanca, Donald J. Trump. Pero sin restarle mérito y necesidad a esta actitud expectante, convoco a todos, como imperiosa necesidad, a echar una mirada cuidadosa a lo que pasa al sur del río Bravo y hasta la Patagonia. No olvidemos que es nuestra Patria Grande y que lo que allí ocurre nos afecta, para bien o mal, de mil maneras diferentes.

Una mirada muy reciente al contexto económico de la región nos revela no solo sus grandes problemas, sino las múltiples derivaciones que de los mismos se desprenden y de los cuales no nos exceptuamos. El economista y vice-presidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, lo presenta en los términos siguientes: “Después de seis años de desaceleración y dos en franca recesión, estamos saliendo y eso es positivo. Pero crecer 1,5 por ciento este año y 2,5 el próximo tampoco es para echar las campanas al vuelo (...) Esas tasas no van a ser el motor de la reducción de la pobreza. Fortalecer la productividad y hacer un buen manejo macroeconómico: ahorrar en los buenos momentos para gastar en los malos.” (Tomado de El País, J.M. Ahrens).

Dos ejemplos bien elocuentes los tenemos en los casos de México (caracterizada como quinta economía del mundo) y Brasil (ocupando la sexta posición en la economía mundial), economías tan solventes que deberían asegurar niveles de equidad y bienestar social en correspondencia, pero donde los niveles de población en estado de pobreza y de pobreza extrema continúan gravitando sobre un tercio o más de sus respectivas poblaciones en tanto más de un 40 por ciento y hasta más del 50 por ciento de la riqueza se concentra en apenas un 10 por ciento de la población. En México, la pobreza continúa aumentando, de un 42 por ciento a un 46,2 en los años más recientes, afectando a 53,3 millones de personas de una población de 120 millones, un patrón sostenido y agravado desde hace más de 20 años.

En Brasil, con una población de alrededor de 210 millones de habitantes, la reducción de los niveles de pobreza (según CEPAL de un nivel del 38 al 18 por ciento) registrada mayormente durante el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, fundador y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), no tuvo una continuidad sostenida con el período de Dilma Rousseff, factor que la privó del necesario apoyo popular para contrarrestar el golpe de Estado pseudo-legal orquestado por fuerzas de la derecha. Hoy todavía un tercio de la población brasileña bordea los límites de pobreza y de extrema pobreza. *The Borgen Project* resume esta tendencia razonando que: “Esto significa que existe un considerable abismo entre los ricos y los pobres.” Para el profesor de economía de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, Maercio Menezes, la conclusión no deja lugar a dudas: “Brasil es uno de los países más desiguales del planeta...”, donde “la reducción de la pobreza en la década pasada ha sido de menor cuantía.”

La etapa actual de la crisis venezolana y la región

Pasemos revista a diversos conflictos y tendencias que vienen caracterizando la región a través de, o tomando como punto de referencia, el más turbulento episodio de la actualidad y el que más directamente nos toca: Venezuela. Este caso refleja las muchas maneras de manifestarse esta crisis, seguido de las diversas expresiones de crisis y cambios desatados en la región a la vuelta del nuevo siglo.

Semejante giro alcanzó su clímax en Venezuela con su “Movimiento V República” y la figura de Hugo Chávez, que irrumpían como el punto álgido de un dramático desplazamiento regional hacia diversas opciones de izquierda. En la primera década del nuevo siglo, dichas opciones sumaban la mayor parte de los países: Brasil con el Partido de los Trabajadores (PT), con Lula como figura cimera; Bolivia marcaba un notable hito de cara al futuro con la victorias del MAS y la dirigencia encabezada por Evo Morales y Alvaro García Linera y, en la Argentina, con un peronismo heterogéneo, bajo la conducción de los Kirchner regresaban al gobierno por sus fueros de antaño, pero con nuevas perspectivas; la Alianza País en Ecuador vencía repetidamente encabezada por Rafael Correa y Lenin Moreno con un proyecto de cambios importantes; el infatigable Frente Amplio de Uruguay se abría paso con José Mujica (Tupamaro de pura cepa y excelente exponente de la nueva conciencia crítica en la izquierda latinoamericana), seguido después por Tabaré Vázquez y Raúl Sendic como vice presidente (hijo del que fuera fundador y dirigente de los Tupamaros). Las alianzas políticas en Chile con la Concertación (compuesta por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista), permitían desalojar la primacía de la derecha e instalar un par de gobiernos encabezados por figuras socialistas (Ricardo Lagos y Michelle Bachelet) comprometidas con algunos cambios menores. En Centroamérica, nuevos gobiernos en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, daban inicio a algunos procesos de cambio, más próximos a la contradictoria ruta iniciada por los sandinistas en 1979. Todos ellos, en algún grado o medida, reflejaban en sus opciones, en su pasado, en varios de sus actores, nexos y compromisos, aunque en otros contextos y de cara a otros horizontes, lo que alguna vez se describiera por un politólogo francés –Régis Debray– como “La Larga Marcha del Castrismo en América Latina”, iniciada en enero de 1959.

La suma de todos estos procesos desestabilizaron la hegemonía política y estabilidad institucional de los bloques oligárquicos dominantes, en adición a la erosión causada por sus respectivas –en la casi totalidad de los casos– desastrosas políticas y el agravado proceso descrito al comienzo por el ejecutivo del Banco Mundial. Y su inmediata reacción no se hizo esperar, traducándose en hostilidad permanente, por momentos violenta y golpista, y procurando el beneplácito y respaldo del siempre fiel vecino del Norte. Si fuimos testigos, años atrás, de “los contra” y “los recontra”, en Nicaragua, los kaibiles en Guatemala y atlatkat en El Salvador –con plena y probada injerencia de parte de Estados Unidos, baste solo mencionar el escándalo “Irán-Contra” o la mil veces injustificada invasión de Granada– y de tempranos golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos como el de Honduras y poco después a Fernando Lugo, ex-obispo católico, en Paraguay, sin que faltaran los intentos contra Correa, en Ecuador. En la presente etapa, el caso de Venezuela ofrece sobrada evidencia del recurrente patrón de violencia frente al gobierno chavista democráticamente electo y refrendado en las urnas en repetidas ocasiones.

Hoy los poderes mediáticos nos ofrecen un abrumador panorama de Venezuela, que se resume en la repetición de los esquemas siguientes: el gobierno ya no es tal, sino simple dictadura; hambre espantosa, caos económico provocado por la política chavista, represión de manifestantes, corrupción y narcotráfico. Si esto es así hoy –con sus gigantescas exageraciones y distorsiones–, ¿por qué el primer golpe de Estado tiene lugar en 2002 a poco tiempo de instalado el gobierno chavista? ¿O por qué, fallido el primer golpe, sobreviene el segundo poco después mediante el uso de PDVSA para hacer colapsar económicamente al chavismo? ¿O el intento de sabotear el funcionamiento parlamentario del país, retirándose todos los opositores electos al congreso? Chávez ganó originalmente con las

instituciones y mecanismos de poderes existentes, es decir, diseñados para servir al bloque oligárquico representado principalmente por el binomio Acción Democrática y COPEI. Los mismos no pudieron contener ni evitar su propio desmoronamiento y la legitimidad del chavismo representó una mayoría abrumadora, ratificada en repetidos ejercicios electorales y de referéndum –menos uno. El bloque oligárquico nunca aceptó su derrota y desde el primer día intentó violentar y revertir los resultados electorales, la nueva constitucionalidad y sus instituciones, así como su estabilidad económica y social, validada por amplias mayorías.

La nueva etapa de la crisis venezolana está indisolublemente ligada al colapso de los precios del petróleo. Razona un conocido sociólogo y activista, Emiliano Terán Mantovani, escribiendo para una publicación alemana especializada en América Latina, *Amerika21*: “El colapso de los precios internacionales del petróleo fue crucial en el desarrollo de la crisis en Venezuela, pero no es el único factor en la explicación de la misma...”. No por casualidad en medio de la crisis, en el 2015, Barack Obama emite una orden ejecutiva caracterizando –cual fulminante amenaza– al proceso venezolano como “una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos”, pronunciamiento que parece sugerir la presencia de proyectiles balísticos o bombas nucleares apuntando de Caracas a Washington, o tropas venezolanas desembarcando por Cayo Hueso o que todas las gasolineras CITGO o refinerías de PDVSA en Estados Unidos estarían complotadas en algún siniestro plan... A partir de este úkase de Obama – ¿pura casualidad o complot?– un grupo minoritario de países latinoamericanos, orquestados y encabezados por el secretario general de la OEA, aquel “ministerio de colonias” del que nos hablara nuestro Canciller de la Dignidad, Raúl Roa García, se lanzan a aislar, socavar y propiciar el derrocamiento del gobierno PSUV-Maduro.

No puede pasarse por alto que en una economía que vive de la extracción petrolera y de algunos otros minerales, que nunca modificó esencialmente –ni con Betancourt o Carlos Andrés Pérez o Caldera– su dependencia parasitaria/extractiva en un proyecto de desarrollo industrial y agrario diversificado –que no modificó en lo esencial tampoco el chavismo– al pasar de la noche a la mañana de una prolongada luna de miel de precios del petróleo a nivel mundial que bordearon los 110-120 dólares el barril a 22-23 dólares –coincidiendo con la muerte de Chávez– no es muy difícil imaginar la hecatombe económica que se precipitó y se ha prolongado hasta hace muy poco (precios actuales rondando apenas por los 42-44 dólares el barril). La coyuntura se presentó –a los ojos de los golpistas de siempre– como óptima para capitalizar el desgaste acelerado del gobierno PSUV-Maduro no por medios legales, legislativos u otros de naturaleza constitucional o nacidos de compromisos negociados, sino por el desafío callejero violento (las denominadas “guarimbas”), como ha sido hasta ahora.

¿Dictadura? Aunque se repita miles de veces a diario, el concepto no se aplica ni funciona en Venezuela hasta hoy. El ejercicio del gobierno no se ejerce irrestrictamente por una persona o grupo verticalmente de arriba a abajo; el poder económico más allá del sector estatal sigue estando en manos privadas; lo mismo puede decirse de los medios de información, encuestadoras y de varias instituciones federales, de algunas gobernaciones y no pocas alcaldías. Si fuera una dictadura, Maduro hubiera forzado el clásico pucherazo y manipulación de las cifras a fin de que el candidato presidencial ganara con una mayoría holgada y favorecer a la mayoría de sus aspirantes a ocupar un escaño en el congreso, como hiciera el PRI en México, en 1988. ¡Y no lo hicieron! Cuando en vida de Chávez este perdió un tema que llevó a referéndum, no violentó los resultados y admitió su revés. Habría que preguntarse si estábamos en presencia de una “dicta-dura” o una “dicta-blanda”. Cuando el infame “Caracazo” –de triste recordación por sus miles de muertos– nadie en la OEA o grupo de sus Estados miembros levantaron sus voces en contra del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, ni tampoco los poderes mediáticos lo crucificaron. Quien no reconozca en esto un marcado

doble rasero y una intencionalidad política claramente definida, es porque es ciego y sordo o porque claramente pretende escamotear la realidad a fin de fabricar los mensajes que mejor le convengan.

¿Corrupción en el gobierno venezolano? ¿Que levante la mano el que esté libre de pecado! Y máxime en una economía que bailaba su “Danza de los Millones” con los precios del petróleo, desde Washington hasta Buenos Aires. ¿Narcotráfico? Al parecer, por lo que los poderes mediáticos describen, ahora resulta que la Venezuela chavista inventó y patentó el narcotráfico. Los circuitos fundamentales del narcotráfico siguen siendo Colombia-Centroamérica-México y Brasil-Paraguay-Bolivia-Argentina, hacia Estados Unidos y Europa, amén de las conexiones con los mercados asiáticos, y ya no son ni noticias. Muchos, santos y buenos, se bañan o salpican con sus jugosos beneficios. Deberían mirar con cuidado lo que es la frontera colombo-venezolana antes de incurrir en fabricaciones simplistas. Mucho antes de que Chávez o Maduro devinieran en actores políticos, las conexiones colombianas con Venezuela en materia de narcotráfico eran antológicas. Los estudios al respecto abundan, hasta por expertos de *National Geographic*, que describían a principios de los 90 del siglo pasado, entre otros canales, el flujo constante de embarques masivos de drogas a través del Orinoco. Venezuela ha sido siempre un actor secundario en dichos circuitos, antes y ahora; el centro ha sido, y es, Colombia.

Mirando hacia dentro

Es innegable que en la configuración actual de la crisis en Venezuela concurren también importantes causas que nada tienen que ver con la injerencia norteamericana o los desafueros golpistas de diversos actores de la extrema derecha venezolana, y sí con el elevado desgaste político del bloque PSUV-Maduro, derivado de circunstancias, errores y deficiencias, originados en su seno, entre los que sobresalen los siguientes: a. Ausencia de un proyecto de desarrollo económico diversificado durante el largo período de “vacas gordas”; b. La incapacidad para generar respuestas de emergencia eficaces frente al impacto del desastre de los precios del petróleo; c. Un creciente debilitamiento de los mecanismos de articulación, esclarecimiento y movilizaciones entre los sectores populares seguidores del chavismo, generando una visible pérdida de respaldo y/o apatía entre los mismos, tendencia plenamente demostrada en la elección presidencial de Maduro –ganada por un margen mínimo– y ganando la derecha la mayoría en el congreso; d. La gravitación de los procesos de corrupción tiende a acentuar semejantes tendencias; e. Los conflictos y rupturas con fuerzas aliadas dentro del PSUV y del Polo Patriótico, añadieron pérdidas sensibles; e. No menos desgastante y causa de enervante descontento entre muchos es la perniciosa prolongación de la actividad de la delincuencia y el crimen organizado –que no se inventaron ni florecieron con el chavismo– que se traduce en un serio desafío de inseguridad ciudadana; f. La prematura muerte de Chávez y la percepción de muchos de que Maduro no posee los atributos carismáticos, culturales y cualidades de liderazgo de Chávez; f. Una clara subestimación de las potencialidades de las fuerzas de oposición nucleadas alrededor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), sucesora de la fallida Coordinadora Democrática que intentó, infructuosamente, enfrentarse a Chávez.

Desde el primer día, la victoria electoral de la MUD se tradujo en una prioridad única: desalojar violentamente al gobierno del PSUV-Maduro. A partir de semejante objetivo, sectores de este bloque que agrupa una atomizada oposición de más de 20 partidos y movimientos políticos, buscan en la confrontación violenta en las calles precipitar la caída del gobierno, ejercicio inútil hasta ahora, olvidando que si las elecciones pasadas fueron para la MUD una victoria, para el gobierno PSUV-Maduro fue una clara advertencia de que se imponía un viraje total con respecto a sus propias debilidades y errores y en las acciones a tomar frente a sus opositores violentos. Olvidan los sectores más violentos (López y Capriles, las cabezas más visibles) que no obstante su victoria electoral, el PSUV sigue siendo el mayor partido político del país, que conserva y ha recuperado al calor de la etapa actual de la crisis sus impulsos movilizadores, y que si los partidarios más violentos de la

MUD se quieren tomar las calles con miles de sus partidarios, otro tanto o más puede hacer hoy el PSUV-Maduro, con amplios sectores de masas enfrentados en esta fase de la crisis, resultado de una extrema polarización acelerada tras la muerte de Chávez y el colapso petrolero.

Olvidan estos sectores de la MUD que el chavismo, al calor de su victoria a comienzos de siglo, se propuso y logró con todo éxito, realizar una refundación constitucional completa, copando naturalmente por derecho propio las posiciones mayoritarias y más importantes del andamiaje institucional del país, incluyendo la mayoría de las gobernaciones; factor que, salvo en Bolivia, no se ha hecho presente en los éxitos electorales de la década pasada en Argentina, Ecuador, Brasil y otros. El politólogo chileno, Genaro Arriagada, argumentando por qué el 70 por ciento de los chilenos están a favor de enterrar la constitución impuesta por Pinochet y adoptar una nueva, destaca la enorme importancia de que “los socialismos del siglo XXI pusieran en su centro una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente”.

Olvidan igualmente, esos sectores violentos de la MUD, que el gobierno PSUV-Maduro tiene todavía entre sus pilares el apoyo de las FFAA Bolivarianas, en lo que, acertadamente, se ha caracterizado como unión cívico-militar. Este componente esencial en América Latina solo se ha logrado con claridad en Bolivia, pues en los restantes actores –con excepción de Nicaragua– las FFAA siguen hasta hoy siendo reserva y apoyo implícito de los bloques oligárquicos. Olvidan, asimismo, que al interior de la MUD han prevalecido y siguen prevaleciendo, divisiones, enfrentamientos y aspiraciones encontradas, con no pocos de sus integrantes dispuestos a dialogar y negociar con el gobierno PSUV-Maduro con el auxilio de la mediación internacional –al margen de la OEA– a la que se ha sumado activamente el Vaticano. Los sectores violentos de la MUD torpedearon la mediación –incluyendo las conversaciones Maduro-Shannon– y retomaron la violencia callejera, forzando así la adopción de un estado de emergencia, en cuyo contexto debieron ser aplazadas las elecciones para gobernadores y alcaldes por parte del gobierno. Sin duda –como apunta Terán Mantovani– “se trata de una de las crisis institucionales más serias de América Latina, abarcando todas las esferas de lo legal, lo social, lo económico y político, de todas las instituciones que constituyen la República de Venezuela”.

En dicho contexto tremendamente agudizado, el papa Francisco reiteró recientemente la disposición del Vaticano de continuar participando en la mediación internacional –tras anunciar Maduro su retiro de la OEA– y lamentó que la oposición no estuviera dispuesta a conversar con el gobierno porque está dividida, planteamiento este que “saca de quicio” a la oposición, en opinión de observadores extranjeros. Meses atrás, estudios de académicos venezolanos de la Universidad Católica Andrés Bello llegaban a una conclusión similar, agregando que ello le aseguraba así al gobierno una victoria efectiva. En el horizonte inmediato está la propuesta de una Constituyente por el presidente Maduro y de ahí elecciones para gobernadores y alcaldes. Este es el rumbo que debe ser negociado, pactado, para llegar a las presidenciales de 2019, con o sin mediación internacional, y donde deberá definirse hacia dónde se inclinará la mayoría de la voluntad popular. Si el gobierno logra beneficiarse de una relativa estabilización de los precios del petróleo, y alcanza un mejor funcionamiento de la economía interna y servicios, su posición podrá verse fortalecida de cara a una negociación exitosa y los procesos electorales apuntados; coyuntura ante la cual no pocas hipótesis han llegado a sugerir el reemplazo de Maduro por otro candidato, llegándose a especular con la posibilidad de que el nuevo vice-presidente, Tarek El Aissami, alcance las mayores posibilidades de ser el relevo. El referéndum convocado por Maduro para el 5 de julio, con el fin de validar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, será un buen termómetro. Y si la MUD y otros opositores están seguros de ejercer “el monopolio de tesis” y la más amplia mayoría, no deben tenerle miedo a tal convocatoria.

Los poderes mediáticos siguen, no obstante, vendiendo la imagen apocalíptica de Venezuela, de la inevitable derrota del PSUV-Maduro y de la victoria no menos inevitable de las fuerzas de la opo-

sición que reclaman poseer el 85 por ciento del respaldo popular, silenciando con premeditación, nocturnidad y alevosía, la más mínima cosa que pueda resultar favorable al gobierno PSUV-Maduro. El mejor y más reciente ejemplo se relaciona con los resultados más frescos de la muy respetable encuestadora HINTERLACES y su director, el sociólogo Oscar Sahémel (del que espero no me vengan a decir que está vendido al chavismo o cosas parecidas).

En sus estudios entre marzo y abril del año en curso, ¿qué nos revela? Veamos brevemente: el 76 por ciento desapruueba la intervención extranjera encaminada a derrocar al gobierno de Maduro; el 87 por ciento rechaza cualquier intervención extranjera de carácter militar; el 85 por ciento rechaza las “guarimbas”; el 83 por ciento apoya el diálogo entre Maduro y la oposición; el 61 por ciento NO CONFIA en que la oposición pueda resolver los actuales problemas económicos ni sociales como la inseguridad ciudadana; el 48 por ciento favorece la devolución de empresas ex-propiadas y un 87 por ciento reclama mayor importación de alimentos y medicinas. En materia de expectativas, dichos estudios arrojaban los resultados siguientes: 55 por ciento preferiría que Maduro sea quien tome las medidas para resolver los problemas actuales; 35 por ciento simpatiza más con el PSUV y el Polo Patriótico; 36 por ciento no simpatiza con ningún partido; 29 por ciento expresa su apoyo a la oposición en sus diferentes expresiones particulares (7 por ciento a Acción Democrática; 7 por ciento a Voluntad Popular; 6 por ciento a MUD-Unidad; 6 por ciento a Primero Justicia). A la hora de definir los encuestados “el perfil idealizado” de un dirigente, la mayoría de los venezolanos tienen su principal referente en Hugo Chávez y entre todas las figuras políticas del momento, Maduro sigue gozando de una preferencia mayoritaria.

Si le otorgamos a estos estudios y a la encuestadora HINTERLACES algún nivel de credibilidad, entonces nos asiste el derecho a cuestionar seriamente la veracidad y alcance de las imágenes apocalípticas que nos quieren vender e imponer. Además, siempre debemos preguntarnos –razonando debidamente que Caracas no es toda Venezuela– dos cosas: a. ¿En cuántos Estados tenemos situaciones idénticas o similares a las de Caracas? y b. ¿Por qué todas las “guarimbas” y los mayores niveles de violencia parten de los núcleos gestores de Altamira y Chacao, al este de Caracas, en tanto que el oeste se presenta como bastión del PSUV-Maduro? ¿Casualidad urbanística o razones de clase y color que no pueden ser ignoradas en esta ecuación? Creo que no podemos olvidar, ni pasar por alto, la Caracas de los mantuanos ni tampoco otra Caracas, la llamada “Caracas la roja”, que ya desde 1958 demostró su pujanza (y recuerden el amargo episodio de Nixon) y la que descendió de los cerros por cientos de miles para rechazar el golpe contra Chávez de abril de 2002.

¿Viraje a la derecha o recuperación de la izquierda?

La fase actual de agudización de la crisis venezolana, junto a la victoria electoral de Mauricio Macri (bloque electoral “Cambiamos”) en Argentina –apenas por un 3 por ciento por encima del candidato peronista, Daniel Scioli– fueron glorificadas por los poderes mediáticos como una suerte de recursa o regresión hacia la oleada neoliberal de los 80 del siglo pasado, y significando el fin del ciclo “izquierdista” o del llamado “socialismo del siglo XXI”. El cuadro se completaba con el golpe de Estado con cobertura legal en Brasil, poniendo fin al gobierno del PT presidido por Dilma Rousseff, quien tras prometer una drástica reducción de la pobreza y el hambre todavía persistentes en el país, enfrentaba un considerable desgaste político como resultado del estancamiento económico-social y los escándalos de corrupción, afectando a dos de los gigantes de la economía brasileña: PETROBRAS y Oderbrecht. *The Economist* se hacía eco de las encuestas que indicaban un 67 por ciento de desaprobación de su gestión poco antes de su encauzamiento, caracterizando su liderazgo como “Dilma’s fragile lead”. A ello se unía el revés –casi un empate– de Evo Morales en el tema de la reelección en Bolivia y el fin de la etapa de Correa en Ecuador, con grandes expectativas de recuperación del bloque oligárquico encabezado por el banquero Lasso y sus aliados.

En el Chile de los dos grandes bloques, una alianza caracterizada como de centroizquierda y durante años conocida como Concertación (Democracia Cristiana y Socialista), reemplazada solo de nombre por la Nueva Mayoría, se desintegra lentamente con la separación de la Democracia Cristiana y con un balance muy negativo de los socialistas (Ricardo Lagos y Michelle Bachelet) donde se distingue el abandono total de todo lo prometido. Los esfuerzos de los comunistas chilenos por estructurar una alternativa de izquierda no alcanzaron resultados tangibles, en tanto que la iniciativa de Marco Enríquez-Ominami en igual dirección apenas alcanzaba un 20 por ciento en las elecciones de 2009. Todo ello dibujaba una perspectiva de franca derrota, persistiendo la presidenta Bachelet en la fórmula de que “no hay progreso sin una sólida alianza entre el centro y la izquierda”, lo que ha permitido en verdad algunos triunfos electorales en el pasado, pero pagando por ello el elevado precio de abandonar sus propuestas más importantes de reformas y cambios, incluida la promesa de una nueva Constitución que suplantara definitivamente la que fuera pactada con los militares y Pinochet como parte del proceso de transición de la dictadura.

Este fenómeno de las alianzas de centroizquierda –recordemos los tiempos de los famosos “frentes populares” de la segunda mitad de la década de 1930 y sus controversiales desenlaces– tuvo un episodio no menos elocuente: la alianza del PT de Lula con el PMDB y su dirigente Michel Temer. Alianza que hizo retroceder al PT en muchos de sus proyectos y promesas de cambios radicales, expulsando a sectores radicales de su seno e incluyendo su papel en debilitar el “Foro de Sao Paulo”. Si era indispensable semejante alianza, es tema a discutir interminablemente, pero el precio a pagar fue demasiado caro y culminó con Temer como el gran director de la salida golpista contra Dilma, en su momento de mayor debilidad, situación agravada con los escándalos antes mencionados de PETROBRAS y Oderbrecht.

Parecería, entonces, como si el diagnóstico del viraje a la derecha y el éxito de los bloques oligárquicos –como se ha repetido hasta el aburrimiento– estuviera ciertamente recuperando su hegemonía a nivel regional. Permítanme argumentar en contra con varios ejemplos de suma importancia en este mismo año y para el próximo.

Empecemos por la magnificada victoria (del 3 por ciento) de Macri en Argentina. En poco más de un año de gobierno, para diciembre de 2016, “las encuestas muestran que más argentinos piensan que el gobierno de Macri es peor que el de Cristina Fernández de Kirchner”. *Public Opinion Poll e IPSOS Public Affairs* así lo validan, reconociendo que Macri ha caído de un 78 por ciento de aprobación popular a un 51 por ciento, con un 42 por ciento desaprobando su gestión y el deterioro de su figura, producto de sus vínculos con los *Panama Papers*, con uno de cada tres argentinos en estado de pobreza y un 40 por ciento de inflación, con un 48 por ciento asegurando que la economía empeorará. Sus reflejos en las elecciones parciales de octubre no le auguran buenos resultados.

Después de la euforia que siguió a la victoria de Macri, todos los observadores se concentraron en las elecciones de Ecuador. La lógica triunfalista llevaba a la conclusión mayoritaria de que la oposición debería ganar tras formar un masivo bloque electoral para la segunda vuelta en abril, encabezado por el poderoso banquero Guillermo Lasso. Atrás quedaban tres elecciones presidenciales ganadas cómodamente por la Alianza País y su dirigente Rafael Correa, con un balance neto de beneficios económicos y sociales para la mayoría de la población (en las elecciones de 2013 Correa derrotó a Lasso con un 57,7 por ciento frente a un 22,68 por ciento). Correa había logrado pasar en el congreso una ley, en diciembre de 2015, eliminando los límites al mecanismo de reelección, pero con la condición –acuerdo pactado con la oposición– de que la misma entraría en vigencia solo después de las elecciones de 2013. Sin Correa como candidato presidencial, el bloque opositor de Lasso calculó que, de seguro, ganarían frente a Moreno. La segunda vuelta de las elecciones de 2017 dejaron a Lasso, a sus aliados y fuerzas regionales e internacionales que lo apoyaban, enfrentados a una derrota, por muy estrecho margen (51-49, números que reflejan nuevamente los procesos de extrema po-

larización que se despliegan en la región), ratificada por las autoridades electorales. Lenin Moreno y la Alianza País ganaban legítimamente. El periódico británico *The Guardian* –con corresponsales en el terreno– reconocía la importancia del éxito alcanzado, dadas sus connotaciones regionales, destacando que “si hubieran perdido (Moreno y la Alianza País), ello se hubiera interpretado como otra señal del retroceso en la región de la ola rosada”. La “ola rosada” –como la llamaron los corresponsales británicos– sugería claramente un rumbo muy diferente a las predicciones apocalípticas respecto a los altibajos y reveses de las opciones de izquierda en América Latina.

El gigante brasileño, por su parte, se prepara para las elecciones de 2018 y el muy democrático Michel Temer impulsa un marcado retroceso social en los derechos de los trabajadores, recortes brutales al gasto público, profundización de la precariedad social, recortes drásticos al sistema de pensiones y otros similares. La casi virtual paralización del país entero a fines de abril de este año, con huelgas y protestas por las políticas de Temer, que ya se anota 14 millones de parados, han marcado un derrotero bien claro: Lula será presidente en el 2018. En febrero de este año las encuestas indicaban que los niveles de aprobación de Temer se hundían, en tanto Lula rebotaba en punta con vistas a las elecciones de 2018. Este pasaba de 51,5 por ciento de las preferencias al 62,4 por ciento entre octubre de 2016 y febrero de 2017, de un abanico de 32 partidos políticos y numerosos candidatos presidenciales, avanzando más todavía y estimándose que obtendría el doble y más de votación que Marina Silva, que Jair Bolsonaro y otros. Y todo esto a pesar de los cinco procesos incoados por el equipo Temer en contra de Lula, incapaces de probarle nada todavía alrededor del caso PETROBRAS. A la salida de una comparecencia ante un juez en Curitiba, Estado de Paraná, Lula declaraba el 10 de mayo: “Si la élite de este país no sabe arreglarlo, a lo mejor va a tener que hacerlo un metalúrgico con estudios de primaria”, mientras miles lo aplaudían.

En el otro gigante, en México, se asiste a un inusitado giro: frente a la hegemonía histórica del PRI y los dos intervalos del PAN, el deterioro económico, social y político ha alcanzado proporciones tales –agravado como nunca antes por factores como el narcotráfico y la torpe e insultante injerencia del presidente Trump– que un número cada vez mayor de observadores ya contemplan la hipótesis de una posible victoria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés López Obrador, más conocido por AMLO, un par de veces candidato presidencial en el pasado. Un año atrás se especulaba –resumen publicado por Reuters– con un regreso del PAN, seguido por el PRI, MORENA en tercer lugar con un 17 por ciento de apoyo y lo que queda del otrora influyente partido de la izquierda, el PRD, en cuarto lugar con apenas el 6 por ciento de preferencia.

Capitalizando los factores mencionados, AMLO, además, parece contar seguramente con la influyente figura del independiente Miguel Macera, alcalde de la capital federal y la considerable ampliación de sus redes municipales a lo largo y ancho del país, donde ha ganado un número elevado de alcaldías. Los votos del PRD deben desplazarse hacia AMLO, su antiguo colega. Si algunos estudios recientes sugieren que tanto el PRI como el PAN podrían oscilar entre un 25 y un 30 por ciento de las preferencias, a MORENA-AMLO le conceden hasta un 36 por ciento. Apenas unos días atrás, figuras bien conocidas por su profesión anti-izquierda como Andrés Oppenheimer y Jorge Castañeda, desde perspectivas diferentes, coincidían en destacar la elevada probabilidad de López Obrador de ganar la elección del próximo año, aunque atribuyéndole la mayor cuota de culpa a la política del presidente Trump hacia México, los mexicanos, la frontera y la aterradora perspectiva de sensibles recortes en las remesas.

En el caso de Evo Morales, en Bolivia, su revés para incorporar como reforma constitucional el mecanismo de reelección, se ha querido presentar como el fin del MAS y de su dirigente para competir en las elecciones de 2019. Sin embargo, existen mecanismos a los que el MAS acudirá para garantizar que Evo pueda presentarse como candidato presidencial (reforma constitucional por votación parlamentaria, nueva interpretación del Tribunal Constitucional, recogida masiva de firmas

o retirarse de la presidencia seis meses antes), pues aunque la oposición del Partido Democrático encabezado por Jorge Quiroga y otras fuerzas han ganado alcaldías y departamentos, no es menos cierto que en votaciones nacionales el MAS ha garantizado un apoyo superior al 60 por ciento y su administración exhibe –a diferencia de otros países de Latinoamérica– importantes avances económico-sociales, no solo con el rescate nacionalizador de empresas claves en la minería y las telecomunicaciones, infraestructuras y energía renovable, sino logrando una significativa reducción de la pobreza, por encima del 30 por ciento, incrementos en los niveles de empleo y salarios, alfabetización y escolarización, entre otros.

En Paraguay, luego de la maniobra golpista fabricada por un sector de los propios aliados del presidente Lugo y fuerzas de la derecha en el 2012 (casi idéntico a la movida golpista contra Dilma Rousseff en Brasil), la elección de Horacio Cartes por el Partido Colorado (derecha tradicional) pareció marcar otra larga temporada de regreso de la derecha con arreglo a un mecanismo de reelección, maniobra ampliamente rechazada por más del 70 por ciento de la población, incluyendo sectores no solo de izquierda y liberales, sino también grupos de colorados, lo que ha desembocado en un renacer y fortalecimiento del Frente Guasú (término en lengua guaraní que indica amplio o grande). Ignacio González Bozzolasco, sociólogo y profesor de la Universidad Católica de Asunción, luego de examinar la oleada derechista iniciada con la destitución de Lugo por el congreso en el 2012, subraya cómo la batalla contra Cartes y su reelección ha generado el renacer antes mencionado del Frente Guasú, el regreso de Fernando Lugo y un respaldo popular acrecentado por el apoyo de liberales de izquierda encabezados por el senador Blas Llano, lo que aseguraba para marzo de este año un apoyo superior al 50 por ciento del electorado con vistas a las elecciones de abril del 2018.

Chile verá de nuevo al ex-presidente Santiago Piñera concurrir como candidato de la derecha (bloque Chile Vamos) a las elecciones presidenciales de noviembre de 2017, mientras la maltrecha coalición de centro-izquierda Nueva Mayoría encabezada por los socialistas, llevan de candidato al senador independiente Alejandro Guillier, luego de que Ricardo Lagos, viejo dirigente socialista y ex-presidente, renunciara a su candidatura, lanzada unos meses atrás. Parecería como si fuera un capítulo más de la alternancia del mundillo político habitual. Pero no lo es, puesto que a estas elecciones se apresta a concurrir una nueva formación política, el Frente Amplio, que aglutina 12 partidos, movimientos y organizaciones sociales, buena parte de ellos originados en los movimientos estudiantiles y obreros que sacudieron al país en el 2011, que se nutre de la creciente frustración entre los socialistas y otras fuerzas con respecto a la gestión de Michelle Bachelet a quien “acusan de renunciar a su agenda reformista con la que llegó al poder en el 2014” (Rocío Montes, *El País*, Madrid) y una abstención del 65 por ciento en las últimas municipales, síntoma inequívoco de frustración y apatía.

Los principales dirigentes del Frente Amplio, Gabriel Boric y Giorgio Jackson –destacados dirigentes estudiantiles del movimiento de 2011-, promueven como candidata presidencial a Berta Sánchez, polémica periodista que figura como tercera opción entre las preferencias presidenciales, detrás de Guillier y Piñera. Si se quiere algún indicador válido para medir este nuevo polo alternativo de la izquierda chilena, tómese en cuenta que a poco tiempo de su formación se lanzaron a competir en las últimas municipales y le ganaron la alcaldía de la segunda ciudad en importancia, Valparaíso, para sorpresa de todo el mundo. Beatriz Sánchez lo ha dicho con toda claridad: el Frente Amplio “es el único que plantea un cambio de verdad”, incluida una nueva Constitución, participación ciudadana, economía democrática con crecimiento para todos, derechos sociales básicos y el aborto. Critica a los partidos tradicionales y al binomio Chile Vamos y Nueva Mayoría, en particular por haberle dado la espalda a la ciudadanía. Constituye un inesperado viraje político, otro ejemplo de la polarización política que se opera en toda la región; una fuerza a ser respetada sin apenas un año de fundada. Habrá que ver cuántos socialistas y gentes de izquierda independientes, abrazarán esta opción. Aunque el pronóstico es prematuro para vaticinar una victoria en noviembre, no caben du-

das que abrirán nuevos rumbos por donde se abrirán las nuevas alamedas” –al decir de Salvador Allende, en su último mensaje al pueblo chileno frente al golpe militar de septiembre 11 de 1973.

Y si examinamos estas tendencias con cuidado y rigor, veremos que el triunfo de la oleada derechista frente a los errores, debilidades, inconsecuencias y reveses en el andar y desandar de los experimentos de las alternativas de izquierda en la mayor parte de la región, des-caracterizan el triunfalismo que animó la crisis en Venezuela, la estrecha victoria de Macri en Argentina y el golpe con fachada legal de Michel Temer. Estemos atentos a un giro caracterizado por nuevas derrotas de las fuerzas de derecha y sus bloques oligárquicos, y de nuevas victorias por la izquierda, sin recetas, prejuicios o esquemas preconcebidos.

Por Gabriel Vommaro

El triunfo de la alianza “Cambiamos” en los comicios presidenciales de 2015 en Argentina representa el único pase de manos por vía electoral de un gobierno de centroizquierda hacia uno de centroderecha –por usar alguna definición general– que tuvo lugar, hasta el momento, en América Latina, tras el llamado “giro a la izquierda” (con la excepción de Chile, que siguió una dinámica bastante particular). En un contexto de cambio de tendencia de varios de los países de la región, o al menos de pérdida de apoyos claramente mayoritarios de los gobiernos progresistas, el caso argentino nos habilita a pensar algunas cuestiones de más largo aliento en relación con el ciclo que llega a su fin –al menos, como lo conocimos en la primera década y media del siglo XXI– y a sus legados.

Por un lado, permite ver en acción a un gobierno pro-mercado surgido de una elección dividida, que tiene el desafío de reorientar las políticas públicas lidiando, al mismo tiempo, con las demandas y las resistencias de una sociedad democrática y movilizadora. En definitiva, debe hacer frente a la tensión entre la voluntad de llevar a cabo un proyecto socioeconómico determinado y la factibilidad política de ese proyecto, lo que ya habían experimentado los gobiernos del ciclo progresista. Por otro lado, el cambio en curso ayuda a estimar cuáles son los legados de ese ciclo y en qué medida hay situaciones y acuerdos culturales y redistributivos establecidos y otros de más fácil remoción o reorientación.

Además de reflexionar sobre esas cuestiones, en este artículo nos interesa referir a una especificidad del caso argentino que lo diferencia de la mayor parte de las derechas regionales, y cuyo devenir también mostrará en qué medida este país puede formar parte del club de “las derechas” regionales institucionalizadas y competitivas electoralmente. Nos referimos a la posibilidad de que “Propuesta Republicana” (PRO), la fuerza que hegemoniza la alianza “Cambiamos”¹, pueda constituirse en un partido de alcance nacional y estabilizar así, en Argentina, un espacio competitivo representativo de esa orientación. Tras un año y medio de gobierno, nos encontramos en condiciones de revisar al menos parcialmente estas tres cuestiones, que serán objeto de los puntos que organizan este texto.

La senda del gradualismo

Como señalamos en otra parte², PRO nació con un proyecto sociocultural y económico de modernización gestionaaria, que criticaba las excesivas regulaciones estatales de la vida económica, sin desconocer el rol central del Estado como re-asignador de recursos; y en especial en lo referido a la protección de algunos derechos sociales, lo que en el discurso de PRO se asocia al “cuidado” de los sectores “vulnerables”. Particularmente en los últimos años del ciclo kirchnerista, cuando PRO se definió como fuerza claramente opositora, incorporó como elemento central de su programa la defensa de una concepción política republicana-liberal de la democracia y, junto con ella, las denuncias sobre corrupción gubernamental y la promoción de una modernización gestionaaria.

Al mismo tiempo, también desde sus inicios, PRO se concibió como un partido post-ideológico, con una estrategia flexible y pragmática, que busca construir consensos de gobernabilidad para llevar a cabo su proyecto político. Tiene un diagnóstico claro sobre las resistencias de la sociedad y la economía argentinas a apoyar mayoritariamente políticas de apertura económica y flexibilización de la regulación de los mercados, así como de reducción de la inversión pública en bienes de provisión

potencialmente universal (como jubilaciones, salud, etc.). Así, aunque el tipo de economía al que quisieran llegar sus líderes sea similar a la que imaginan los economistas llamados ortodoxos, su pragmatismo y la pretensión de hacer de PRO un verdadero partido de poder –es decir, capaz de gobernar la sociedad argentina– los llevaron, hasta el momento, a preferir el gradualismo –en relación con la apertura de la economía argentina y el rol del Estado– antes que las tradicionales terapias de *shock*. Por eso es criticado por los economistas ortodoxos, quienes acusan al gobierno de hacer “kirchnerismo con buenos modales”³.

Esta orientación pragmática es la que comparten los sectores que controlan el partido y definen la orientación general en materia de políticas públicas. La incorporación al gobierno de CEOs provenientes de grandes corporaciones, lejos de ser necesariamente parte de un sesgo hacia el polo del *shock*, es consistente con esta línea: se trata de especialistas en procesos, cuyo prestigio profesional está ligado a “hacer que las cosas ocurran”, en palabras de un funcionario entrevistado, sin que el contenido de esas “cosas” sea un asunto que esté bajo su órbita. Al contrario, las definiciones políticas las sigue dando la “mesa chica”, de la que están ausentes tanto la mayor parte de esos CEO como los economistas ortodoxos.

La división del trabajo en la Jefatura de Gabinete de Ministros, área clave para el manejo de la marcha de las políticas públicas y para el diseño de la comunicación política en el nuevo gobierno, da cuenta de esta combinación entre manejo político pragmático y altas dosis de ideología gestionaria. En efecto, junto a un jefe de gabinete *político*, de larga trayectoria en PRO y de cercanía y confianza con Macri, como Marcos Peña, hay dos secretarios de Estado que, provenientes de grandes corporaciones, se ocupan de la “coordinación interministerial”⁴ y de la “coordinación de políticas públicas”. En palabras de un ex-CEO funcionario, “Marcos no es un tipo de la gestión sino más bien de la estrategia política, la comunicación, entonces la idea [de incorporar a los dos CEO-secretarios de Estado] era fortalecer el equipo con ese perfil de gestión”. Por su parte, los economistas de mayor prestigio que habían ingresado al gobierno en sus inicios lo abandonaron a fines de 2016, ora por desacuerdos con el gradualismo, ora por pretender cierta autonomía en sus decisiones. La definición sobre la orientación política, entonces, se concentra en pocas manos.

Asimismo, el hecho de que el nuevo gobierno no cuente con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, ni con el gobierno de la mayor parte de las 24 provincias del país, lo obliga a establecer negociaciones y acuerdos con otras fuerzas políticas, tanto en la arena parlamentaria como en la gestión del gobierno federal. La escasez de recursos político-institucionales favorece también alguna forma de gradualismo: es necesario acordar políticas con un número significativo de legisladores, y “Cambiamos” encontró un grupo particularmente colaborativo en la porción del peronismo más alejada del kirchnerismo.

Hacia un nuevo orden en la economía: un gobierno de “normalización”

En materia económica, frente a las posiciones más extremas, el gobierno de “Cambiamos”, comandado por PRO, se propone como una fuerza “razonable” de “normalización” social y económica. Cree que debe acercarse a Argentina, lentamente, “al modo en que se hacen las cosas en el mundo”, luego de la “anomalía populista” del ciclo político anterior. En esa línea, dos de las primeras medidas tomadas por el gobierno fueron económicas e implicaron responder a una demanda de los sectores agro-exportadores, por un lado, con la reducción de los aranceles de exportación de granos; y de los sectores importadores y exportadores, por el otro, con el fin de la regulación del mercado de acceso a las divisas. Estas medidas redujeron los ingresos fiscales, al tiempo que crearon las condiciones para el crecimiento del mercado financiero. En el diagnóstico inicial, la normalización parecía bastar para que se hicieran efectivas las inversiones privadas necesarias para reemplazar el rol del consumo y la inversión pública como motores del crecimiento en que se había basado el último gobierno de

Cristina Fernández. Ese diagnóstico fue corregido parcialmente sobre la marcha, ante la evidencia de que las inversiones privadas no llegaban, en línea con los problemas estructurales del país que padeció el gobierno anterior, pero que este no había inventado.

La normalización se volvió entonces más un “proceso” que un “acto”. Abundan las metáforas del “puente” que la sociedad debería cruzar para llegar a ese nuevo país, en especial sus grupos organizados de trabajadores formales e informales, pero también los de empresarios. En este sentido, el gobierno de “Cambiamos” hunde sus raíces en la más conocida tradición política de Argentina: así como la transición democrática nos llevaba de un régimen político a otro y para ello era necesario un “cambio cultural” en el sentido de la cultura política, esta transición de un tipo de sociedad a otra debe hacer posible el “cambio cultural” que nos lleve del desarrollo interno a la apertura al exterior, de una sociedad de consumo a otra de inversión.

No son pocas las coincidencias con otros proyectos económicos refundacionales llevados a cabo en Argentina en los años 60 y 70. Ahora, en cambio, esto se produce por vías democráticas. Con mayor intensidad desde mediados de 2016, el gobierno se concibe a sí mismo como capitaneando una “transición” lenta hacia la economía globalizada, que podría concluir, en el horizonte deseado, con la entrada de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que significaría que el país sería ordenado por los condicionamientos necesarios para ya no volver a salirse de su carril “normal”⁵. La normalización debe ir, así, hacia la irreversibilidad del cambio. En este punto –también– es llamativo cómo se parecen los gobiernos en Argentina en cuanto a su retórica refundacional: todos quieren, de alguna manera, volverse irreversibles.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno fue menos gradualista en algunas áreas, entre ellas la monetaria, donde, en línea con la teoría económica dominante y con las demandas de los actores económicos globales, concedió la presidencia del Banco Central a sus sectores más ortodoxos. Estos hicieron del combate contra la inflación casi el único objetivo, que se busca alcanzar evitando la emisión monetaria y aumentando las tasas de interés. Esto, por un lado, conspira contra la inversión privada productiva, o al menos en sectores no financieros, o de mediano-largo plazo; y, por otro lado, obliga al gobierno a buscar recursos para financiar el gasto público mediante la toma de deuda. En efecto, el ritmo de endeudamiento aumentó durante 2016 y aceleró una tendencia que ya había comenzado en 2014, pero que ahora representa el “atajo” que permite al gobierno de “Cambiamos” evitar el aumento de la conflictividad social, mientras crea nuevos condicionamientos para la política económica futura. Aunque no es objetivo de este texto hacer un análisis de política económica, este recorrido permite entender cómo se articula la orientación económica general con las condiciones de gobierno y con las relaciones de poder en el seno de la fuerza política que lo encabeza. ¿Qué pasó, mientras tanto, con el legado kirchnerista?

Más allá de la economía... ¿qué cambió con “Cambiamos”?

Si las políticas de ampliación de derechos establecidas en los años de gobiernos kirchneristas, así como la imagen de un “pueblo empoderado” con que se despidió la ex-presidenta Cristina Kirchner el 9 de diciembre de 2015, en la Plaza de Mayo, parecían augurar una cierta permanencia de la herencia nacional-popular, los primeros meses de gobierno de “Cambiamos” dieron la impresión de “arrasar con todo”. En efecto, a pesar de lo ajustado del triunfo electoral en segunda vuelta⁶, el nuevo gobierno se propuso llevar a cabo esa “normalización” de Argentina, cuyos principales rasgos se definían, en buena parte, de manera contrapuesta al tipo de sociedad que el kirchnerismo bregó por instaurar desde 2003, y con contornos más definidos, a partir de 2008.

Definir esta ruptura en términos de “cambio cultural” da cuenta de la amplitud de la transformación buscada y, al mismo tiempo, vuelve impreciso su alcance. Pareciera ser que el gobierno normalizador

se propone, en cierta medida, cambiar la cultura de los argentinos, es decir, el modo en que estos hacen las cosas, en especial en su actividad económica y en su vínculo con el Estado⁷. Este cambio podría verse como la transformación de un *ethos* estado-céntrico y militante en otro emprendedor y asociado al voluntariado, dos marcas de PRO. El gradualismo en la normalización también supone evitar la fijación pública de metas demasiado ambiciosas. El “cambio cultural” permanece en esa vaguedad. Pero también hace posible empaquetar en el mismo *frame* reformas económicas, fiscales, laborales, políticas y culturales. En definitiva, a pesar de haber tenido que aceptar durante la campaña electoral para los comicios presidenciales buena parte de los bienes colectivos de legitimidad compartida que había producido el kirchnerismo (la Asignación Universal por Hijo, la propiedad estatal de empresas, entre otros puntos), el tono de su gobierno es ciertamente refundacional. Pero, ¿qué cambió, en términos culturales, hasta el momento?

En primer lugar, “Cambiamos” no parece haber tenido éxito en incidir en las organizaciones del mundo popular de un modo decisivo. Tuvo que aceptar la fortaleza de las organizaciones de los pobres informales, que se consolidaron en el ciclo político anterior, así como el legado de las políticas para esos sectores que son gestionadas por sus propias mediaciones. La continuidad del fomento estatal y del financiamiento público hacia la llamada “economía popular” es una muestra de este hecho, pero también la dificultad para imponer una política más dura en materia de orden en la calle, que impida (o al menos minimice) los cortes de la vía pública por manifestaciones en reclamo de bienes de origen público para esas fracciones de las clases populares (los llamados “planes sociales”, pero también alimentos para los comedores, entre otras cosas).

En segundo lugar, tampoco fue sencillo, hasta el momento, moderar los reclamos de las organizaciones de los sectores formales, es decir, los sindicatos. De posturas tradicionalmente más negociadoras en términos de metodologías de acción colectiva, pero también con reclamos más moderados y mayor flexibilidad ideológica, los grandes sindicatos lograron, no obstante, minimizar el impacto del ajuste en los trabajadores formales. Siguieron la lógica del “neo-corporativismo segmentado” que ya habían implementado en los años del kirchnerismo⁸ y que consiste en privilegiar los reclamos para los sectores que representan directamente y mostrar menor preocupación hacia los trabajadores no registrados e informales. Sin embargo, reconocieron a los representantes de los pobres informales como interlocutores en materia de representación de una porción de las clases populares y, en consonancia con eso, los incorporaron a varias mesas de negociación y evaluación de la situación del país y de medidas de acción⁹. La inédita unidad de formales e informales constituye una innovación del periodo, pero puede ser vista también como parte del legado del ciclo nacional-popular: aunque las alternativas políticas no estén claras, ni unos ni otros parecen dispuestos a resignar su participación en el bienestar en pos del “cambio cultural” propuesto.

También parecen duraderos los consensos en torno de las políticas de derechos humanos, en especial respecto a los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. No prosperaron las tentativas de funcionarios y de intelectuales cercanos al gobierno de discutir números simbólicos de los movimientos de derechos humanos, como el de los 30,000 desaparecidos. Un dictamen de la Corte Suprema que habilitaba un beneficio en el cómputo de las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, con fallo dividido y apoyo de los dos jueces designados por el nuevo gobierno, generó protestas masivas y obligó al Congreso a votar una ley que prohíbe tal aplicación.

La ley que no permite aplicar el “2x1” a crímenes de lesa humanidad obtuvo el voto de casi la totalidad de los bloques parlamentarios, incluido el de “Cambiamos”, de donde partió el proyecto. Poco después, en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista “Frente para la Victoria” (FPV) logró que el bloque provincial de “Cambiamos” aprobara una ley que obliga a hablar de “dictadura cívico-militar”, en consonancia con lo que fijaba la memoria oficial de los últimos años del gobierno de

Cristina Fernández de Kirchner. La política de derechos humanos no pudo ser, hasta el momento, parte del “cambio cultural” y continúa el linaje de los últimos años que entronca, no sin diferencias, con el de los primeros años de la democracia. Contra las miradas que veían a esa política como un bien capturado de manera facciosa, encuentra en la sociedad consensos transversales, más allá de las posiciones frente al ciclo kirchnerista¹⁰.

En cambio, tuvieron menos durabilidad las políticas específicamente culturales del ciclo político anterior y, en especial, las vinculadas a los medios de comunicación. En efecto, a poco de asumir el gobierno de “Cambiamos”, se disolvieron por decreto los dos entes reguladores creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) y por la Ley de Telecomunicaciones aprobadas durante el kirchnerismo –la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), respectivamente–. La AFSCA se encargaba de otorgar las licencias de radio y televisión y de regular el mercado de los medios audiovisuales. Era el ente de aplicación de la Ley de Medios, votada por el Congreso en 2010 y producto de un largo debate del que participaron actores del mundo académico y de la sociedad civil. Uno de sus objetivos principales era desconcentrar la propiedad de los medios y distribuir el espectro audiovisual en partes iguales entre el sector privado, el estatal y el de la sociedad civil.

Su implementación parcial, en el contexto de la disputa entre el gobierno kirchnerista y el grupo multimédios Clarín, poco tuvo que ver con el espíritu que le había dado impulso y origen. Pero la supresión por decreto presidencial de la autoridad de aplicación, una de las piezas fundamentales de la ley, estuvo lejos de resolver las falencias de la política anterior. En su lugar, se creó una nueva entidad reguladora, el Ente Nacional de Comunicaciones, que dejó sin representación a las minorías parlamentarias e implicó un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el área. La bandera de la democratización fue rápidamente desechada y, en cambio, la preocupación central pasó a ser la modernización tecnológica y el incremento de la competencia de mercado como soluciones a la concentración mediática¹¹. Es, en definitiva, en el plano de la comunicación donde este “cambio cultural” siguió el camino de la “normalización”, que implicó la apertura regulada a la competencia extranjera y el levantamiento de buena parte de las regulaciones que iban en contra de la concentración monopólica.

¿Tendrá Argentina su partido de derecha con implantación nacional?

La debilidad política del gobierno de “Cambiamos” reside, en buena parte, en la desigual implantación de la principal fuerza de la coalición en todo el país. Construido desde la ciudad de Buenos Aires, PRO estableció desde el comienzo una estrategia de varios tiempos, que consistía en partir de un gobierno sub-nacional para construir desde allí su presencia en los demás distritos. La sucesión de marcas políticas que adoptó parece dar cuenta de esta estrategia. Al pasar de “Compromiso para el Cambio” a “Propuesta Republicana”, logró nacionalizarse utilizando –y luego absorbiendo– la implantación territorial que había construido el partido “Recrear”, en buena parte sobre la base de los vínculos con antiguos dirigentes de partidos liberales y conservadores provinciales, así como del ala derecha del radicalismo. Con “Cambiamos”, marca en la que PRO parece ahora querer diluirse –al menos de manera comunicacional–, logró tanto la cobertura nacional del radicalismo como una llegada a clases medias urbanas no directamente identificadas con la centroderecha.

Como había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, la identidad por oposición al kirchnerismo funcionó como fuerza aglutinadora que, hasta el momento, parece tener mucho para dar en términos de rédito electoral. Pero con la adopción de la marca “Cambiamos” los líderes de PRO, que son el núcleo que toma las decisiones desde el gobierno, parecen haber aceptado también que no pueden, al mismo tiempo, gobernar el país –es decir, acordar con los actores realmente existentes– y prose-

guir la construcción de un partido nacional. Se trata, por ahora, de dar consistencia desde arriba al rechazo a un ciclo político concluido en términos electorales, pero, ¿cómo acabar con su legado sin los recursos políticos para hacerlo?

Por un lado, las negociaciones con gobernadores de origen peronista pero circunstanciales aliados, de quienes el gobierno obtuvo votos en el Congreso, implicaron que cediera el control de algunos puestos claves en el nivel provincial, vinculados a la gestión de dependencias y programas de política pública nacionales, lo que al menos a corto plazo mantiene recursos políticos en manos de las fuerzas gobernantes en cada distrito, sea cual fuere su signo partidario¹². Por otro lado, la tensión entre un partido dominante en el interior de la coalición “Cambiamos” con escasa presencia territorial más allá del centro del país (PRO) y el integrante más tradicional de esa coalición (la UCR), minoritario en la toma de decisiones en el centro pero de gran presencia territorial, actualiza la paradoja del gobierno de “Cambiamos”: para afanzarse como vector de “cambio cultural” necesita de sus aliados, pero a menudo eso le impide crecer como fuerza política autónoma. Parece lejana la perspectiva de que, con los recursos que da el gobierno, PRO pueda consolidarse como partido a escala nacional, como hizo a partir de 2007 en la ciudad de Buenos Aires.

Es cierto que, como sostiene Marcelo Leiras¹³, en Argentina ningún partido es nacional, estrictamente hablando. Todos deben lidiar con la complejidad federal y se construyen más bien como alianzas de élites sub-nacionales. Con el envión de sus triunfos electorales y de sus figuras de alta popularidad, PRO parecía encaminado a “fagocitarse” a buena parte del radicalismo. La resiliencia de ese partido centenario, en buena parte en virtud de sus resortes de gobierno a escala distrital, es un dato que no debe soslayarse. La disputa por convertirse en el partido de las clases medias urbanas y de las clases medias-altas rurales del siglo XXI sigue, así, abierta. El gradualismo y el peso de los legados, aquí también, marcan el ritmo de las transformaciones.

* Este artículo es copia fiel del publicado en la revista [Nueva Sociedad 270, Julio - Agosto 2017](#), ISSN: 0251-3552. *Cuba Posible* lo reproduce con la autorización de los editores de *Nueva Sociedad*.

Notas:

A diferencia de lo ocurrido en 1999 en el gobierno de la Alianza, que incluía a la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente por un País Solidario (Frepasso), en el gobierno de Cambiamos puede decirse que prevalece el control partidario por sobre la lógica de coalición, especialmente en la composición del gabinete, ya que la mayor parte de los ministros y secretarios provienen de pro y de sus fundaciones. Solo hay tres ministros de la UCR en un gabinete que cuenta con 23 carteras, pero además esos radicales no fueron elegidos por su partido según sus reglas internas, sino por las preferencias del presidente.

G. Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti: *Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar*, Planeta, Buenos Aires, 2015.

Esa fue la expresión que utilizó el economista ortodoxo –de asidua presencia pública– José Luis Espert en diferentes entrevistas en medios de comunicación durante 2016. Uno de los audios está disponible en . Ya en los inicios del partido, una de las líneas más duras de pro en términos políticos, proveniente en especial de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) –principal partido de centro-derecha argentino de los años 80 del siglo XX– pero también del peronismo menemista, había intentado sin éxito una definición más tajante en materia programática. G. Vommaro y S. Morresi (eds.):

«Hagamos equipo». PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina, Ediciones UNGS, Buenos Aires, 2015.

Como se afirma en la web de la Secretaría de Coordinación Interministerial, su función es facilitar «las relaciones entre los ministros y el jefe de Gabinete para alcanzar los objetivos de pobreza cero, unidad de los argentinos y lucha contra el narcotráfico», es decir las tres grandes líneas del discurso de inauguración de mandato de Macri en diciembre de 2015.

Según el sitio de la ocde en México, esta organización «reúne a un grupo de países con ideas similares. Esencialmente, el ser miembro de la organización depende del compromiso de un país hacia la economía de mercado y la democracia pluralista».

<www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm>.

En la primera vuelta, el 25 de octubre de 2015, Daniel Scioli (Frente para la Victoria) obtuvo 37,08 por ciento de los votos y Mauricio Macri (Cambiemos), 34,15 por ciento. En la segunda vuelta, realizada el 22 de noviembre de 2015, Macri se impuso por 51,34 por ciento y Scioli quedó en segundo lugar, con 48,66 por ciento de los votos.

Eso parece sugerir Martín Rodríguez en «Parte del aire» en *Le Monde diplomatique* edición Cono Sur No 215, 5/2017.

V. sobre este punto Sebastián Etchemendy y Ruth Berins Collier: «Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neo-corporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)» en *Postdata* No 13, 6/2008.

V. por ejemplo «La CGT y los movimientos sociales acordaron unir sus reclamos contra el Gobierno» en *La Nación*, 7/9/2016.

Remitimos en este punto al artículo escrito por Pablo Semán al calor de las movilizaciones contra el fallo de la Corte Suprema: «Derechos humanos, contingencia y sobregiro» en *Panamá Revista*, 11/5/2017.

Ver Martín Becerra: «Restauración: cambios en las políticas de comunicación» en *Épocas* No 2, 2016.

Diferentes ministerios (Trabajo, Desarrollo Social) y dependencias oficiales (Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–, Programa de Atención Médica Integral –PAMI–) cuentan con oficinas en todas las provincias. Tradicionalmente, la fuerza política gobernante designaba en esos lugares a referentes propios en cada distrito. En este caso, el gobierno de Cambiemos no solo debió distribuir posiciones entre las fuerzas políticas que forman parte de la coalición, sino que también aceptó mantener cierto statu quo en provincias gobernadas por otros partidos.

M. Leiras: *Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina*, Prometeo, Buenos Aires, 2007.

* Este artículo es copia fiel del publicado en la revista *Nueva Sociedad* 270, Julio - Agosto 2017, ISSN: 0251-3552

EL DILEMA DE UNA “CONTINUIDAD CON CAMBIOS”: LENIN MORENO EN SUS PRIMEROS DÍAS

Por Manuela Celi Moscoso

Han pasado poco más de tres semanas desde que asumió la presidencia del Ecuador Lenin Moreno, promovido por el partido Alianza País (AP) que lleva ya diez años en el ejercicio público. Estos primeros días de gestión han estado marcados tanto por acciones estratégicas que van pautando la línea de la nueva administración, así como por conflictos al interior del partido de gobierno, en una coyuntura de reestructuración de mandos y sectores. Se trata de un proceso de transición en el que emergen, inevitablemente, los límites intrínsecos de AP como un conglomerado de fuerzas dentro del cual entran en disputa diversos proyectos políticos.

Las primeras acciones y posicionamientos del nuevo gobierno son fundamentales, considerando la expectativa social respecto al menos tres temas centrales, producto de la situación política del país. El primero tiene que ver con la necesidad –del gobierno, AP y Moreno- de ir (re)construyendo no solo legitimidad sino también popularidad. El segundo, se refiere a la capacidad de llevar a la práctica el discurso de cambio abanderado en campaña, sobre todo en temas como la apertura al diálogo y el replanteamiento de las prioridades económicas y políticas del Estado. Finalmente, la tercera tiene que ver con la necesidad de constituir una identidad diferenciada de la gestión previa de Rafael Correa, en función de una demanda social que le apuesta a una “continuidad con cambios”, pero también de un proceso de debilitamiento de AP como proyecto hegemónico.

El gobierno comprendió el escenario y sus desafíos, constituyendo una agenda estratégica que pareciera responder a varias de las críticas y demandas que vienen acumulando la sociedad civil, sectores y grupos específicos de interés. En ese sentido, Moreno ensaya un estilo más conciliador y un liderazgo menos omnipresente. Así, marca significativas diferencias con el formato que caracterizó a Rafael Correa a lo largo de una década, que condicionó muchas de las relaciones entre el sector público y otros actores políticos, sociales y económicos.

Más allá de las intervenciones de Moreno propias de la agenda presidencial, los principales temas tratados durante estas semanas, sus negociaciones, soluciones o diagnósticos, han sido expuestos públicamente por los ministros o funcionarios encargados. La voluntad de diversificar vocerías, reduce la carga personalista de la política y la gestión pública. De esta manera, se refuerza la imagen de un gobierno más amplio en el que otros cuadros del oficialismo –en el Ejecutivo y el Legislativo- van ganando visibilidad.

Asimismo, la idea de la centralidad del diálogo para una gestión incluyente que viene posicionándose desde la campaña, continúa vigente tanto en Moreno como en su gabinete. Se han abierto varios frentes de trabajo y discusión sobre diversos temas, evidenciando la disposición política de impulsar una administración más participativa. Además, la priorización de asuntos es también sugerente. No es casual que el primer conversatorio al que llama el Presidente sea con la prensa; lo mismo sucede con los sectores productivos.

Finalmente, resulta relevante destacar una medida importante simbólicamente en cuanto a los cambios en el estilo de liderazgo y relacionamiento. Durante la década de gobierno de Rafael Correa, un elemento característico de su mandato fue un espacio semanal de rendición de cuentas -trasmitido

por radio y televisión- en el que durante cuatro horas, detallaba sus actividades de la semana. Este recurso fue constantemente criticado por algunos sectores sociales, la oposición política y los medios de comunicación con el argumento de que era la plataforma en la que, de manera más clara, se expresaban las características autoritarias y conflictivas del gobierno. Además, iniciada la crisis, se reprochaba también el costo que tenía realizar cada uno de estos espacios considerados como propaganda política. Entre sus primeras acciones, Moreno decidió reemplazar este recurso por un informe semanal de no más de 20 minutos en el que se relatan las actividades llevadas a cabo por él y el resto de autoridades del gobierno, sin su intervención directa. Esta iniciativa, igual que las otras, ha sido valorada como positiva y, sobre todo, como muestra más de una forma diferente de liderar.

Más allá del estilo y de aquellos aspectos que tienen que ver con la figura de Moreno, se distinguen también otros elementos que van dando forma al nuevo gobierno y que expresan lo que, por ahora, se puede entender como una estrategia de diferenciación que, a largo plazo, podrá evaluarse en su traducción en la política pública. Se trata de temas como la conformación del gabinete, instancias de diálogo anunciadas o ya constituidas, iniciativas que empiezan a impulsarse o declaraciones a las que se debe presentar atención para ir desentrañando el momento político que vive Ecuador.

El entorno cercano: aperturas, retornos y permanencias

Por el compromiso de “cambio con continuidad” que suponía el triunfo de Lenin Moreno, la conformación del gabinete ministerial suscitó gran expectativa. Además, la composición de los equipos de trabajo de un nuevo gobierno develan, también, asuntos de orden político que tienen que ver con la distribución de fuerzas al interior de un partido, así como con los acuerdos que van estableciéndose con otros actores durante la campaña.

No cabe aquí un análisis exhaustivo de la constitución del gobierno, sin embargo es posible destacar algunas características importantes. En primera instancia, lo más significativo en relación al gabinete ministerial -así como a cargos cercanos al Presidente- es la presencia de figuras que fueron parte del momento originario de AP, del diseño e impulso del proyecto o de sus primeros años¹. Algunos se mantuvieron vinculados temporalmente a la anterior Administración; no obstante, otros se habían separado por diferencias de diversa índole y hoy regresan, dándole fuerza a una fracción específica al interior del movimiento.

Paralelamente, se conservan también cuadros de AP que llevan ejerciendo distintas funciones de manera ininterrumpida durante estos diez años y que son quienes han ido conformando la estructura de militancia de alto rango del partido. Incluso, cabe destacar que en carteras fundamentales -como son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Minería y la Secretaría de la Gestión Política- se mantendrán a la cabeza los mismos funcionarios actuantes en el gobierno anterior.

El gabinete y los distintos cargos –e incluso candidaturas- que AP ha tenido que designar, reflejan claramente la situación del partido que experimentó varias rupturas previas incluso al proceso electoral. Hoy la organización se encuentra en una situación de ajuste y ordenamiento de las diferentes facciones que la componen, en medio de un proceso de reestructuración de su correlación de fuerzas interna. Del desenlace de este proceso, que sin duda será conflictivo, dependerán, en parte, los límites y alcances del proyecto de Moreno.

Más allá de las condiciones de AP, otra característica relevante en la conformación del equipo de gobierno de la nueva Administración es que revela una apertura a ciertos sectores sociales y empresariales que se encontraban al margen de la administración pública hasta ahora². Su composición evidencia un escenario más abierto al diálogo político y menos afín a los perfiles tecnocrático de la Administración de Correa.

La agenda: encuentros y desencuentros; reformas y persistencias

La gestión de gobierno, en las últimas semanas, tiene algunos hitos fundamentales que marcan no solo prioridades de acción, sino también instancias en las cuales se desmarca de lo que se venía haciendo hasta ahora. La mayoría de las iniciativas impulsadas están incorporadas en el discurso de Moreno desde la campaña y tienen que ver con temas como la austeridad y eficiencia en el gasto público, el estado de la economía y el fisco, una gestión inclusiva y participativa, el control y sanción frente a la corrupción, así como el afianzamiento y mejora de la política social.

Una de las medidas que apunta a fortalecer la idea de cambio del nuevo gobierno -tomada en el paquete de los diez primeros decretos presidenciales- promovió una reforma institucional a través de la eliminación o reemplazo de ciertas entidades, bajo el argumento de que ya cumplieron su función. Así, Moreno establece una ruptura inicial con la que se va diferenciando y consolidando una identidad propia. Más allá de su sentido práctico, se trata de una jugada estratégica que responde a algunas de las críticas que venían instalándose en el debate nacional durante los últimos meses respecto al tamaño del Estado, no solo en relación a la crisis, sino también a la función que desempeñaban organismos públicos sin un mandato claro³.

Asimismo, la nueva Administración le apuesta a un diálogo prioritario con algunos de los actores que han estado en conflicto con AP hasta ahora o con los cuales no se establecieron canales de comunicación efectiva. Tal es el caso de los sectores productivos del país que mantuvieron una relación con Rafael Correa marcada por discrepancias y altos niveles de conflictividad. El actual gobierno anunció durante su primera semana la creación de un “Consejo Consultivo Productivo y Tributario”, encargado de articular el diálogo público-privado, conformado de manera paritaria. Dando un giro al discurso oficial, Moreno ha destacado la importancia de contar con un sector privado que funcione como pilar de la economía del país y su proceso de reactivación.

Frente a esto, organizaciones empresariales y productivas han manifestado ya su interés y dicen tener listas las agendas y propuestas. Se entrevistó así una predisposición diferente. Está por verse su impacto real; sin embargo, la aproximación y las condiciones de debate expuestas inciden en el imaginario social a la hora de caracterizar positivamente los pasos que da al nuevo gobierno.

Algo similar sucede con los medios de comunicación, que fue otro tema sensible durante las anteriores administraciones de AP. En este sentido, resulta sugerente el conversatorio organizado por Moreno con representantes de la prensa en su primer lunes en funciones. Tras haber afirmado en su discurso de toma de posesión que buscará una relación “fresca y dialogante” con la prensa, durante este encuentro instó tanto a los medios, como a los periodistas, a construir consensos en torno a las propuestas para modificar la Ley de Comunicación; Ley que ha sido especialmente controvertida y que tanto AP, como Rafael Correa, han defendido e impulsado durante varios años⁴.

Moreno sostiene que la Ley es buena, pero que debe ser mejorada. Los sectores involucrados piden la revisión de aquellos artículos que pueden resultar excesivamente restrictivos y/o punitivos. De esta manera, se abre otra línea de diálogo que el mandatario apuntala anunciando, además, que él y sus ministros deberán acudir permanentemente a los medios de comunicación para informar sobre su gestión, posicionándolos nuevamente como interlocutores válidos.

Resulta significativo el hecho de que el Presidente exhorte públicamente a su gabinete a mantener una relación directa con la prensa. Como se ha dicho, su estilo tiende hacia un manejo menos personalista de la política. Varias han sido las señales en este sentido durante las últimas semanas en temas de relevancia nacional en los cuales, sus respectivos ministros, han sido voceros activos en medios y redes sociales.

En esta misma línea, otro tema que no ha estado exento de conflictos y críticas en años anteriores fue el proceso de reforma educativa, impulsado a fin de mejorar la calidad de la formación superior en el país. La ausencia de debate, socialización o involucramiento de las universidades y docentes en el diseño de la propuesta, así como los excesivos requisitos impuestos a un sistema universitario que requiere de mucho más tiempo para poder responder, fueron las principales razones expuestas por los involucrados. Hoy destacan no solo los diálogos impulsados recientemente desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con varios sectores universitarios, sino también la presentación de una reforma a la Ley de Educación Superior, que incluye temas que han sido especialmente polémicos durante los últimos años⁵.

Los espacios de debate, así como los interlocutores que va reconociendo el gobierno, dan cuenta de un nuevo escenario en el país. Aunque está por verse hacia dónde van los diálogos y las reformas, hoy se leen como una señal de apertura, al igual que los cambios en el discurso y/o manejo de áreas fundamentales. Tal es el caso del Ministerio de Finanzas, donde se gestiona la respuesta a uno de los principales desafíos que enfrentará Moreno: la situación económica del país.

Desmarcándose del discurso que se venía sosteniendo hasta ahora por el oficialismo, la Administración de Moreno ha ido posicionando una perspectiva diferente en el manejo de las finanzas nacionales. Se ha destacado la importancia del sector privado y su convivencia en armonía con la economía popular y solidaria como cable a tierra en relación al proyecto original de AP; se reconoce el déficit fiscal y la necesidad de buscar una solución al respecto; se destaca la importancia de impulsar las reformas necesarias para atraer la inversión extranjera directa, así como el acercamiento a organismos de crédito internacional que permitan al gobierno cumplir con sus objetivos.

Además, el Ministro de Finanzas dio un giro significativo –incluso simbólicamente– al abrir la posibilidad de que el dinero electrónico sea manejado por la banca, con el fin de que cumpla con su objetivo de reducir la demanda de dinero físico. Correa fue categórico al afirmar que eso no era una posibilidad, al punto que a día de hoy ha expresado públicamente sus críticas respecto de la postura que ha tomado la nueva Administración⁶.

Finalmente, un asunto esencial a ser destacado, sobre todo por la clara distancia que marca respecto de la Administración anterior, es la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En una reunión con los altos mandos de ambas instituciones y los ministros vinculados al tema, Moreno explicitó su intención de establecer una relación descongestionada y fluida desde el respeto a sus instancias institucionales. A su vez, en medio de un discurso en el que reiteró su confianza frente a dichas instituciones, les encargó su seguridad, posicionándolas como las únicas fuerzas a cargo de dicha función. Esto sucede en el marco de la creación de un servicio de protección presidencial, como guardia civil armada, impulsado por Correa antes de dejar su cargo que generó molestia en militares y policías.

En definitiva, todas las iniciativas, declaraciones y medidas tomadas durante estas semanas, no expresan todavía lineamientos de política pública. Marcan prioridades y un estilo de gobierno, determinan una hoja de ruta, establecen voluntades políticas. Permiten identificar las rupturas inmediatas entre ambas administraciones, e incluso al interior del partido y sus distintas facciones. Se requerirá de un seguimiento no sólo para poder evaluar acciones más concretas sino, también, para determinar las características del gobierno a largo plazo.

La lucha anti-corrupción como escenario de fondo

Las últimas semanas han estado marcadas por las gestiones que se realizan a nivel nacional en torno al caso Odebrecht. Hasta antes de la toma de posesión de Moreno, no había ni resultados ni accio-

nes contundentes. En esta coyuntura, el tema de la corrupción se ha convertido en objeto de disputas políticas por protagonismo, así como también en un recurso para la “des-marcación”. Se trata de un mecanismo de legitimación potente, dada la coyuntura.

Moreno ha respondido con una visión global del problema, que se evidencia en la convocatoria a todos los poderes del Estado para debatir una estrategia conjunta. La “Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción” será el instrumento en el que se definirán tanto políticas como acciones concretas para enfrentar y prevenir la corrupción.

A esto se suma, paralelamente, la conformación de un “Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, creado por el gobierno y conformado por representantes de la sociedad civil, la academia y la Administración. Esta iniciativa tendría cuatro atribuciones: proponer estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y presentar propuestas de políticas y normas.

Así, nuevamente, se evidencia una postura de trabajo colectivo y la centralidad del diálogo en los procesos impulsados desde “lo público”. Sin embargo, no todas las personas convocadas a ser parte han aceptado y se trata de una iniciativa que ya ha recibido críticas; porque existen otras instituciones del Estado con el mismo mandato; porque se considera que hay otras medidas que deben llevarse a cabo antes y que serían más efectivas; porque una parte significativa de sus miembros son militantes de AP y eso genera un desbalance.

La corrupción es un tema que aún tiene mucho trabajo por delante y que no genera consensos. El bloque oficialista en la Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo frente a temas relacionados, el gobierno no consigue una convocatoria representativa que apoye su línea de acción y, en el medio, se suscitan lecturas contrapuestas entre algunos sectores de AP, incluyendo al ex-presidente Rafael Correa. Es un tema que deja muchos elementos pendientes y que demandará de un seguimiento. En este sentido, cabe destacar que de sus resoluciones dependerá buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno. Existe una significativa expectativa social al respecto, que responde a una evaluación del sistema judicial nacional y de la autonomía e independencia de las funciones del Estado.

Los pendientes

Se han marcado ya algunas pautas respecto de temas de gran relevancia; pautas que evidenciarían una coherencia con el discurso de campaña que prometía mantener pero, sobre todo, mejorar lo alcanzado. Empero, frente a esto hay también algunos asuntos que permiten avizorar la extensión de los conflictos que viene arrastrando el oficialismo con determinados sectores. Se trata de asuntos en los que el gobierno de Moreno aún no ha tomado una posición clara o, frente a los cuales, se han dado pasos que parecen seguir la tendencia de la última década.

La primera ley aprobada por la nueva Asamblea –de mayoría AP- fue la ley que abre la puerta a los transgénicos en el país, fuertemente criticada por agrupaciones indígenas y ambientalistas. Será difícil encontrar espacios de diálogo con dichos sectores si el gobierno no muestra una voluntad de cambio. Está por verse si los temas vinculados al medio ambiente –como, por ejemplo, las concesiones petroleras en el ITT o la explotación minera y maderera-, son asuntos que entran en la línea de continuismo o en la del cambio. No hay una política consistente aún e, incluso, se evidencian contradicciones⁷.

Existen, por otra parte, algunos temas pendientes que han estado en el debate pero que aún no queda clara cuál será su concreción; tal es el caso de un pedido de amnistía para 177 personas e indulto para otras 22 por parte de la CONAIE, bajo el argumento de que se trata de dirigentes que ejercieron el legítimo derecho a la resistencia en el 2015 (frente a medidas tomadas por el régimen de Rafael Correa). La organización ha condicionado la posibilidad de un diálogo con el gobierno a las resoluciones de estos casos que consideran actos de persecución política. Tanto la Asamblea, como el Ejecutivo, han manifestado que se analizará cada caso por separado para determinar la pertinencia de acceder a sus pedidos. A día de hoy, se ha dado el indulto a un líder indígena de la Amazonía. Moreno lo anunció diciendo: “¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos.”

Finalmente, entre sus primeros decretos, Moreno elimina el “Plan Familia”, que fue la iniciativa pública impulsada por Rafael Correa para la prevención del embarazo adolescente, desde una perspectiva de recuperación del rol central de la familia. Dicha política fue un punto de quiebre importante con sectores sociales vinculados a temas de género que trabajan sobre la salud sexual y reproductiva. Su perspectiva, profundamente conservadora, generó un retroceso en las cifras, así como en la concepción de la política pública que no debería legislar a partir de una carga moral o de la imposición de valores y creencias.

Moreno afirmó que habrá un cambio de enfoque con una orientación desde la libertad con responsabilidad. Esto ha generado una reacción positiva en sectores que llevan años en conflicto con Correa por sus límites en cuanto a la comprensión de asuntos vinculados a las problemáticas de género. Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema están a la expectativa de poder intervenir no solo en el diseño e implementación de una estrategia integral sobre sexualidad, sino también respecto de muchas de muchas deudas pendientes en términos de derechos.

A poco menos de un mes de iniciadas las actividades del nuevo gobierno, estos son solo algunos de los temas pendientes, sobre todo, con actores sociales con los cuales el gobierno de Correa no logró establecer consensos ni diálogos. La relación que Moreno y su equipo establezca con dichos sectores, será también una expresión del alcance de sus reformas.

En definitiva

Este repaso por las primeras tres semanas de gobierno de Lenin Moreno evidencia, sobre todo, una disposición al diálogo y la inclusión de otros sectores. En alguna medida, se ha ido marcando el camino para el cumplimiento de sus objetivos en términos de llevar a la práctica el discurso del cambio y constituir una identidad, así como una línea de gestión, diferenciadas de la de Rafael Correa. La posibilidad de alcanzar tanto legitimidad como popularidad -propias y consistentes- demandará de más tiempo y de la concreción de aquellos pasos iniciales que se han ido dando.

Cabe destacar el hecho de que existe una expectativa entre diversos sectores sociales y políticos por la apertura de un nuevo tipo de relacionamiento desde el Estado y el gobierno con las demandas sociales. Bajo dichas condiciones, hay una mayor concurrencia de actores y el escenario político se amplía en términos no solo de participación, sino también de posibilidad de representación.

No obstante, paralelo a la construcción de un escenario que pareciera más incluyente, varios son los temas que van generando distancias entre la actual y la anterior Administración de AP. Moreno y su equipo se han esforzado por formular una política de gobierno nueva, así como una “marca” propia. En esa línea, se han planteado varias reformas legales, se han abierto espacios de discusión con sectores que antes estaban fuera o en confrontación con Correa, se han modificado asuntos que fueron bandera central de la década pasada.

En medio de dicha coyuntura de construcción y consolidación del gobierno, hay una excesiva presencia de Correa en el escenario nacional. En la medida en que están en debate varios elementos que provocan lecturas contradictorias y/o confrontadas, el ex-mandatario se ha encargado de exaltar las diferencias en redes sociales permanentemente, cuestionando a la actual Administración, a la banca de la Asamblea e, incluso, al partido.

Esta intervención supone una distorsión en el espacio de actuación de Moreno y su equipo. Además, evidencia públicamente las rupturas el interior de AP, debilitando el proyecto y generando cuestionamientos a su actual espacio de gestión pública.

Bajo estas condiciones, la naturaleza del cambio y la resolución de estas tensiones y distintas narrativas, están por verse. Ambos factores marcarán el futuro del gobierno de Moreno. Han pasado solo tres semanas, quedan cuatro años que definirán tanto la situación del país en relación a un proyecto que generó profundos cambios pero que necesitaba de correcciones; así como la situación de un partido al que le urge un trabajo interno de estructuración y de desarrollo orgánico que le permita, entre otras cosas, gestionar sus problemas y disputas constantes.

*El presente texto apareció originalmente en la revista *Nueva Sociedad* (<http://nuso.org/articulo/los-dilemas-de-articular-la-continuidad-con-cambios/>), y *Cuba Posible* lo reproduce con autorización de sus editores.

Notas:

1. Para información general sobre cada uno de los ministros, remitirse a <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miemb...>
2. Una de las designaciones significativas es la de Humberto Cholango –ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una de las organizaciones que más conflictos tuvo con la Administración de Rafael Correa- como titular de la Secretaría del Agua. Los efectos de su gestión serán fundamentales en la medida en que se relaciona con dos temas sensibles: la relación de AP con las minorías étnicas -y sus organizaciones- y el manejo de un recurso fundamental que ha generado ya conflictos significativos.
3. Tal es el caso de los Ministerios Coordinadores, la Secretaría del Buen Vivir y la Secretaría General de la Administración.
4. Poco antes de dejar su cargo, Rafael Correa advirtió ya respecto de una arremetida para eliminar la Ley y pidió tanto a la Asamblea, como al futuro gobierno, evitar que el poder mediático introduzca una agenda. Con Moreno ya en funciones, Correa ha vuelto a manifestarse, esta vez en contra de la línea del gobierno en relación al tema.
5. Como por ejemplo los mecanismos de nivelación y admisión, la autonomía y capacidad de autorregulación de los centros educativos, los grados académicos exigidos a los profesores, entre otros.
6. El dinero electrónico es una forma de pago a través del teléfono celular en la que no se requiere del uso de papel moneda. Entró en vigencia hace casi tres años y, desde entonces, ha sido fuertemente criticado por sectores de oposición que advierten que podría tratarse de una moneda paralela que pone en riesgo la dolarización. Fue además objeto de disputa con la banca privada

a la cual Correa se negó a darle el manejo de este tipo de transacciones. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la anterior administración.

7. Como por ejemplo el posicionar el tema de los pueblos en aislamiento voluntario como una prioridad del gobierno. A través de la firma de un convenio interinstitucional se ha manifestado la voluntad de elaborar un plan de acción que incluye medidas para la protección de los recursos naturales en su entorno. Habrá que ver si esto no entra en conflicto con procesos de explotación petrolera, por ejemplo.

Por René J. Reyes Medina

El 20 de septiembre de 2017 se reporta uno de los días más devastadores de la historia de Puerto Rico. El Huracán María azotó la mayoría del territorio borincano entre las 2:00 am y 8:00 pm, causando pérdida de hogares, vidas e infraestructura básica (como el tendido eléctrico, ruptura de compuertas de represas de lagos artificiales para el suministro de aguas, derrumbes de carreteras) y, además, numerosas inundaciones.

Junto a las inclemencias del tiempo, la crisis profunda del sistema social continúa agudizándose. La falta de recursos básicos como el agua y los alimentos (que cuando no escasean se hacen vulnerables e insalubres por la falta de electricidad), han volcado a nuestra población contra sí misma. Las donaciones y ayudas enviadas desde exterior no están llegando a la vena social. El restablecimiento del agua, el alcantarillado, las telecomunicaciones y la electricidad avanza de forma muy lenta y errática, perjudicando negocios y empujando hacia arriba la desocupación formal de la población de la Isla (menos del 17 por ciento de los abonados, incluyendo gobierno, empresas y hogares, contaban con servicio eléctrico al cierre de este escrito, según el sitio oficial del Gobierno *status.pr*). Ejemplo de esto último, el pasado domingo 8 de octubre el principal diario de la capital, anunciaba la lamentable noticia de un nuevo colapso en el sistema de generación energética que dejaría nuevamente sin servicio al Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín (SJU), al Centro Médico de San Juan, varios negocios que recién retomaban sus funciones, entre otros.

Por otro lado, el individualismo y la lógica de la empresa (que pone énfasis en la ganancia sobre el bienestar común), agudizan el desasosiego de una población adoctrinada en el mundo de las mercancías. La abundancia de bienes como toallas, ropa, productos enlatados, artículos del hogar, entre otros, no cesa la sed de dormir con una brisa fresca de abanico y un vaso de agua fría. Por otro lado, también entra en crisis el sentido común, por la falla del raciocinio religioso que antecedió hasta entonces cualquier explicación de base humanista o científica de las carencias causadas por el libre mercado, previo al huracán.

¿Cómo es posible que las multinacionales que acaparan más de la mitad de la producción de bienes del planeta carezcan de medios para saber cuántos generadores eléctricos recibirán de su compañía matriz en Estados Unidos a dos semanas del evento atmosférico, o cuando les llegaran las baterías tamaño “D”? “¿Es (será) por eso que papito Dios nos sigue castigando, por los acumulados errores, pecados y por pertenecer a una raza marcada en la piel con el color de los esclavos?” Esto último lo escuché haciendo fila para la compra de generadores en uno de los grandes almacenes de una multinacional.

De un lado la demanda insatisfecha de bienes como generadores, hielo, combustible y otros, considerados lujos en la emergencia. Del otro, las familias pobres y hoy en miseria. Pasaron de ser residentes de un humilde campo (ajeno a las presiones metropolitanas del consumo masivo y el hacinamiento), y hoy viven apretujados en casas aledañas de familiares luego de haber perdido su techo.

Barajar las cartas del juego post-María llevó también actores privilegiados del sistema (tales como médicos y abogados) a tomar turnos en fila junto a madres de familias con 8 hijos y choferes de equi-

pos pesados, para llevar hielo y combustible a sus hogares. Escenas que hacen palpable la versión boricua del diluvio universal, esta que sigue purgando privilegios de la sociedad colonial, amparada hasta entonces en la especial relación de la esmeralda sobre la mar con el águila calva.

Por otro lado, el languidecido gobierno colonial no da señales de vida y la gente sigue comprando boletos para exiliarse de esta crisis, al menos mientras aguante el pasaporte y la ciudadanía de tercera. Mientras, los empleados de agencias públicas buscan formas de arrimar migajas de la mesa, posicionándose ante las circunstancias en primera fila para las ayudas gubernamentales. Continuará todo esto al menos hasta que el Presidente Trump le diga a los boricuas: “you speaks, get out of here with your nasty smell of crisis. You’re not citizens anymore...”.

Hasta entonces, la única esperanza real nace de los abnegados vecinos compartiendo lo poco que tienen y redescubriendo las calles de los barrios, que a tres semanas del huracán siguen trabadas de árboles y maleza esperando el próximo aguacero; la próxima inundación. Nos quedamos nosotras y nosotros; quienes no cedemos al individualismo y queremos ver el capitalismo caer; quienes no entregamos la casa y el trabajo del viejo, fruto de sus malos ratos y errores de 40 y tantos años.

Resistimos los muchos, quienes organizamos, con socialismo y utopía, centros de distribución de precarios recursos e información de ayuda gubernamental intermitente. Nos quedamos los voluntarios a ser víctima o victimarios, de otro crimen sangriento más en la ínsula alucinada, la hija del mar y el sol que hace años fuera la propuesta de progreso para el Caribe resiliente a huracanes imperiales por más de 500 años. Nos queda el humor caribeño que imagina crear en una fila de consumidores, un carnaval en pleno Sam’s Club; rodeados de arroz, botellas de vodka, salsa, tortillas chips, mesas plásticas de dominó, entre otros. Imaginando que en casa, al regresar, María nunca hubiese llegado; y solo un mal sueño haya acechado la ya maltrecha y endeudada Isla del encanto. Hoy la inundación es ley y llegar a casa o al trabajo, sano y seguro, es orden.

Por Carmelo Mesa-Lago

En parte motivado por racismo contra el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, y tratando de aniquilar su mayor legado nacional, Donald Trump se comprometió en la campaña electoral a derogar y reemplazar la “Ley de Acceso Asequible a la Salud” de 2010 (*Obamacare*) en cuanto asumiese su cargo. También prometió un seguro de salud “bello” a todos los estadounidenses y no cortar el Medicaid (programa federal de asistencia sanitaria para personas sin recursos). Esto venía de perlas a los republicanos que habían luchado contra *Obamacare* por siete años. Trabajando en secreto por seis meses, sin audiencia alguna, un comité de senadores republicanos, todos hombres blancos, elaboró varios proyectos de ley para lograr su meta (sólo el 13 por ciento de los estadounidenses apoya tales planes). A finales de julio, el engendro del Congreso fue derrotado. Confrontando un partido republicano dividido -entre los radicales que quieren una revisión completa y los moderados que abogan por una reforma menos dañina-, el presidente Trump exigió solo la derogación, traicionando aún más sus promesas electorales. El objetivo era una “victoria” sin importar sus consecuencias devastadoras para los estadounidenses, particularmente los más vulnerables, y una caída más honda del sistema de salud estadounidense en su orden mundial.

Las organizaciones internacionales han ordenado al sistema de salud de Estados Unidos muy por debajo del de las economías desarrolladas (37mo entre 191 países, según la Organización Mundial de la Salud), basados en varios factores clave: 1) extensión de cobertura de la población e inclusión de grupos vulnerables como los pobres, ancianos, discapacitados, mujeres, niños y enfermos crónicos (nuestro sistema es el único sin cobertura universal dentro del mundo desarrollado); 2) desigualdades en la provisión de servicios que discriminan por condición de edad, género y salud (los ancianos, mujeres y enfermos pagan más que los jóvenes, hombres y sanos); 3) provisión o regulación de la atención de salud por el gobierno y equidad en su financiación (sólo el 34 por ciento de los estadounidenses están cubiertos por los dos programas públicos: Medicaid y Medicare -el seguro de salud para los mayores de 65 años-, pero 100 por ciento en el Reino Unido); 4) costo de servicios sanitarios en relación al PIB (tenemos los costos más altos y causan el 60 por ciento de las quiebras en Estados Unidos); 5) tamaño de los gastos de salud privada y pagos de bolsillo por los usuarios (56 por ciento respecto a un promedio de 25 por ciento en los países desarrollados); y 6) indicadores como esperanza de vida y mortalidad infantil (los nuestros están por debajo de los países desarrollados).

Basado en los factores anteriores, este artículo prueba que las reformas a *Obamacare* propuestas por la Casa de Representantes y el Senado (tres versiones), hubieran hecho retroceder y agudizar drásticamente los problemas de nuestro sistema de salud.

Cobertura e inclusión de grupos vulnerables: *Obamacare* hizo obligatoria la afiliación al sistema por dos vías: la expansión de Medicaid y la compra de un seguro privado en el mercado. Conjuntamente ellas incorporaron 25 millones de personas previamente no aseguradas, incluyendo ciudadanos de bajos ingresos, niños, mujeres, ancianos, discapacitados y los que tienen condiciones preexistentes. El Medicaid se expandió en 32 Estados que optaron por unirse y recibir ayuda federal, cubriendo a 20 por ciento de los estadounidenses. Los empleadores deben ofrecer seguro médico a sus empleados o pagar una multa, sus contribuciones se deducen de los impuestos.

Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, el primer ante-proyecto del Senado dejaría sin seguro a 22 millones de personas en 2026; si hubiese solo la derogación, el número aumentaría a 32 millones. La cobertura del Medicaid en los estados sería eliminada en cuatro años dejando 49 millones de personas sin cobertura. El seguro por los empresarios disminuiría agudamente pues dejaría de ser obligatorio y se eliminarían las multas por incumplimiento.

Desigualdades. *Obamacare* creó un sistema de compensación de riesgos a fin de que los jóvenes y personas saludables pagasen proporcionalmente más que los ancianos y los enfermos. Los ante-proyectos del Congreso permitirían a las aseguradoras cargar a los aflados ancianos hasta cinco veces de lo que cobran a los jóvenes. La peor inequidad es que Trump y todos los congresistas disfrutan de un seguro de salud privilegiado y barato, mientras que ellos drásticamente cortarían la protección básica a las personas vulnerables.

Prestaciones garantizadas. *Obamacare* garantiza diez prestaciones clave de salud, incluyendo atención preventiva y de maternidad, tratamiento a las enfermedades mentales y droga-adicción, y medicamentos. El Congreso virtualmente los terminaría pues autoriza su renuncia por los Estados, además de cortar la ayuda financiera a Medicaid y permitir a las compañías de seguros que excluyan de cobertura a los vulnerables. El programa de planificación familiar que proporciona anticonceptivos sería dejado sin fondos, provocando así más embarazos no deseados. En 2016, 59,000 estadounidenses murieron de sobredosis, el salto más alto en la historia y la principal causa de muerte entre los menores de 50 años, principalmente debido a la actual epidemia de opiáceos. Las enfermedades mentales afectan a 43 millones de adultos y 20 por ciento de niños; el suicidio mata más adolescentes que cualquier otra enfermedad. Con una población envejecida y una esperanza de vida más larga, también crecen exponencialmente el Alzheimer, la demencia y la discapacidad. Para aplacar a algunos republicanos, otra versión del Senado asignó US\$ 2,000 millones a los Estados para trastornos mentales y adicción, solo por un año, obviamente insuficiente. Trump prometió reducir el alto precio de los medicamentos, pero el Congreso no hizo nada sobre esto.

Financiamiento equitativo. *Obamacare* otorga subvenciones a ciudadanos pobres y de bajo ingreso para que puedan pagar su prima. Las compañías de seguros no pueden denegar la cobertura ni elevar las primas por condiciones preexistentes. Los Estados que optaron por extensión de Medicaid reciben fondos federales sin límite. Estas prestaciones son financiadas por un impuesto a los ricos, a las aseguradoras de salud y a los super-planes de seguro privado. El Senado derogaría estos impuestos o los habría pospuesto, por tanto, beneficiando a los ricos y perjudicando a los pobres y los que tienen ingresos bajos e incluso medios. Además, se impondría a los Estados una suma tope por cada afiliado que se ajustaría a una tasa de inflación más baja que la real. A los que tuviesen condiciones preexistentes no se les podría denegar cobertura ni aumentar las primas, pero las subvenciones serían inferiores por lo que se mermaría el acceso. Además, el asegurado pagaría copagos y deducibles más altos, causando mayores gastos de bolsillo.

Costos. Los republicanos argumentan que *Obamacare* es insostenible financieramente y crea el caos en los mercados de salud. En 2017, muchas aseguradoras se salieron del mercado y las que permanecieron aumentaron substancialmente sus primas. Esto se debió, en gran parte, a la incertidumbre creada por el Congreso con el espectro de derogación del seguro obligatorio y recorte de las subvenciones a individuos y Estados. La “solución” del Congreso es conceder miles de millones a las aseguradoras para que se mantengan en el mercado. El Senado reduciría el déficit por US\$700,000 millones, pero al precio de menor acceso y calidad del servicio. Médicos, clínicas y hospitales se enfrentarían a un número creciente de pacientes sin seguro médico, incapaces de pagar sus facturas médicas. Todo esto dispararía las muertes (¿recuerdan las acusaciones falsas de los “paneles de muerte” en *Obamacare*?).

La reacción de Trump a la derrota ha sido “dejemos que *Obamacare* fracase” (con un certero sabotaje de su parte). En vez de promover políticas que mejorarían el sistema de salud, Trump dejaría sin protección a 32 millones de estadounidenses, incluyendo muchos que votaron por él. Como dice con frecuencia en sus discursos: “¡nauseabundo!”

Nota: el presente texto fue publicado originalmente en la prestigiosa revista mexicana *Letras Libres*. *Cuba Posible* lo reproduce a petición de su autor.

Por Joana Salém

El pasado 16 de octubre fue lanzado en São Paulo el libro colectivo “Cuba no século XXI: dilemas da revolução” (“Cuba en el siglo XXI: dilemas de la revolución”). El lanzamiento contó con la presencia de Frei Betto y de Nélide Hernández Carmona, Consul General de Cuba en la capital paulista. El volumen organizado por mí, el historiador Fabio Luis Barbosa dos Santos y la economista Fabiana Rita Dessotti, fue el resultado de una investigación colectiva, con la participación de más de 30 estudiantes y profesores de seis universidades públicas brasileñas, de los cursos de Relaciones Internacionales, Historia y Economía¹. El libro es fruto de la tercera edición del proyecto “Realidad Latinoamericana”, que tuvo lugar en 2016, dedicado a estudiar la realidad cubana, después de viajes anteriores a Colombia y Venezuela (2014) y Perú y Bolivia (2015).

Entre marzo y noviembre de 2016 nos reunimos en el Memorial de América Latina en São Paulo, para clases y discusiones sobre Cuba. Examinamos las especificidades de su formación colonial, el neocolonialismo resultante de la relación con Estados Unidos y, por supuesto, las condiciones históricas y fuerzas sociales que impulsaron la Revolución de 1959. Estudiamos, también, los dilemas de la transición al socialismo en un contexto periférico y dependiente, la ambivalencia de las relaciones con la URSS y la profunda crisis económica y social de la década de 1990.

Entre los principales impases históricos de la Revolución, identificamos algunos ejes centrales:

1. La dificultad que había en cumplir las promesas de bienestar social igualitario sin bases económicas suficientemente desarrolladas para superar la dependencia, generando una tensión entre la importación de bienes de consumo popular o de bienes de capital para la diversificación productiva. Esa dificultad se expresó en la naturaleza de las relaciones establecidas con la URSS, que viabilizó una abundancia relativa en las décadas de 1970 y 1980, al mismo tiempo que hizo que se perpetuara una inserción económica dependiente, cuyos efectos más duros fueron sentidos a partir de 1990.
2. La contradicción entre la ultra-centralización estatal bajo amenaza de invasión externa y la necesidad de algún grado de descentralización para la distribución del poder político y la construcción de una democracia socialista.
3. La permanencia de prácticas patriarcales, racistas y homofóbicas en el interior de la Revolución y el lugar estratégico de la cultura y de los valores en la construcción del socialismo y del “hombre y mujer nuevos”.

Considerando tales disyuntivas, el grupo conformó una agenda colectiva de investigación del presente, amparada por una pregunta-eje: ¿cuáles son los riesgos de una restauración capitalista en Cuba en el siglo XXI? Más concretamente: ¿cuáles serían las consecuencias de la llamada “actualización” del modelo económico, contenida en los *Lineamientos* aprobados por los delegados del VI

¹ Los participantes están vinculados a la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP), la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), la Universidad de la Integración Latinoamericana (UNILA), la Universidad Federal do Estado del Rio de Janeiro (UNIRIO) y la Universidad Federal de Roraima (UFRR).

Congreso, en abril de 2011? ¿Cómo afectan la vida social cubana? ¿Con cuál intensidad se estaban ampliando las desigualdades? ¿Cómo se expande el rol del dinero en la diferenciación del acceso a derechos?

Lo que pretendíamos no era encontrar formulaciones rápidas y confortables para nuestras inquietudes. Al contrario, buscábamos explorar la Revolución “desde adentro”: el debate cubano actual, sus grupos de interés, sus argumentos y sus determinaciones históricas y geopolíticas. Por mi parte, esa búsqueda tenía que ver con una investigación política sobre los caminos de la revolución latinoamericana. Justamente por ser la nación que más se acercó a algunas de las utopías del siglo XX (y las sostuvo hasta cierto punto), me pareció que las sinuosidades de su decurso pudieran servir como preciosa fuente de aprendizaje. Fue Cuba quien más caminó vereda adentro, “con un ojo en el camino y otro en el porvenir”, como canta Silvio Rodríguez, y quien se encuentra siempre desafiada con su “mirada extraviada entre el estar y el ir”. Los dilemas de la Revolución cubana nos enseñan lecciones sobre los obstáculos a otras revoluciones posibles.

Llegamos a Cuba pocos días después del fallecimiento de Fidel Castro, el 3 de diciembre de 2016. En un pequeño televisor en blanco y negro de la sala de entrada del Centro Martin Luther King (CMLK), en Marianao, pudimos mirar el monumental homenaje fúnebre en Santiago, con la presencia del ex-presidente Lula y de otros líderes de la izquierda mundial. Era un momento conmovedor para todo el pueblo cubano y lo pudimos sentir. Recibidos por el maravilloso equipo del CMLK, a quienes mucho agradecemos, conversamos con más de 30 cubanos de distintas áreas e instituciones: dirigentes políticos, ex-guerrilleros, expertos universitarios, ex-ministros, científicos, editores, campesinos, militantes de distintos sectores sociales². Visitamos la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), el Centro de Inmunología Molecular (CIM), el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), la Casa de las Américas, y otros puntos e instituciones de La Habana. Viajamos a Pinar del Río, donde nos hospedamos en una iglesia pentecostal en Puerto Esperanza, visitamos un policlínico y el proyecto Comunitario “La Camorra”. Cerca de Viñales, fuimos a una Cooperativa de Créditos y Servicios y a dos fincas tabacaleras.

El viaje nos fue indicando las preguntas que debíamos reformular, las que podíamos contestar parcialmente y las que se hacían turbias e impenetrables. Al volver a Brasil, el grupo produjo dos seminarios abiertos, una exposición de fotografías y el mencionado libro. Con él, pretendemos alcanzar a un público mayor que el tradicional lector académico. Sin perder el rigor, buscamos comunicarnos con las dudas de sectores más amplios de la sociedad brasileña sobre la Revolución cubana. Por eso, los 22 capítulos nunca sobrepasan las 10 páginas y sus títulos son preguntas, tales como: ¿Qué es la Revolución hoy? ¿Cuba es una democracia? ¿Los cubanos quieren salir de Cuba? ¿Existe censura? ¿Cómo la juventud se relaciona con la Revolución? ¿Por qué la Revolución no cayó? ¿Existe desempleo? ¿Los cubanos son pobres? ¿Cuba es desarrollada? ¿Por qué tiene dos monedas? ¿Los derechos

2 Agradecemos a todos los que nos regalaron su tiempo para el diálogo con esos “brasileños preguntadores”: Fernando Martínez Heredia (Instituto Juan Marinello), Juan Valdés Paz (sociólogo, politólogo, experto agrario y Premio Nacional de Ciencias Sociales), José Luis Rodríguez García (ex Ministro de Economía), Aleyda Guevara (Centro de Estudios Che Guevara), Gladys Hernández (Centro de Investigaciones de la Economía Mundial), Luis Morlote (UNEAC), Joel Suárez, Ariel Dacal Díaz y Sandor Álvarez (CMLK), Ernesto Limia Díaz (historiador y abogado, asesor del Ministro de Cultura), Camila Piñero Hanecker (experta en cooperativismo del Centro de Estudios de la Economía Cubana), María del Carmen Barroso (especialista en oncología del Centro de Inmunología Molecular), Víctor Díaz (ELAM), Juan Acosta (Centro de Estudios Hemisferios y de los Estados Unidos), Julio Antonio Fernández Estrada (jurista y ex-profesor de la Universidad de La Habana), Rafael Hernández y Raúl Garcés (Revista *Temas*), Jennifer Martínez (FEU), Esteban Morales Domínguez (experto en relaciones raciales del Centro de Estudios sobre Estados Unidos), Rafael Hidalgo y Jorge Arias Díaz (Departamento de Relaciones Internacionales del PCC), Santiago Feliú (OSPAAAL), Iván Hernández (campesino tabacalero de Viñales), Aníbal Barredo y Umberto Palmero (ANAP, CCS Rubén Martínez Villena), entre otros.

sociales están en riesgo? ¿El emprendimiento está creciendo? ¿Cuáles son las reglas para el capital extranjero? Entre otras.

El libro no tiene intención de responder tales preguntas de manera completa, lo que sería imposible; pues explicitamos que nuestro objetivo es contribuir con la profundización del actual debate brasileño sobre Cuba, ofreciendo informaciones e interpretaciones sacadas de nuestra inmersión colectiva. Pretendíamos, en fin, ir más allá de la polarización simplificadora sobre la Isla que predomina en el sentido común, entre una derecha rabiosa y una izquierda acrítica.

Cuba como metáfora

Desde 1959, Cuba se hizo un parte-aguas de las luchas políticas de sus países hermanos y fue el ingrediente más importante de la “Guerra Fría” en América Latina. Los choques que provoca en el debate público no son para nada un fenómeno nuevo en Brasil. Sin embargo, en los últimos años, la polarización ideológica se exasperó y expandió por la sociedad brasilera, recolocando a Cuba como arena de confrontaciones.

Un ejemplo fue el caso de los sectores de las élites médicas de Brasil que se encolerizaron con los médicos cubanos que vinieron asistir –como parte del Programa “Más Médicos”, iniciado en 2013– a decenas de miles de ciudadanos pobres en lugares donde los mismos doctores brasileños no querían estar. Un acierto del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), aunque insuficiente. Por actuar en la medicina como si esta fuera un privilegio de clase y no una ciencia para la salud pública, la corporación médica brasilera atacó a los médicos cubanos, mucho más que a los profesionales de otras nacionalidades. Les molestaba que parte de la remuneración del convenio fuera directamente al gobierno cubano, lo que los hacía denunciar que el PT estaría entregando “nuestro dinero” a la “tiranía de los Castro”. Sin embargo, la población brasileña desasistida encontró mucha competencia y humanidad en la atención de los cubanos; el programa fue evaluado positivamente y los insatisfechos fueron derrotados.

En ese ambiente, impregnados de odio ideológico y corporativismo, brasileños derechistas resolvieron gritar a las personas con quienes encontraban divergencias sobre la política nacional: “¡váyase para Cuba!”. Tal exclamación, generalmente descontextualizada y bestializada, parecía revelar el deseo reprimido de “exiliar a la izquierda”. Al mismo tiempo, en ella vendría la tesis de que en la Isla se pasan privaciones tan tremendas que los izquierdistas de Brasil ni las soportarían, ni las sabrían justificar –y así se vencía cualquier discusión. Es decir, tales palabras expresaban, también, un sentimiento apologético de las libertades de consumo³. Paradójicamente, a esos mismos les molestaba la ampliación del acceso de los brasileños pobres a bienes de consumo.

Como ocurrió en otras partes, en la última década Brasil vivió una renovación de la bravata anti-comunista, mezclada con la explicitación de manifestaciones racistas, misóginas, homofóbicas y de apología a la censura. Ese nuevo conservadorismo reencontró un particular gozo en el acto de “odiar a Cuba”, quizá abriéndose el flujo para una aversión de clase represada.

3 La exaltación de la libertad de consumo fue una de las estrategias de comunicación de la bloguera Yoani Sánchez cuando estuvo en Brasil en febrero de 2013. En esa ocasión, elogió en su cuenta de Twitter la rapidez de Internet en Brasil y lamentó “cada día que pasa y no se le permite el acceso masivo a Internet para los cubanos, la Isla se hunde más en el siglo XX”. La activista demostró no saber nada de las “libertades brasileiras” que pretendía defender: en aquel año, Brasil tenía un 70 por ciento de viviendas sin acceso a Internet y 14 millones de analfabetos, más que la población total de Cuba, argumento que registré en: “Internet rápida e 14 milhões de analfabetos” (Viomundo, 2013): <http://www.viomundo.com.br/politica/joana-salem-internet-rapida-e-14-milhoes-de-analfabetos.html>

Cuba es una metáfora. Fue la repuesta al centro de las contiendas brasileñas conforme se incrementaba la agresividad de la polarización política. El odio a Cuba se desparramó por las manifestaciones de la clase media blanca que sustentaron el golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. En las calles desfilaron carteles “váyase para Cuba” y “abajo el Foro de Sao Paulo”. Desde las izquierdas, obviamente se produjo una respuesta en defensa de la Revolución en distintos espacios y variados sectores. Lo que también hizo evidente el cada vez más inocultable alejamiento entre la dimensión simbólica de la lucha ideológica y la *real politik* del pacto conservador-extractivista⁴, conducido por el PT durante 13 años de gobierno.

Me parece importante reflexionar sobre por qué Cuba sigue siendo una metáfora política tan potente en Brasil, en un contexto en que el imaginario sobre alternativas revolucionarias se encuentra tan empobrecido. Hace tiempo vivimos un desplazamiento entre la dimensión simbólica y la *real politik* de izquierda. Muchos de los más sinceros defensores de la Revolución cubana, son también los que justifican como inevitables los procedimientos del “reformismo débil”⁵ y las alianzas programáticas tejidas por el PT con las clases dominantes; todo lo contrario de lo que nos enseña Cuba sobre grados de enfrentamiento y velocidad del cambio estructural.

Pienso que lo insuperable de la “metáfora Cuba” en Brasil sería, por un lado, el enojo que sienten los conservadores por su sobrevivencia y sus innegables conquistas. Y por otro, la dificultad que sentimos las izquierdas para reflexionar sobre nuestros propios límites a la luz de lo que podemos aprender con la historia y el presente de la Revolución cubana. Al adorarla como a un tótem puro y distante, evitando preguntas difíciles y contradicciones, las izquierdas que administraron el pacto conservador en Brasil también crean procedimientos de auto-expiación y obstrucción de la autocrítica⁶.

Más allá de los defensores y los detractores de la “metáfora Cuba”, hay una significativa mayoría de brasileños que tiene dudas, preguntas, sospechas. Son muchos, sin suficiente información o interés para posicionarse, que oscilan entre una vaga simpatía y una adhesión mecánica a estereotipos anti-cubanos difundidos por los medios. También con esas personas quiere dialogar el libro “Cuba en el siglo XXI: dilemas de la revolución”.

En búsqueda de las revoluciones posibles

La propuesta de hacer un “análisis estructural de los problemas coyunturales” no es fortuita. Se trata de una opción metodológica que se acopla a un debate político central de nuestro tiempo, respecto a las opciones y estrategias del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina.

4 La idea de que el PT construyó un “pacto conservador” es prácticamente consensual entre los analistas políticos y militantes de la izquierda brasileira. El término fue consolidado por el politólogo y ex-vocero del primer gobierno de Lula, André Singer, en su libro: *Sentidos do Lulismo: Reforma gradual e pacto conservador* (2012). El pacto se expresa en las alianzas tejidas por Lula/PT con partidos conservadores y clases dominantes, especialmente sectores latifundistas y financieros, los cuales controlaron ministerios estratégicos, encontrando significativa representación programática. En 2008, por ejemplo, la base del gobierno de Lula estaba compuesta por 16 partidos, de los cuales solamente 4 podrían considerarse parte del espectro de centro-izquierda (PT, PSB, PDT, PC do B) y los otros 12 eran de centro-derecha. En 2012, 22 partidos compusieron la base del gobierno de Dilma Rousseff, de los cuales 19 apoyaron el golpe que la destituyó y llevó a Michel Temer a la presidencia en 2016.

5 “Reformismo débil” es un concepto clave del análisis de André Singer (2012).

6 Para un análisis crítico de la experiencia del Partido de los Trabajadores en el poder, recomiendo la lectura de los libros: Fábio Luis Barbosa dos Santos, *Para além do PT: crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana* (2016) y Plínio de Arruda Sampaio Junior, *Crônica de uma crise anunciada – crítica à economia política de Lula e Dilma* (2017).

En el caso brasileño, importantes sectores de las izquierdas todavía creen en la posibilidad de cambios lentos, administrados y conciliados con fracciones de la clase dominante. Para estos, la apuesta “Lula 2018” posee pleno sentido. No obstante, la posibilidad de resolver temporalmente algunos problemas del pueblo brasileño en el marco del capitalismo extractivista siempre estuvo sometida a determinaciones estructurales y contingencias externas. La ilusión de que el capitalismo nacional había conquistado más soberanía y auto-determinación se difundió, entre 2003 y 2013, sobre la base de premisas “coyunturalistas” y efímeras. Sin embargo, desde una mirada histórico-estructural, la “panacea lulista” no pasa de ser un relámpago dentro de la tormenta de la reversión neocolonial, que nos atropella a todos los latinoamericanos⁷.

Pienso que discutir el carácter estructural de las transformaciones revolucionarias cubanas nos ayuda a reponer, en el debate político brasileño, la dimensión más profunda de la ruptura necesaria para desarmar los privilegios de clase, raza y género en Brasil. En otras palabras, en la “metáfora Cuba” puede abrirse más espacio para la reinención militante del horizonte de la revolución brasileña. El PT, en el marco del pacto conservador, pudo aliviar algunos dolores e injusticias con paliativos social-liberales, al tiempo en que fortalecía la dependencia externa y alimentaba la vieja ideología de la modernización extractivista. Ahora que se hicieron más visibles los límites estructurales de esta estrategia, es tiempo de vislumbrar nuevos caminos para buscar nuestras revoluciones posibles.

Ojalá podamos, con este modesto libro, en Brasil, participar de la formación política de sus lectores y contribuir con un grano más de arena en la construcción de la identidad entre nuestros pueblos.

⁷ Sobre el concepto de “reversión neocolonial”, ver Plínio de Arruda Sampaio Jr, *Globalização e reversão neocolonial o impasse brasileiro* (2007). Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/11S-ampaio.pdf>

Por Eugenio R. Balari

A principios del mes de noviembre se celebró la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde se volvió a considerar la cuestión del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por las diferentes administraciones y el Congreso de Estados Unidos a Cuba. El tema, por sus dañinas consecuencias, continúa manteniendo plena vigencia.

En una reciente conversación con varios amigos, surgió nuevamente el asunto del bloqueo; ofreciendo la ocasión de analizar varias cuestiones sobre las votaciones y/o recomendaciones que ha realizado la Asamblea General de la ONU para se ponga fin a esas leyes y medidas que lesionan al pueblo cubano. El tema nos llevó a indagar acerca de las atribuciones específicas que posee la Asamblea General (esta, como conocemos, se encuentra integrada por la casi totalidad de las naciones del mundo).

Baste decir que, con independencia de su gran influencia o estados de opinión mundial que genera, la Asamblea General, en lo fundamental, solo posee fuerza para examinar, encomendar, elegir, considerar, debatir, o considerar situaciones complejas de política internacional o que afecten a países.

Nuestro diálogo se desarrolló buscando comprender la persistente subestimación y rechazo con que las administraciones de Estados Unidos actúan ante las universales votaciones en su contra. No importándole, al parecer, el reclamo del mundo para que se elimine el bloqueo a Cuba, ni el significativo aislamiento en que su posición política lo sitúa. Consideramos que tal situación le viene causando a Estados Unidos daños políticos, domésticos e internacionales. Con independencia de la inevitable secuela de opiniones, de todo tipo, que se originan en su contra, porque la opinión pública internacional rechaza el menosprecio a las razones de las mayorías; como es el caso de mantener el bloqueo económico, comercial y financiero (con su carácter extraterritorial) contra el pueblo cubano.

Se comprende que en Cuba se sufren las dañinas consecuencias del bloqueo económico; sanciones que ya perduran por 56 años y que tuvieron su origen, fundamentalmente, por diferencias políticas. Tales diferencias se han utilizado para “justificar” la más brutal y homicida política de sanciones contemporáneas que se haya impuesto a país alguno. Cuestión está reconocida por numerosos funcionarios y medios de comunicación de Estados Unidos.

En Cuba se han realizado, y se realizan, serios esfuerzos de cuantificación de los daños ocasionados a la nación caribeña; probablemente puedan aproximarse en la cuantificación de la esfera económica, pero resultará imposible hacerlo sobre los sacrificios y lesiones humanas o sociales que se han derivado de este, al ser inconmensurables.

Si los cubanos durante el dominio colonial de España sufrieron la reconcentración del general Valeriano Weyler puede decirse, sin exageración (aunque valorando tiempos y circunstancias diferentes), que los efectos del bloqueo económico estadounidense y su indiscutible carácter de extraterritorialidad, se aproximan suficiente a la de aquella anti-humana situación vivida en siglo XIX, cuyo propósito, como se sabe, fue la de impedir la victoria de los patriotas independentistas cubanos.

Las administraciones estadounidenses, acostumbradas a establecer, desde sus posiciones de gran potencia internacional, una amplia y bien controlada esfera de influencia en los países del continente americano (aun teniendo orígenes e idiosincrasias diferentes); se esforzaron y alcanzaron una monopólica influencia político y económica en el llamado Nuevo Mundo.

Estados Unidos consideró a América del Sur, Centro América, México y los países del Caribe como área reservada, exclusivamente, a sus intereses geopolíticos. Algo que en las circunstancias actuales ya es difícil mantener, de acuerdo al complejo y multi-hegemónico mundo en que vivimos. Pero lo cierto es que al ser Cuba una “avanzada en el tiempo” de lo que luego con frecuencia y diversidad ocurriría, Estados Unidos consideró necesario castigarla, al originar un “mal ejemplo” para otros países de la región.

Se comprende que la Organización de las Naciones Unidas es la mayor y más prestigiosa Asociación de Gobierno Global; propiciadora de la paz, la seguridad internacional, el desarrollo económico, y veladora de asuntos humanitarios y derechos de las personas. Originada después de la Segunda Guerra Mundial, con la firma por 51 países de la Carta de la ONU, hoy reúne a 193 miembros; siendo sus principales órganos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.

Por supuesto que en la ONU y sus órganos se muestran las diversas diferencias de la actualidad, pero resulta para todos esencial e imprescindible su existencia y, además, respetar los criterios y consensos que se toman por los países que la integran. No hacerlo resulta atentar abiertamente contra ella, subestimar sus esfuerzos o menospreciarla, lo que puede llevarla a una situación vulnerable y peor aún, peligrosa.

No debe procederse, y más en las circunstancias internacionales actuales, para hacerla perder autoridad o credibilidad, restándole importancia a sus decisiones, porque ello inevitablemente sienta un pésimo precedente, limitándola luego a enfrentar o solucionar conflictos que puedan poner en riesgo los destinos de países, el planeta, o la propia especie humana.

Si la naturaleza y carácter de la ONU es ciertamente transparente y democrática, ¿qué mejor opción que la de tomar en cuenta o acatar sus recomendaciones? Sobre todo ante situaciones donde existe un universal consenso, o se manifiestan arbitrarias aberraciones políticas, y más cuando provienen de su órgano más representativo: la Asamblea General.

Pienso que algo anormal y arbitrario viene ocurriendo en Estados Unidos cuando se trata de las votaciones de la Asamblea General, que recomiendan a la gran nación americana desmontar su lesionante, aunque fracasada, política de bloqueo económico. Probablemente ello convenga a las autoridades analizarlo con rigor, rectificar y establecer una política más realista y consecuente.

En 27 oportunidades consecutivas, prácticamente la totalidad de los países del mundo le han recomendado a las administraciones y al Congreso de Estados Unidos poner fin a sus políticas contra el pueblo cubano. Comprendiéndose, además, que no existe argumento ético y humano para prolongar las sanciones contra el pueblo del pequeño archipiélago cubano y sus sencillas y solidarias gentes. Hora es ya de que los políticos estadounidenses abandonen, definitivamente, sus prácticas de “garrote” contra Cuba y tomen en consideración las justas recomendaciones de la comunidad mundial de naciones y también los deseos del pueblo cubano.

Por Luis Carlos Battista

Cualquier discusión sobre la política exterior de Cuba debe comenzar por identificarle como un Estado revolucionario, diferente totalmente de aquellos que comparten y promueven un *status quo*, que en este caso es la arquitectura del sistema internacional establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por ello no es extraño que la política exterior cubana haya priorizado, en no pocas ocasiones, elementos ideológicos sobre elementos pragmáticos en el desarrollo de sus relaciones internacionales.

Desde los tiempos de la Guerra Fría, la Revolución cubana ha proyectado e institucionalizado rutinariamente una visión ideológica que promueve modelos alternativos de relaciones en prácticamente todas las dimensiones del actual sistema internacional: Norte-Sur, Este-Oeste, y Sur-Sur. No obstante, el Gobierno revolucionario, como una cuestión de supervivencia, ha tenido que establecer relaciones pragmáticas con Estados cuyas ideologías se encuentran diametralmente opuestas con la suya. Ejemplos sobran: desde la relación mantenida con la España de Franco y el régimen militar argentino, hasta más recientemente con el gobierno español del Partido Popular.

En el caso del Medio Oriente, la proyección ideológica de Cuba hacia la región se torna compleja, dado que la ideología de la Revolución cubana tiene considerables diferencias culturales con las visiones dominantes de los llamados actores revolucionarios de la región. Cuba, como país latinoamericano, es esencialmente una nación que manifiesta la cultura occidental. En relación con algunos temas como los derechos de las mujeres, y el rol de la religión en la política, Cuba mantenía afinidades con los Estados seculares pre-revolucionarios. Las relaciones con la Revolución Islámica en Irán son un espacio común de retórica antimperialista, pero también un importante tema de tensiones con afiliados de la Revolución, tanto domésticos como foráneos.

La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) ha establecido fuertes lazos políticos y económicos con el Medio Oriente bajo el liderazgo de Cuba y Venezuela, teniendo en cuenta los intereses y aspiraciones de cada país miembro. Cuba ha servido como puerta de entrada de distintos países de África del Norte y Medio Oriente a Latinoamérica. Una muestra es que distintos países de esa región fueron invitados como miembros asociados a dicha alianza.

Luego de la Guerra de los Seis Días, las relaciones con Israel (que habían sido bastante dinámicas en los primeros años tras el triunfo revolucionario) se debilitaron y en 1973 Fidel Castro tomó la decisión de romper relaciones con ese país. Ello con la intención de complacer a potencias de la región como Irán y la Jamahiriya, y obtener la presidencia del Movimiento de los No Alineados. A simple vista, pudiera ser observada como una decisión pragmática, por cuanto esta decisión de romper relaciones con Israel y fomentar la alianza con regímenes seculares árabes fue realizada con la intención de incrementar la cooperación Sur-Sur, acceder a importantes petro-economías revolucionarias, y estrechar la distancia existente entre la Unión Soviética y los países del Tercer Mundo.

Sin embargo, esta decisión parte en sí misma producto de la visión ideológica de romper las bases del *status quo* del sistema internacional en el marco de la Guerra Fría. La decisión fue desbalanceada y careció de reciprocidad, pues los países árabes no rompieron relaciones comerciales o diplomáticas

con Estados Unidos. Además, el apoyo fervoroso de Cuba a numerosos frentes en Yemen, Palestina y el frente Polisario contrastó bastante con la falta de apoyo y soporte por los países árabes a los intereses de Cuba, pues estaban más enfocados en sus propios intereses estratégicos.

Paradójicamente, Henry Kissinger, Asesor de Seguridad Nacional y posteriormente Secretario de Estado bajo la presidencia de Richard Nixon, a pesar de ser un ferviente anticomunista, fue uno de los máximos exponentes de la política de *détente* hacia la Unión Soviética, y acercamiento hacia la República Popular China. En el caso de Cuba, Kissinger manifestó al Gobierno cubano en varias ocasiones su interés por normalizar relaciones diplomáticas y su posición de no confrontación al sistema político y económico elegido por los cubanos, siempre que se cortaran los fuertes lazos militares con la Unión Soviética, incluyendo una eventual retirada de las tropas cubanas presentes en África. Tal propuesta sería formulada más adelante por la Administración Carter.

Ante la disyuntiva de normalizar relaciones con Estados Unidos, o retirar las tropas de África, el gobierno cubano decidió sacrificar lo primero; e históricamente ha considerado la “Operación Carlota” como una deuda histórica saldada con el pueblo africano. A ello se le suma la profunda desconfianza existente entre ambos gobiernos; desconfianza que aún persiste. La cercanía y aprecio de la cultura y tradiciones cubanas hacia el continente negro resultan entrañables y de alto valor etno-sociológico. Justo y necesario resulta reconocer la intervención en esas tierras como un aporte decisivo y fundamental a la descolonización en el continente y el fin del régimen del *apartheid*. Sin embargo, desde un análisis pragmático, es posible argumentar la utilidad de restablecer relaciones con Estados Unidos sobre la intervención en África. A pesar de que la intervención ha posibilitado ganar nuevos votos en los foros internacionales para los intereses cubanos, el intercambio comercial en mercancías no es considerable comparado con otras regiones. No obstante, a pesar de la existencia del embargo/bloqueo, Estados Unidos es uno de nuestros principales exportadores.

Esto ha llevado a un coste de oportunidad extremadamente elevado. A día de hoy, no ha existido mejor ocasión para intentar normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En el período histórico de las administraciones Nixon y Carter aún no se había organizado el fuerte lobby cubanoamericano y el embargo/bloqueo no había sido codificado por el Congreso norteamericano, por lo cual el Ejecutivo mantenía en gran medida su poder de negociación con Cuba.

Uno de los mayores elementos de tensión que encuentra la política exterior de Cuba es el caso de Corea del Norte. La relación con el Estado norcoreano no aporta réditos considerables a la Isla, más allá de la retórica comunista compartida. El apoyo al régimen de Corea del Norte, sitúa la política cubana en un espacio incómodo ante la comunidad internacional. El ejemplo más reciente de acciones que cuestan credibilidad a Cuba radica en el caso del buque norcoreano Chong Chon Chang, detenido en Panamá tras descubrirse que transportaba armamento de manera clandestina. Más allá de analizar la legalidad de la operación, a raíz de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el desarrollo del programa nuclear norcoreano, el caso resulta un ejemplo que ha impactado negativamente la política exterior cubana ante la opinión pública internacional.

En el año 2009 quedó sin efecto la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. El gobierno del presidente Raúl Castro ha manifestado su rechazo a solicitar el reingreso de Cuba a la más importante organización hemisférica, basando esta decisión en cuestiones históricas y en una visión ideológicamente opuesta al mandato e historia de la OEA. A punto de comenzar un nuevo gobierno en el 2018, previsiblemente, estaría en orden sostener un análisis basado en elementos pragmáticos sobre la utilidad o no de mantener a Cuba apartada de la OEA y los distintos mecanismos e instituciones que la conforman. A pesar del intento de establecer la CELAC como una organización sin la influencia norteamericana, esta no ha sido capaz de ganar tracción más allá de la realización

de las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, y resulta cuestionable su éxito a largo plazo debido a la reticencia de numerosos países en proveer fondos para instituciones permanentes. La ausencia de Cuba en la OEA priva a su política exterior de voz y voto en decisiones hemisféricas, además de impedirle participar en los distintos organismos, programas y proyectos que esta organización mantiene. Uno de estos organismos es el Banco Interamericano de Desarrollo.

En momentos que Cuba necesita grandes sumas de inversión extranjera y créditos (además de la voluntad política necesaria) para desarrollar la economía, la pertenencia a las principales instituciones financieras internacionales resulta una cuestión de primer orden. La membresía a dichas instituciones debería pensarse como una prioridad. No solo para obtener créditos con más bajos intereses, sino también para mejorar la confianza de los inversionistas extranjeros, dado el prestigio de dichos organismos con su constante calificación de crédito AAA, y su combinación de conocimiento y recursos financieros. A pesar de que el proceso debe comenzar por una solicitud formal por el Gobierno cubano, no podemos obviar que será un proceso largo, y obtener la membresía en dichas instituciones tiene el impedimento de la existencia del bloqueo/embargo de Estados Unidos a Cuba, más allá de la voluntad política del Gobierno cubano.

Lamentablemente, la Isla se encuentra en esta posición debido a las decisiones de no realizar la contribución capital requerida para ser declarada miembro fundador del BID, y retirar a Cuba del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Durante décadas el discurso revolucionario ha acusado a tales organismos de promover una agenda neoliberal de recortes de gastos públicos y privatización de compañías estatales mediante el “Consenso de Washington”. La decisión de no pertenecer a estos organismos, no obstante, ha resultado ser un error a largo plazo si tomamos en cuenta las condiciones actuales en que se encuentra la economía cubana. Debido a su ausencia en las instituciones financieras internacionales, Cuba ha tenido que acudir de manera reiterada a los clubes de Londres y París, donde los intereses de los prestamistas son más elevados. Más recientemente, el enfoque del Gobierno cubano hacia las mencionadas instituciones al parecer ha tomado un tono más pragmático, pues al menos un alto diplomático cubano ha manifestado que Cuba no se opone por principio a alguna relación con las mencionadas instituciones financieras internacionales.

Por las condiciones geopolíticas actuales es posible que estemos ante el inicio del fin de la *pax americana*, y que el sistema internacional se dirija hacia un futuro carente de superpotencias globales. El rol de las potencias estará más concentrado en dominar sus respectivas áreas de influencia geográfica. Es probable que Estados Unidos retroceda en su papel de superpotencia mundial, y ejerza una política exterior más dirigida hacia el hemisferio occidental. Esto, indiscutiblemente, traerá nuevos retos y oportunidades para Cuba, la cual tendrá que reorientar su política exterior ante las condiciones que se avizoran teóricamente.

Por Eugenio R. Balari

La especie humana se encuentra ante una encrucijada de definiciones sobre su existencia y perspectivas; porque se enfrenta a la permanencia de enormes desigualdades económicas y sociales, entre naciones y al seno de las mismas sociedades. Lo mismo sucede por la intensificación de las inseguridades o la amplitud de la pobreza, cuando lo que necesitamos es vivir en un mundo *más seguro, sostenible y justo*. Abandonar la lucha contra los más inquietantes desafíos de la humanidad no parece solidario, ni prudente. Desde hace décadas la humanidad se inquieta por los problemas ambientales, a consecuencia del irracional uso que se hace de los recursos naturales, esenciales para poder vivir y desarrollarnos.

Los más respetados científicos de las ciencias naturales y ecológicas, vienen alertando a las Naciones Unidas y a los países que la integran (con sólidos argumentos científicos), acerca de los daños (algunos irreparables) que la sociedad moderna le ocasiona a la “Casa de Todos”, nuestro planeta Tierra, producto de su voracidad industrialista y el desarrollo científico/tecnológico. Subestimar los problemas ambientales (y específicamente el calentamiento global), es ingenuo o mal intencionado, porque se vive una época diferente a la de siglos anteriores, donde existía un alto grado de armonía entre los humanos y el medio natural.

A medida que crece la cantidad de personas en el planeta, se modifica la composición química de la atmósfera y los recursos biológicos del sistema terrenal desaparecen o se reducen. Los impactos de la civilización industrial/tecnológica imponen al individuo, y a la sociedad en general, enfrentar el enorme reto global de garantizar, con éxito, el fenómeno del crecimiento demográfico y el acelerado aumento del consumo; cuestiones que, en una mirada convencional, no lucen por ahora compatibles.

Han desaparecido millones de kilómetros cuadrados de selvas tropicales y bosques templados; igualmente decenas de miles de especies necesarias a la complementariedad de todos los que habitamos la Tierra. Se han visto afectados los ecosistemas y muchas tierras laborables, se han contaminado las aguas, dañado las ciénagas, las zonas costeras y los arrecifes coralinos, entre otros elementos; todo ello como consecuencia de un modelo de desarrollo, que esencialmente estimula el afán de lucro, el consumismo, conceptos de vida irracionales y una voraz competitividad, con frecuencia nada ética. Pero las áreas naturales poseen una función vital en los llamados sistemas ecológicos, dado que aportan los equilibrios a nuestro planeta. Diversos intereses se mueven en los marcos de un modelo que ha sido depredador del medio ambiente; pero existen los que no desean reconocerlo, bien por intereses económicos, ignorancia, o subestimación a los impactos se producen.

Resulta frustrante para muchas personas la conducta indolente de ciertos gobiernos, que en vez de proceder contra las prácticas perversas contra los recursos naturales, se convierten en cómplices de estas. La situación actual de Estados Unidos resulta significativa, pues de ser ha dejado de ser “aliado del planeta”. La actual Administración republicana, que niega la importancia y la urgencia de enfrentar el cambio climático, le da la espalda a la lucha que se realiza para mejorar la situación y prefiere solo mejorar su economía doméstica.

Lógicamente, las especulaciones sobre tal decisión han sido diversas y amplias: aislacionismo de Estados Unidos, subestimación científica, nacionalismo ingenuo, ignorancia, insensibilidad humana, exacerbación económica, ausencia de solidaridad universal, o afán de predominio mundial, etcétera.

Por la razón que sea, el Presidente norteamericano retiró a su país de los “Acuerdos de París”, establecidos dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y firmados por 195 países del mundo. Paradójicamente, Estados Unidos, la nación más contaminadora del planeta, se aparta de la lucha mundial contra la inquietante situación climatológica. Así, pone de manifiesto voluntarismo en política y desconoce los esfuerzos realizados durante años de trabajo por la comunidad científica internacional.

¿Qué mensaje envía al mundo ésta Administración? Sencillamente que Estados Unidos y su Administración republicana le dan la espalda a las cuestiones del cambio climático y que no cree o subestima la labor de los científicos y las ciencias ambientales. Esto ocurre en paralelo a cuando los “Acuerdos de París”, precisamente, comienzan a alcanzar significativos avances e importantes acuerdos internacionales. Los investigadores no han sido pocos, ni de un solo país, porque son cientos, miles de científicos de todas las latitudes del planeta, que nos han alertado sobre los problemas ambientales y riesgos por los que la humanidad atraviesa; sugiriendo, además, las medidas a tomar: unas más graduales y otras de mayor urgencia.

Otra pregunta sería: ¿por qué darle la espalda a los “Acuerdos de París” en vez de honrarlos, en detrimento de intereses universales y de la seguridad de la sociedad contemporánea? Resulta difícil responderla cuando aparecen avances, se reducen las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y comienza a recuperarse la capa de ozono.

Estados Unidos y China son las dos naciones más contaminadoras del planeta, ambas se comprometieron (con independencia de cualquier consideración), a contribuir a tales intereses mundiales; decidiéndose ambas naciones a participar y honrar los acuerdos. China ha reiterado hacerlo y lo continúa haciendo; Estados Unidos y su actual Administración se han apartado y se han desentendido de ello.

La ratificación de los “Acuerdos de París” lo hubieran agradecido todos los países y sociedades del mundo; pues se trata de un interés universal y de proteger la sobrevivencia de las futuras generaciones, la de nuestros hijos y nietos. Pocas veces la ciencia ha sido tan prolifera, investigando un asunto como el calentamiento global; por lo que no resulta necesario abundar en las probables y perjudiciales consecuencias. Lo que ha quedado claro es el desacuerdo y malestar originado internacionalmente y en amplios sectores de la opinión pública estadounidense, especialmente entre los numerosos movimientos ambientalistas y sus simpatizantes.

Por mi parte, aprovecho los comentarios para expresar mi consideración hacia los científicos ambientalistas, que desde todas partes del mundo y durante décadas de trabajo (con seriedad y rigor científico), han alertado sobre las consecuencias de las actuaciones humanas, y han sugerido opciones más amigables para el desarrollo presente y futuro.

Parece absurdo que esta Administración excluya universalmente a la nación americana y promueva su aislacionismo; descomprometiéndose de acuerdos en los que participan la mayoría de los países del mundo (195) y cuyas decisiones resultan de beneficio para todos; incluido, por supuesto, el pueblo norteamericano.

Más temprano que tarde la inteligencia, el humanismo y la sabiduría del ciudadano estadounidense sacará sus conclusiones; a no ser que la Administración republicana recapacite, o repare a tiempo su

unilateral decisión. De no ser así, preveo que millones de ciudadanos estadounidenses valorarán de manera crítica la postura adoptada por Trump y los resultados se apreciarán cuando los estadounidenses nuevamente acudan a las urnas.

Mientras tanto, los ciudadanos conscientes deberán seguir trabajando por un mundo sostenible, necesariamente más justo y, en consecuencia, creando condiciones para que todos podamos vivir y nuestra cultura no sea adversaria a las necesidades de continuar desarrollándonos.

Al negarse la Administración del presidente Trump a ratificar los “Acuerdos de París” sobre el Cambio Climático, debe adquirir conciencia que contrajo una enorme responsabilidad histórica y le propicia un daño sensible a la humanidad y al planeta donde vivimos; pero, a su vez, ha colocado a Estados Unidos y a sus ciudadanos, en una lamentable y embarazosa situación ante los ojos del mundo.

Domingo Amuchastegui (La Habana, 1940). Licenciado en Historia por la Universidad Pedagógica; master en Educación por la Florida International University y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Fue Jefe de Departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y en la OSPAAAL. Se desempeñó como analista de inteligencia y profesor de Historia en la Universidad Pedagógica y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI). Ha publicado *Historia Contemporánea de Asia y África* (en cuatro volúmenes) y *Palestina: dimensiones de un Conflicto*.

Luis Carlos Battista (La Habana, 1988). Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y en Relaciones Internacionales por Florida International University (FIU). Ha publicado sobre las relaciones exteriores de Cuba y Estados Unidos en espacios como *OnCuba Magazine* y *Cubaencuentro*. Además, mantiene una columna de opinión en *El Toque Cuba* sobre temas domésticos y juveniles y ha colaborado con instituciones como la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU). Es investigador adjunto del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Actualmente es candidato a Máster en Leyes (LL.M.) en Georgetown University y becario en *International Finance Corporation*, miembro del Banco Mundial, en Washington, D.C.

Eugenio Rodríguez Balari (La Habana, 1938). Licenciado en Historia, periodista y doctor en economía. Se desempeñó como director de las publicaciones nacionales *Mella* y *Opina*, de esta última fue su fundador. Fue fundador/presidente del Instituto Cubano de Investigación de la Demanda Interna. Libros publicados: *Remember, Cuba USA: palabras cruzadas*; *La Revolución acosada*.

Gabriel Vommaro es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), de París. Es investigador-docente en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), donde dirige el Área de Política, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

Jorge Serguera Navarro. Ingeniero en sistema de guiado de misiles antiaéreos y Licenciado en Ciencias Militares. Obrero en una fábrica de ventana en Miami, Estados Unidos.

Camilo Serguera Navarro. Ingeniero en sistemas de guiado de misiles antiaéreos. Director de una planta de productos electrónicos de alta tecnología en California, Estados Unidos.

Che Serguera Lagache. Biólogo molecular. Graduado de medicina en Cuba. Investigador científico en París, Francia.

Carmelo Mesa-Lago (La Habana, 1934). Licenciado Derecho Universidad de La Habana, Doctorado en Derecho por la Universidad Madrid, master en Economía por la Universidad de Miami, y doctor en Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell. Catedrático Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Profesor o Investigador Visitante en once universidades o institutos de investigación en Alemania, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, España, Reino Unido y Uruguay. Ha impartido conferencias en 39 países. Ex-presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ha recibido el Premio Inter-

nacional de la OIT al Trabajo Decente, compartido con Nelson Mandela. Posee, además, el Premio Alexander von Humboldt. Autor o editor de 94 libros y 303 artículos o capítulos en libros sobre economía cubana, sistemas económicos comparados y economía de la seguridad social, publicados en 7 idiomas en 34 países.

Joana Salém es doctora en Historia Económica por la Universidad de São Paulo (USP), graduada en Historia (USP) y Máster en Desarrollo Económico (UNICAMP). Autora del libro “História agrária da revolução cubana: dilemas do socialismo na periferia” (São Paulo, 2017).

Manuela Celi Moscoso. Obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y es doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid. Fue coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Ecuador y ha trabajado también como consultora y analista política en el sector público.

René J. Reyes Medina. Egresado del Colegio María Auxiliadora en Villa Carolina, Puerto Rico y de los Grados en Bachillerato en Ciencias Políticas y Maestro en Economía, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Su investigación de tesis fue sobre el “Costo Social de la Lucha contra el Crimen y la relación de este con la Economía Lícita”. Ha investigado sobre temas, relacionados a inflación e impuestos en Puerto Rico. Actualmente, es obrero unionado del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Planificación y labora como Analista de Planificación Económica y Social, en el gobierno de Puerto Rico. Aquí ha tenido un año y medio de experiencia en el Programa de Planificación Económica y Social (PPES), de la Junta de Planificación. Durante este trayecto, ha laborado con investigaciones sobre diversos temas para la revista Resumen Económico del PPES y en otros proyectos. Natural del Pueblo de Río Grande.

“Para Cuba, lo que hoy sucede dentro de Estados Unidos, tiene relevancia. La congelación de las relaciones, después del breve “calentamiento” producido por Obama, es el regreso a los viejos esquemas de hostilidad entre ambas naciones. El embargo/bloqueo se mantendrá por el futuro previsible. Es posible que se reduzcan los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba y que esto tenga un cierto impacto en los sectores estatales y privados de la industria turística. Pero estos viejos esquemas son obsoletos y están condenados a desaparecer.

El grupo cubano no tiene que desanimarse. Es muy importante no generar una dependencia decisiva de la economía cubana del turismo o de los negocios con los norteamericanos. O con cualquier otro Estado. Cuba tiene que encontrar y explotar con efectividad todas las posibilidades que se presenten de optimizar y hacer viable su economía nacional y su sistema político”.